

Com. Argen. Suc. 43 (b)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta Nº 420

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

30ª REUNION — Continuación DE LA 4ª SESION ORDINARIA
DE PRÓRROGA (ESPECIAL)

DICIEMBRE 7 DE 1993

PRIMERA PARTE

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri
y Luis Alberto Martínez

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

AGUADO, Jorge Rubén
AGÚNDEZ, Jorge Alfredo
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ÁLVAREZ, Carlos Alberto
ÁLVAREZ, Héctor Claudio
ÁLVAREZ ECHAGÜE, Raúl Angel
ÁLVAREZ GARCÍA, Normando M.
AMADEO, Eduardo Pablo
ANTELO, José María
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGÜELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDÁRIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Juan Carlos
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BARBERÁ, Eliseo
BARBOTTI, Atilio Ector
BASSANI, Ángel Marcelo
BAUM, Daniel
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BELTRÁN, Carlos Roberto
BENEDETTI, Jorge Enrique
BERICUA, Jorge
BERMÚDEZ, María del Pilar
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BISCHOF, Enrique Alberto
BLANCO, Oscar Alberto
BORDA, Osvaldo
BORDÍN CAROSIO, Hugo Antonio
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BREARD, Noel Eugenio
BROOK, Mario Carlos
CABRERA, Gerardo
CAFIERO, Juan Pablo

CALLEJA, Ovidio Amílcar
CAMANO, Dante Alberto
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMANO, Graciela
CANATA, José Domingo
CARRERAS, Porfirio Mario
CASARI de ALARCIA, María Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Aníbal
CAVALLARI, Juan José
CEBALLOS, Walter Alberto
CICARE, Miguel Ángel
CORCHUELO BLASCO, José M.
COSSOS PÉREZ, Juan Nicolás
CRÁMARO, Hugo Arnaldo
CROSTELLI, Juan Carlos
CRUZ, Washington Jesús
D'ALESSANDRO, Miguel B.
D'AMBROSIO, Ángel Mario
DAUD, Jorge Carlos
DE MARTINO, Víctor Amador
DI TULLIO, Héctor Horacio
DURANONA y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
DUSSOL, Ramón Adolfo
ECHEVARRÍA, Luis María
ELÍAS, Ángel Mario
ESPECHE, Alberto Luis
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.
FAJARDO, Juan Carlos
FALLETTI, Julio César José
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FELLNER, Eduardo Alfredo
FERNÁNDEZ, Roberto Enrique
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo C.
FERRADÁS, Miguel Enrique
FESCINA, Andrés Julián
FIGUEROA, Pedro Octavio
FOLLONI, Jorge Oscar
FORNERÓN, Lino
FRIGERIO, Octavio Oscar
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Pedro Alberto
GARCÍA CUERVA, Ignacio S.

GARCÍA de NOVELLI, María C.
GARCÍA MORENO, Miguel
GARGIULO, Pablo
GATTI, Héctor Ángel
GAUNA, Juan Octavio
GERMANO, Alberto Raúl
GIMÉNEZ REBORA, José
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ, José Ernesto
GÓMEZ, Roque Julio César
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ, Luis Mario
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GASS, Gabriela M.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Luis Serafin
GUZMÁN, María Cristina
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERNÁNDEZ, Santos Abel
HERRERA, Bernardo Eligio
HUMADA, Raúl
IGLESIAS, Evaristo Constantino
ITURRE, César Eusebio del Valle
KELLY, Elsa Diana Rosa
KOTH, Carlos
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LÓPEZ de ZAVALÍA, Fernando J.
LYNCH, Carlos Alberto
MACHADO, Oscar Alfredo
MACHICOTE, Jorge Raúl
MANFREDOTTI, Carlos
MANNY, José Juan
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCÓ, Jorge Raúl
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARELLI, Mabel G. de
MARINO, Juliana Isabel
MARTÍNEZ, Luis Alberto
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael
MATZKIN, Jorge Rubén

MENDOZA, Claudio Ramiro
 MENDOZA, Martín
 MICHELI, Marco Aurelio
 MICHTE, Salomón Antonio
 MOLARDO, Elvio Francisco
 MOLINAS, Ricardo Francisco
 MONTEVERDE, Carlos Roberto
 MORE, Juan Manuel
 MUÑAGURRIA, Marcelo Julio
 MUÑOZ, Marcelo Bernardo
 NATALE, Alberto Adolfo
 NIKTSCH, Hugo Víctor
 NINO, Jorge
 NOVAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORQUIN, Leopoldo Manuel
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 ORTIZ PELEGRINI, Miguel A.
 PARADA, Alberto
 PARENTE, Rodolfo Miguel
 PARRILLI, Oscar Isidro José
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERALTA, Aníbal Pedro
 PIERRE, Alberto Reinaldo
 PIOTTE, Alberto Daniel
 PRAT, Alfredo Ernesto
 PRONE, Alberto Josué
 PURICELLI, Arturo Antonio
 RAIBONDI, Carlos Alberto
 RE, Ricardo Horacio
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 RODRIGUEZ, Raúl Eduardo
 RODRIGUEZ SASUDO, Hugo B.
 ROIG, Angel
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 ROY, Irma
 RUIZ, Angel Rafael
 SAADI, Luis Alberto
 SARIO, Juan Carlos
 SACKS, Rubén Rodolfo
 SALUSO, Horacio Ramón
 SALVADOR, Daniel Marcelo
 SANCHEZ GALDEANO, Roque
 SCERZI, Carlos José

SEGUI, Hector Miguel
 SODERO NIEVAS, Víctor Hugo
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA ARCH, José María
 SPINOSA, Augusto Juan
 STORANI, Conrado Hugo
 SUCARIA, Nefef
 SUEIRO, Carlos Adolfo
 TOPA, Raúl Roque
 TOTO, Francisco Patricio
 TROYANO, Silvia Elena
 URIONDO, Luis Enrique R.
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VARELA BARRIO, Juan Carlos
 VARELA CID, Eduardo
 VÁZQUEZ, Ricardo Héctor
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIQUEIRA, Horacio Gustavo
 YOMA, Jorge Raúl
 ZAMBIANCHI, Carlos
 ZARACHO, Evelio Argentino

ORGÁZ, Carlos Alfredo
 PICCININI, Ana Ida
 RODRIGUEZ, José
 SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTES, CON AVISO:

ACENOLAZA, Florencio Gilberto
 ALENDE, Oscar Eduardo
 BALESTRA, René Helvecio
 BERTHONGARAY, Antonio Tomás
 BRUNATI, Luis Pedro
 BRUZZO, Omar Abdullio
 CAIMMI, Fernando Enrique
 FERNÁNDEZ, Roberto Carlos
 FERREYRA, Eduardo Mario
 FONTELA, Moisés Eduardo
 GAN, Fernando Pascual
 GIOJA, José Luis
 GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
 HERRERA, Luis Fernando
 HERRERA ARIAS, Manuel H.
 IBARRECHE, Julio César
 JALIL, Luis Julián
 MARCOLLI, Juan Miguel Ángel
 MARTÍN DE NARDO, Marta
 MENEGHINI, Javier Reynaldo
 MOREAU, Leopoldo Raúl Guido
 NACUL, Miguel Camel
 PAROLA, José María
 PESCE, Félix
 PINTO, Guillermo
 PROFILI, Gerardo Pedro
 SAMID, Manuel Julio
 SANTÍN, Eduardo
 SUREDA, Ángela Gerónima
 TACTA DE ROMERO, Emma A.
 TOMA, Miguel Ángel
 VANOSSI, Jorge Reinaldo
 VARELA, Néstor Ángel
 VÁZQUEZ, Roberto
 ZAMORA, Federico
 ZAMORA, Luis Fernando
 ZAVALA, Gilberto Antonio
 ZICARELLI, Orlando

AUSENTES, EN MISIÓN OFICIAL:

ACHEM, Antonio
 ADAIME, Felipe Teófilo
 ALABI, Ernesto Salim
 LOSADA, Luis Enrique
 LOUTAIF, Julio César
 QUEZADA, Rodolfo Héctor

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION POR LA HONORABLE CAMARA:

ALSOGARAY, Alvaro Carlos
 CAPUTO, Dante Mario
 FLORES, Rafael Horacio
 GUERRERO, Antonio Isaac
 IBAÑETA, José María
 MAGGI, Juan Alberto

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 19 reunión (Sesión preparatoria), de fecha 28 de abril de 1993.

SUMARIO

1. Moción de orden formulada por el señor diputado López Arias de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer la inclusión de diversos asuntos en el temario de la sesión. Se aprueba. (Pág. 3657.)
2. Moción del señor diputado López Arias de que se traten sobre tablas los asuntos a los que se refieren los números 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de este sumario, los dictámenes contenidos en las órdenes del día números 1.725 (3.657-D-93) y 1.726 (2.493-D-92 y 3.658-D-93) y el proyecto de ley en revisión contenido en el expediente 101 S.-93. Se aprueba. (Pág. 3658.)
3. Consideración de los asuntos cuya votación conjunta dispuso la Honorable Cámara. (Pág. 3659.)

- I. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa Nacional y de Recursos Naturales y

Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (62-S-93). Se sanciona definitivamente. (Ley 21.292.) (Pág. 3659.)

- II. Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el acuerdo entre la República Argentina y la República de Hungría para la promoción y protección recíproca de inversiones (16-P. E.-93). (Pág. 3672.)

- III. Dictamen de las comisiones de Legislación General, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda en el

- CXXXVI. Proyecto de declaración del señor diputado Albamonte por el cual se solicita al Poder Ejecutivo se instruya a los agentes de seguridad en relación al libre estacionamiento de vehículos pertenecientes a personas discapacitadas (2.906-D.-93). (Pág. 3888.)
- CXXXVII. Proyecto de resolución del señor diputado Sodero Nievas sobre creación de una subcomisión encargada de proyectar la reforma del Código Penal (937-D.-93). (Pág. 3888.)
- CXXXVIII. Proyecto de declaración de los señores diputados Vicchi y Orquín por el cual se solicita al Poder Ejecutivo la construcción de un complejo aduanero entre el paso del Pehuénche y la localidad de Las Loicas, provincia de Mendoza (1.677-D.-93). (Pág. 3889.)
- CXXXIX. Proyecto de declaración del señor diputado Vicchi por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciación de estudios técnicos y de factibilidad, juntamente con el gobierno de la República de Chile, para la construcción de un complejo ferroviario que una las ciudades de Mendoza (Argentina) y Valparaíso (Chile) (2.139-D.-93). (Página 3890.)
- CXXX. Proyecto de declaración del señor diputado Beltrán por el que se solicita al Poder Ejecutivo la concreción de la construcción de una biblioteca pública popular en el barrio Santa Inés de Resistencia, provincia del Chaco (3.525-D.-93). (Pág. 3891.)
- CXXXI. Proyecto de declaración del señor diputado Agúndez por el que se solicita al Poder Ejecutivo que el Instituto de Tanatología forense brinde sus servicios a las provincias que así lo requieran cuando la complejidad de las causas judiciales así lo determinen (3.365-D.-93). (Pág. 3891.)
- CXXXII. Proyecto de declaración de los señores diputados Agúndez y Bruzzo por el que se solicita al Poder Ejecutivo la constitución de un foro consultivo de policía criminal (3.378-D.-93). (Página 3892.)
- CXXXIII. Proyecto de resolución del señor diputado Di Tulio por el que se solicita al Poder Ejecutivo la determinación de responsabilidades y sanciones respecto de las distorsiones observadas en los precios de los combustibles (4.093-D.-93). (Pág. 3893.)
- CXXXIV. Proyecto de ley del señor diputado De Martino por el que se dona a la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires una fracción de terreno ubicado en Bernal, provincia de Buenos Aires (1.925-D.-93). (Pág. 3893.)
- CXXXV. Proyecto de ley del señor diputado Martínez por el que se crea la Red Federal de Informática Parlamentaria (302-D.-93). (Pág. 3894.)
- CXXXVI. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 3-I a 3-CXXXV de este sumario. Se sancionan. (Página 3893.)
4. Consideración del dictamen de las comisiones de Economía, de Comercio, de Presupuesto y Hacienda y de Economías y Desarrollo Regional en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reglamentación de las actividades en las zonas francas (106-P.E.-92). Se aprueba en general luego de rechazarse una moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado Sánchez Caldeano. (Pág. 3896.)
 5. Moción de orden formulada por el señor diputado Corchuco Blasco de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para proponer el tratamiento de diversos asuntos. Es rechazada. (Pág. 3921.)
 6. Moción de orden formulada por el señor diputado Di Tulio de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del asunto al que se refiere el número 7 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3922.)
 7. Moción del señor diputado Di Tulio de preferencia para el proyecto de ley de su autoría sobre régimen jubilatorio de funcionarios, empleados, agentes del Estado nacional, organismos descentralizados o autárquicos y empresas públicas que se acojan a regímenes de retiro voluntario (2.298-D.-93). Se aprueba. (Pág. 3922.)
 8. Moción de orden formulada por la señora diputada Marino de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del proyecto de resolución sobre atribución del carácter de permanente a la Comisión Bicameral sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (3.443-D.-93). Es rechazada. (Pág. 3922.)
 9. Mociones de orden formuladas por el señor diputado Pepe de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del asunto al que se refiere el número 14 de este sumario y del proyecto de resolución de su autoría sobre otorgamiento de un diploma a cada fuerza armada y de seguridad en

- reconocimiento de las tareas cumplidas integrando tropas destinadas por las Naciones Unidas (2.970-D-93). Se aprueba la primera y es rechazada la segunda. (Pág. 3923.)
10. **Moción** del señor diputado **Pepe** de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3924.)
 11. **Moción** del señor diputado **Balestrini (A. E.)** de reconsideración del asunto al que se refiere el número 8 de este sumario. Es rechazada. (Pág. 3924.)
 12. **Moción** del señor diputado **Di Tulio** de reconsideración de la moción de orden de apartamiento de las prescripciones del reglamento formulada por el señor diputado **Pepe** respecto del proyecto de resolución contenido en el expediente 2.970-D-93, a la que se refiere el número 9 de este sumario. Es rechazada. (Pág. 3925.)
 13. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 4 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 3925.)
 14. **Consideración** del proyecto de declaración de los señores diputados **Michelli** y **Pepe** por el cual se solicita al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires la imposición del nombre de **Vicente Solano Lima** a una calle o paseo de la Capital Federal (3.646-D-93). Se sanciona. (Página 3934.)
 15. **Consideración** del proyecto de ley del señor diputado **Mendoza (C. R.)** sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas (865-D-93). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 3935.)
 16. **Consideración** del proyecto de ley en revisión sobre creación de la Universidad Nacional de la Rioja (115-S-93). Se sanciona definitivamente. (Ley 24.299.) (Pág. 3937.)
 17. **Consideración** del proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales para el establecimiento de una sede académica en la Argentina (108-S-93). Se sanciona definitivamente. (Ley 24.300.) (Pág. 3938.)
 18. **Consideración** del dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Drogadicción en los proyectos de ley de los señores diputados **Algarín**, **Parola** (5.119-D-92), **Ortiz Maldonado** y otros (457-D-93), **Bischoff** y otros (992-D-93) y **Hernández (A. M.)** (1.452-D-93) sobre modificación de la Ley 23.727, de prevención y lucha contra el narcotráfico. Se sanciona. (Pág. 3938.)
 19. **Consideración** de la insistencia del Honorable Senado en su sanción en relación al proyecto de ley registrado bajo el número 24.251 —devuelto sin promulgar por el Poder Ejecutivo—, sobre creación de un juzgado federal en la ciudad de Neuquén (130-S-93). Se confirma la sanción definitiva. (Pág. 3937.)
 20. **Consideración** del proyecto de ley del señor diputado **Albamonte** y otros sobre creación del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (3.051-D-93). Se sanciona. (Pág. 3955.)
 21. **Consideración** del proyecto de ley en revisión sobre régimen del ejercicio profesional de los licenciados en nutrición (306-D-92). Se sanciona definitivamente. (Ley 24.301.) (Pág. 3960.)
 22. **Consideración** del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Población y Recursos Humanos, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre donación de fracciones de terreno correspondientes a la reserva nacional **Nahuel Huapi** y **Parque Nacional Nahuel Huapi** a la provincia del Neuquén (131-S-92). Se sanciona definitivamente. (Ley 24.302.) (Pág. 3962.)
 23. **Consideración** del dictamen de la Comisión de Finanzas en el proyecto de ley del señor diputado **Balestrini (M. A.)** y otros sobre desempeño de la sindicatura en los procesos de quiebra de entidades financieras liquidadas con anterioridad a la vigencia de la ley 24.144 (3.657-D-93). Se aprueba en general. (Pág. 3967.)
 24. **Manifestaciones** de despedida a los señores diputados que concluyen sus mandatos. (Pág. 3969.)
 25. **Apéndice:**
 - A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 3970.)
 - B. Asuntos entrados:
 - Comunicaciones del Honorable Senado. (Página 4036.)
 - Dictámenes de comisión. (Pág. 4036.)
 - Proyectos de ley. (Pág. 4042.)
 - Proyectos de resolución. (Pág. 4042.)
 - Proyectos de declaración. (Pág. 4042.)
 - C. Inscripciones solicitadas por los señores diputados:
 1. **Parada**. (Pág. 4043.)
 2. **Bischoff**. (Pág. 4045.)
 3. **Coronelato Blasco**. (Pág. 4046.)
 4. **Loutaif**. (Pág. 4049.)
 5. **Palloni**. (Pág. 4051.)
 6. **Sánchez Galdeano y Topa**. (Pág. 4052.)
 7. **Barbott**. (Pág. 4054.)
 8. **Larraburu**. (Pág. 4055.)
 9. **Falletti**. (Pág. 4056.)
 10. **Varela Cid**. (Pág. 4056.)

nes de los diversos países latinoamericanos en las materias de interés común. Corresponde por ello revisar y actualizar las normas básicas que regulan los acuerdos de convergencia y cooperación a través de una multilateralización progresiva.

La creación del Consejo Federal Parlamentario y su órgano de ejecución a través de la Red Federal de Informática Parlamentaria, constituyen las vías idóneas e insoslayables para la consecución de tales objetivos.

Sin caer en la ingenuidad de atribuir a un factor tecnológico la solución de problemas de naturaleza política, no se puede negar que la abstención o el uso de una nueva tecnología puede modificar los términos de un problema político o determinar la transferencia de un poder real de un sujeto a otro, de un país a otro.

No hay real debate democrático sin igualdad de acceso a la información, ni equilibrio de los poderes sin paridad de conocimientos.

CXXXVI

PRONUNCIAMIENTO

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar si se aprueban —en general y en particular— los proyectos cuya consideración conjunta ha dispuesto la Honorable Cámara.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Quedan sancionados los respectivos proyectos de ley, de declaración o de resolución¹.

Se harán las comunicaciones correspondientes.

4

**REGLAMENTACION DE LAS ACTIVIDADES
EN LAS ZONAS FRANCAS**
(Orden del Día Nº 1.653)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Economía, de Comercio, de Presupuesto y Hacienda y de Economías y Desarrollo Regional han considerado el mensaje 291 y el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se reglamentan las actividades de las zonas francas, y han tenido a la vista los proyectos referidos a la misma temática, presentados por los señores diputados López Arias y Barberá, de ley (expediente 111-D-92); Orquín, de ley (expediente 489-D-92); Peralta, de ley (expediente 1.241-D-92); Leconte y Garay, de ley (expediente 849-D-92); Peralta, de ley (expediente 1.241-D-92); Toto y otros, de ley (expediente 1.461-D-92); Hardy, de ley (expediente 2.781-D-92); Vicchi y otros, de ley (expediente 3.941-D-92); Parada y otros, de ley (expediente 3.973-D-92); Corchuelo Blasco, de ley

(expediente 4.370-D-92); Loutaif y otros, de ley (expediente 48-D-93); Flores, de ley (expediente 346-D-93); Sodero Nievas, de ley (expediente 522-D-93); Pesce, de ley (expediente 2.127-D-93); Vicchi, de ley (expediente 2.140-D-93); Barbotti, Atilio, de ley (expediente 2.256-D-93); López Arias y Barberá, de ley (expediente 2.923-D-93); Aceñolaza, de ley (expediente 3.103-D-93); Fajardo y otros, de ley (expediente 3.444-D-93); Gómez de Marelli, de ley (expediente 3.476-D-93); Guzmán, de declaración (expediente 2.041-D-93); y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Para los efectos de esta ley se entenderá por:

- a) Zona franca: es el ámbito que se define en el artículo 590 del Código Aduanero;
- b) Territorio aduanero general: es el ámbito que se define en el apartado 2 del artículo 2º del citado código;
- c) Territorio aduanero especial: es el ámbito que se define en el apartado 3 del artículo 2º del mismo código;
- d) Terceros países u otros países: es el ámbito geográfico sometido a la soberanía de otros países incluidos los enclaves constituidos a favor de otros Estados.

Disposiciones generales

Art. 2º — Facúltase al Poder Ejecutivo para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo con carácter de excepción crear adicionalmente no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser ubicadas en aquellas provincias o regiones geográficas, que por su situación socioeconómica crítica justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción.

Art. 3º — La creación de las zonas francas previstas en el artículo anterior se podrá materializar en aquellas provincias que hayan adherido a las previsiones de la presente, a través de un convenio de adhesión a ser celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y los titulares de los gobiernos de las provincias.

Dicho convenio de adhesión deberá ser aprobado en todos sus términos por ley provincial.

Objetivos

Art. 4º — Las zonas francas tendrán como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando que, el aumento de la eficiencia y la disminución de costos asociados a las actividades que se desarrollen en ellas, se extiendan a la inversión y al empleo.

¹ Véase el texto de las sanciones en el Apéndice, a partir de la página 3970.

El funcionamiento de las zonas francas será convergente con la política comercial y sus medidas, debiendo contribuir a la liberación y al crecimiento de la economía, incorporándose plenamente en el proceso de integración regional.

Actividades

Art. 5º — Las zonas francas deberán constituirse en polos de desarrollo de las regiones donde se establezcan mediante la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles en la misma, dentro de las condiciones fijadas en la presente ley y en los decretos que la reglamenten.

Art. 6º — En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales, esta última con el único objeto de exportar la mercadería resultante a terceros países. No obstante lo señalado precedentemente, en las zonas francas se podrán fabricar bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general, a fin de admitir su importación a dicho territorio. Los bienes de capital a que se hace referencia en el párrafo anterior, a fin de su nacionalización, seguirán el tratamiento establecido en el régimen general de importación de la Nomenclatura del Comercio Exterior (NCE) y de las restantes normas tributarias que corresponda.

A los efectos del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación deberá confeccionar un listado de las mercancías pasibles de dicho tratamiento y establecer los mecanismos de autorización de importación y control que considere convenientes.

Art. 7º — En las zonas francas las mercaderías pueden ser objeto de las operaciones necesarias para asegurar su conservación y de las manipulaciones ordinarias, destinadas a mejorar su presentación o calidad comercial o acondicionarlas para el transporte, tales como división o reunión de bultos, formación de lotes, clasificación y cambio de embalaje. La mercadería puede ser también objeto de transferencia.

Igualmente podrán ser objeto de actividades de producción con destino exclusivo a terceros países, tales como transformación, elaboración, combinación, mezcla o cualquier otro perfeccionamiento.

El tiempo máximo para la permanencia de mercaderías en depósito será determinado en la reglamentación de la presente ley.

Art. 8º — No regirán para las operaciones de introducción o extracción hacia o desde la zona franca restricciones económicas ni depósitos previos a las operaciones de comercio internacional.

Art. 9º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para autorizar operaciones de comercio al por menor en una zona franca cuando las circunstancias lo aconsejen.

Art. 10. — Queda prohibido el consumo de mercaderías dentro de la zona franca, en aquellos casos distintos a las actividades propias del funcionamiento de la misma.

Lo exceptuado precedentemente no será de aplicación para el consumo de vituallas destinadas al personal que preste servicios dentro de la zona franca.

Art. 11. — Las horas y lugares de ingreso y egreso de personas y mercaderías hacia o desde la zona franca serán los determinados por el comité de vigilancia de la misma de conformidad con las reglamentaciones que esto dicte.

Art. 12. — Estará prohibido habitar permanentemente o transitoriamente dentro de la zona franca.

Funciones y autoridades

Art. 13. — Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 14. — Invítase a las provincias que adhieran a las previsiones de la presente a constituir en la órbita del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una comisión de evaluación y selección con el objeto de:

- a) Evaluar técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la explotación de la zona franca, definir los criterios de selección y ordenar los proyectos;
- b) Elaborar y elevar para su aprobación a la autoridad de aplicación el reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca. Dicho reglamento deberá contener el plazo, la modalidad y las condiciones de la concesión de la explotación de la zona franca, las causales de revocación, las sanciones por incumplimiento, como también las características, tasas y cargos de los servicios prestados en la zona así como las condiciones contractuales para la admisión de los usuarios. Dentro del plazo de noventa (90) días la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el proyecto de reglamento de funcionamiento y operación que le ha sido elevado, reputándose aprobado el proyecto que no haya merecido observaciones dentro de ese plazo;
- c) Llamar a licitación pública para la concesión de la explotación de la zona franca;
- d) Adjudicar la concesión de la zona franca con aprobación de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá noventa (90) días para expedirse a partir de la fecha de evaluación de los antecedentes y resultados del acto licitatorio para aprobar el mismo;
- e) Las demás que le establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 15. — Invítase a las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, a constituir un organismo provincial público o mixto, en el que podrán estar representados los municipios del área de influencia de la zona de que se trate y entidades empresarias y de la producción.

Dicho organismo tendrá las funciones de comité de vigilancia.

Art. 16. — El comité de vigilancia de la zona franca tendrá las siguientes funciones:

- a) Promover la radicación de actividades destinadas a la investigación y la innovación tecnológica.

gica que conduzcan a un mayor afianzamiento de los mercados externos;

- b) Remitir toda información que requiera la autoridad de aplicación, y servir a la misma como órgano de consulta y asesoramiento permanente sobre las actividades de la zona franca;
- c) Fiscalizar la provisión de información estadística adecuada, oportuna y suficiente sobre los principales indicadores económicos y comerciales de la zona franca requerida al concesionario y al usuario, la que será de libre consulta;
- d) Evaluar el impacto regional de la zona franca y articular su funcionamiento con los planes provinciales y municipales, identificando efectos perniciosos y costos de la zona, los que deberán estar a cargo de las empresas usuarias que los generen;
- e) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario a cargo de la explotación de la zona franca;
- f) Auditar periódicamente las medidas de vigilancia y control necesarios de accesos y límites de la zona franca;
- g) Percibir del concesionario un derecho por la concesión bajo forma de un pago único o en un canon periódico;
- h) Garantizar la concurrencia de los usuarios en el acceso e instalación en la zona franca conforme al reglamento de funcionamiento y operación y atender y dar respuesta a sus reclamos;
- i) Hacer cumplir las leyes y regulaciones aplicables, el reglamento de funcionamiento y operación, las normas internas de la zona franca y los acuerdos de concesión y operación;
- j) Velar por la conservación del medio ambiente y en especial el tratamiento de los efluentes originados en la zona franca;
- k) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. — El comité de vigilancia propiciará la libre concurrencia en la prestación de servicios dentro de la zona franca, previéndolo en el reglamento de funcionamiento y operación respectivo. Deberá aprobar tasas y cargos para todos los servicios y concesiones dentro de la zona franca, asegurando el tratamiento uniforme en condiciones equivalentes para los usuarios y mercaderías.

Art. 18. — La explotación de la zona franca será de carácter privado o mixto, en este último caso con participación estatal minoritaria. Las obras y la infraestructura necesarias correrán por cuenta del concesionario.

Art. 19. — La explotación se ofrecerá por licitación pública, la que se ajustará a las condiciones que establezca la comisión de evaluación y selección prevista en el artículo 14 de la presente.

Art. 20. — El o los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones:

- a) Realizar las obras de infraestructura y conexiones de servicios básicos en la zona franca que sean necesarios para su normal funcionamiento

y que formen parte del proyecto aprobado por la comisión de evaluación y selección y la autoridad de aplicación;

- b) Alquilar a los usuarios lotes para la construcción de edificios destinados a las distintas actividades. No podrá cederse el uso de la totalidad del área a un solo usuario, ni tampoco constituir monopolio de hecho, independientemente del número de usuarios;
- c) Celebrar toda clase de contratos relacionados con sus actividades;
- d) Urbanizar, proyectar y construir edificios para las distintas actividades permitidas en la zona franca;
- e) Dictar y modificar su propio reglamento interno con aprobación del comité de vigilancia, ajustado a la legislación y reglamentaciones vigentes;
- f) Asegurar la prestación de servicios de agua, luz, gas, telecomunicaciones, fuerza motriz, calor, refrigeración o cualquier otra clase de servicios necesarios para las operaciones de la zona franca, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la presente;
- g) Promover y facilitar el desarrollo de las operaciones, negociaciones y actividades de la zona franca;
- h) Cumplir y hacer cumplir el reglamento de funcionamiento y operación y el reglamento interno;
- i) Remitir la información necesaria a las memorias periódicas de operación de la zona franca, así como cualquier otro dato estadístico o de información que requiera el comité de vigilancia;
- j) El concesionario será solidariamente responsable con los usuarios que transgredan la legislación aduanera y las reglamentaciones de la zona franca;
- k) Pagar los costos del control aduanero de la zona en base a las pautas que se convengan entre el comité de vigilancia y la Administración Nacional de Aduanas;
- l) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 21. — Los usuarios deberán ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que adquieran derecho a desarrollar actividades dentro de la zona franca mediante el pago de un precio convenido.

Art. 22. — Los usuarios de la zona franca deberán llevar contabilidad separada de otras actividades o sociedades, del mismo titular, instaladas en el territorio aduanero general o especial.

Tratamiento fiscal y aduanero

Art. 23. — Con las salvedades que establece esta ley y el artículo 590 del Código Aduanero, será aplicable a las zonas francas la totalidad de las disposiciones de carácter impositivo, aduanero y financiero, incluidas las de carácter penal, que rigen en el territorio aduanero general.

Art. 24. — Las mercaderías que ingresen a la zona franca estarán exentas de los tributos que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 25. — Las mercaderías que salgan de la zona franca hacia terceros países, estarán exentas del pago de los tributos que gravaren su exportación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 26. — Exímese del pago de los impuestos nacionales que gravan los servicios básicos que se prestan dentro de la zona franca.

A tal efecto se entenderá por servicios básicos aquellos que tengan por objeto la prestación o provisión de servicios de telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y de desagües.

Art. 27. — Las mercaderías que se introduzcan a la zona franca, provenientes del territorio aduanero general o especial, serán consideradas como una exportación suspensiva.

Art. 28. — Las mercaderías que se extraigan de la zona franca con destino al territorio aduanero general o especial serán consideradas como una importación.

Art. 29. — Los estímulos que correspondan a las exportaciones que se efectúen desde el territorio aduanero general o especial a la zona franca, serán liquidados una vez que la mercadería fuere extraída de dicha zona hacia otro país, y dentro del plazo que a este efecto establecen las normas generales que rigen la materia, ya sea en el estado que posea cuando ingresó a la misma, o en otro.

Art. 30. — La extracción de mercaderías de la zona franca hacia terceros países, no gozarán de otros estímulos que los correspondientes por la devolución de tributos efectivamente pagados cuando fueren pasibles de devolución a los exportadores del territorio aduanero general. Asimismo, gozarán de los estímulos establecidos de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina.

Art. 31. — En el convenio de adhesión para el establecimiento de cada zona franca previsto en el artículo 3º, los gobiernos provinciales se deberán comprometer a no reducir sus impuestos de todo tipo a las actividades y usuarios de la zona franca, sin perjuicio de una eventual adhesión a la exención nacional de los tributos que gravan los servicios básicos, referida en el artículo 26, y de las exenciones que existieran para operaciones de exportación. En igual sentido, se deben comprometer a no destinar recursos para ser aplicados a esta iniciativa.

En el mismo convenio, los gobiernos provinciales se deberán comprometer a acordar con los municipios igual comportamiento para los usuarios y actividades de la zona franca.

Art. 32. — Invítase a las provincias y municipios sede de las respectivas zonas francas, a disponer la exención de los impuestos provinciales y municipales específicos que gravan los servicios básicos que se presten dentro de la zona franca.

Art. 33. — Los usuarios de la zona franca no podrán acogerse a los beneficios y estímulos de los regímenes de promoción industrial, regionales o sectoriales, creados o a crearse, en el territorio de la Nación.

Art. 34. — Podrán introducirse en la zona franca toda clase de mercaderías y servicios, estén o no incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola excepción de armas, municiones y otras especies que atenten contra la moral, la salud, la sanidad vegetal y animal, la seguridad y la preservación del medio ambiente.

Art. 35. — El Poder Ejecutivo establecerá mediante reglamentación el régimen aplicable en materia de destinaciones suspensivas de importación y exportación, desde o hacia la zona franca, contemplando en ella la prohibición de nacionalización de las mercaderías que ingresen al territorio aduanero general o especial.

Art. 36. — La totalidad de las gestiones, trámites, documentación y demás operaciones administrativas aduaneras que se efectúen en la zona franca, se realizarán en la respectiva delegación que la Administración Nacional de Aduanas habilitará en cada una de ellas y que funcionará en el interior de su recinto.

Art. 37. — No regirán en la zona franca restricciones a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos.

Art. 38. — La provincia, por intermedio de la Comisión de Evaluación y Selección, a partir del estudio de los proyectos de factibilidad de zona franca, propondrá a la autoridad de aplicación la localización y delimitación de la misma, así como las áreas de expansión previstas.

Art. 39. — El área física que se declare zona franca será deslindada y cercada de forma tal que permita garantizar su aislamiento respecto del territorio aduanero general.

Art. 40. — Autorízase a la autoridad de aplicación a expandir el aspecto físico de la zona franca, de acuerdo con lo que proponga el Comité de Vigilancia conforme a lo previsto en los proyectos aprobados.

Art. 41. — Los predios e inmuebles donde se ubicarán las zonas francas podrán ser de propiedad pública o privada, desocupados y libres de litigios, teniendo la provincia el libre uso y goce de los mismos.

El Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la presente, establecerá las condiciones para la admisión del uso de predios de propiedad privada.

Otras disposiciones

Art. 42. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a autorizar en las zonas francas, mecanismos de flexibilización y emergencia laboral en las contrataciones cuando las circunstancias así lo aconsejen y de acuerdo a las normas vigentes en la materia.

Art. 43. — Se admitirán acuerdos entre provincias y entre éstas de manera simultánea con el Poder Ejecutivo nacional, para la creación de zonas francas interprovinciales, autorizándose en esos casos la constitución de comisiones análogas a la del artículo 14, pero de naturaleza interprovincial.

Art. 44. — Las provisiones de la presente ley y los derechos emergentes de los estados provinciales quedan supeditados a la adhesión expresa de cada uno, que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, alguna provincia no hubiera suscrito el convenio previsto en el artículo 3º se considerará que la misma no ha adherido a la presente.

Art. 45. — Si en el plazo de dieciocho (18) meses de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate.

Art. 46. — La presente ley será de aplicación a las zonas francas instituidas por las leyes 5.142 y 8.092.

Art. 47. — Los organismos intervinientes, con competencia en las operaciones de las zonas francas, dictarán las reglamentaciones complementarias que correspondan.

Art. 48. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 3 de noviembre de 1993.

Nicolás E. Becerra. — Oscar S. Lamberto.
— Juan J. Cavallari. — Eduardo P. Amadeo. — César E. del Valle Iturre. — José M. Ibarbia. — Alberto G. Albamonte. — Antonio I. Guerrero. — Silvia E. Troyano. — Juan C. Fajardo. — Carlos Manfredotti. — Humberto A. Romero. — Néstor R. Alcalá. — Juan C. Ayala. — Alberto E. Balestrini. — Miguel A. Balestrini. — Daniel Baum. — Carlos R. Beltrán. — Oscar A. Blanco. — Hugo A. Bordín Carosio. — Fernando E. Caimmi. — Dante A. Comañón. — Hugo A. Crámaro. — Miguel H. D'Alessandro. — Jorge C. Daud. — Luis M. Echevarría. — Eduardo A. Fellner. — Lino Fornerón. — Octavio O. Frigerio. — José L. Gioja. — Juan H. González Gaviola. — Gustavo A. Green. — Anibal O. Hardy. — Bernardo E. Herrera. — Manuel H. Herrera Arias. — Dámaso Larraburu. — Oscar A. Machado. — Silomón A. Michitte. — Alberto Parada. — Rodolfo H. Quezada. — Luis A. Sardi. — Manuel J. Samid. — Carlos J. Scelzi. — Carlos E. Soria. — Nefes Sucoria. — Edmundo Varela Cid. — Orlando A. Ziccardi.

En disidencia:

Alcides H. López. — Ramón A. Dussol. — Luis E. Losada. — Roque Sánchez Galdeano. — Raúl R. Topa. — Raúl H. Vicchi.

En disidencia parcial:

Elisco Barberá. — Oscar A. Castillo. — Julio C. J. Falletti. — Marcelo E. López Arias. — Julio C. Loutaif. — Carlos Lynch. — Carlos A. Sueiro.

En disidencia total:

Juan P. Baylac. — Victoria O. Bisciotti. — Hugo V. Nikisch. — Héctor M. Seguí.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Economía, de Comercio, de Presupuesto y Hacienda y de Economía y Desarrollo Regional han considerado el mensaje 291 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se reglamentan las actividades de las zonas francas y también a los fines de emitir este dictamen, han tenido a la vista los expedientes presentados por los señores diputados López Arias y Barberá, de ley (expediente 111-D-92); Orquín, de ley (expediente 336-D-92); Alvarez (H. C.) y otros, de ley (expediente 639-D-92); Leconte y Garay, de ley (expediente 849-D-92); Peralta, de ley (expediente 1.241-D-92); Toto y otros, de ley (expediente 1.461-D-92); Hardy, de ley (expediente 2.781-D-92); Vicchi y otros, de ley (expediente 3.941-D-92); Parada y otros, de ley (expediente 3.973-D-92); Corchuelo Blasco, de ley (expediente 4.370-D-92); Loutaif y otros, de ley (expediente 48-D-93); Flores, de ley (expediente 346-D-93); Sodero Nieves, de ley (expediente 522-D-93); Pesce, de ley (expediente 2.127-D-93); Vicchi, de ley (expediente 2.140-D-93); Barbotti, Atílio, de ley (expediente 2.256-D-93); López Arias y Barberá, de ley (expediente 2.023-D-93); Aceñolaza, de ley (expediente 3.103-D-93); Fajardo y otros, de ley (expediente 3.444-D-93); Gómez de Marelli, de ley (expediente 3.476-D-93); Guzmán, de declaración (expediente 2.041-D-93); y el anteproyecto que produjeron asesores de los diputados nominados, de acuerdo a lo que dispusiera oportunamente la comisión de Economía, primera competencia del giro dado al expediente 106-P.E.-92, Mensaje 291 del Poder Ejecutivo; el que con las modificaciones surgidas del estudio realizado, fue aprobado, aconsejando por consiguiente su sanción.

Eduardo P. Amadeo.

ANTECEDENTE

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires, 23 de febrero de 1993.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley, mediante el cual se reglamentan las actividades de las zonas francas.

Para su confección se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

En nuestro país, la política económica en vigencia, ha apuntado a corregir distorsiones históricas en la asignación de los recursos que durante años provocaron crisis y estancamiento. Un conjunto de decisiones de política oportunamente implementadas, pretendieron y pretenden restituir su rol a los mercados buscando simultáneamente insertar a la Argentina en el mundo.

Los países que siguen una política de apertura y liberalización del comercio exterior, eliminan las barreras al comercio internacional, y con ello, renuevan el sesgo antiexportador de las mismas, conduciendo a una expansión del sector exportador que será más amplia a cuanto más elevadas hayan sido las barreras remanentes de las políticas proteccionistas. En consecuencia, la liberalización del comercio internacional que incrementa la eficiencia económica del sistema, y produce sus efectos en la disminución de los costos y restricciones para importar, es la principal política de fomento de las exportaciones.

Las políticas macroeconómicas generales, la política cambiaria y arancelaria, y otros mecanismos tales como admisión temporaria, draw-back, reintegros, financiamiento, políticas de información comercial, normas de calidad y acciones negociadoras y diplomáticas internacionales como el establecimiento de áreas o zonas francas, son las principales acciones que puede desarrollar el Estado en la política comercial externa y de apertura.

A pesar del sesgo exportador creciente que produce el ordenamiento macroeconómico y la estabilidad monetaria y cambiaria subsisten sesgos anticomercio a los que contribuye a erradicar la presencia de zonas francas.

Las zonas francas son en este sentido, medidas especiales de esta política de apertura en tanto apuntan a perfeccionar la tarea de eliminar el sesgo antiexportador de las barreras al comercio, contribuyendo así a incrementar la eficiencia económica del sistema para su inserción internacional.

Este instrumento es coherente con el proceso de integración regional, en particular Mercosur, del que participa la Argentina, ya que al establecerse un arancel externo común de la unión aduanera, mantiene su validez. Países vecinos cuentan con esta herramienta desde hace varios años atrás, e incluso Brasil ha ampliado recientemente estas iniciativas. La Argentina es el único país del Mercosur que no cuenta con un régimen general adaptado a los nuevos tiempos y acorde a la política regional que fija el Tratado de Asunción.

Ventajas

El instrumento cuenta con gran antigüedad y reconoce distintos antecedentes en el mundo y de las más remotas épocas. Su conexión con la facilitación del comercio es conocida. También con la industrialización, tanto en países en desarrollo como en desarrollados, al producirse la relocalización industrial y de procesos. A las ventajas operativas, reducción de formalidades y trámites comerciales, facilidad en los accesos, disminución en los costos de seguro, disminución de costos en el manejo de ventajas para muestreo, inspección y organiza-

ción de la carga en lotes menores, se suman otras como transferencia tecnológica en el caso de zonas con actividad industrial y efectos sobre la demanda de empleo.

Propuesta

Para obtener los beneficios del instrumento en una política de apertura, es conveniente que el diseño de la zona franca apunte a contemplar la minimización del costo fiscal (o disminución de ingresos), evitar la relocalización de empresas y actividades propendiendo en cambio al aumento de las mismas, minimizar la generación de inequidades y asimetrías notables respecto a otras áreas del país, maximizar el impacto sobre variables que inciden en la eficiencia y considerar adecuadamente la existencia de competencia de otras zonas francas de países vecinos.

Conforme a estos lineamientos se ha elaborado el presente proyecto de ley. El mismo reconoce como antecedente las previsiones del artículo 34 del decreto 1.668 del 26 de agosto de 1991, que reglamentó la zona franca de La Plata, creada por la ley 5.142 de 1907. En esa oportunidad se estableció una comisión que debía presentar un proyecto de ley de zonas francas.

En el presente proyecto, se contemplan dos actividades bien definidas para la zona franca. La propia de la tipicamente comercial y la de la industrial orientada exclusivamente a la exportación. No es posible la reintroducción de mercadería industrializada en la zona, al territorio aduanero general. De esta forma se potencia la zona franca como instrumento que perfecciona la liberalización del territorio aduanero general, a fin de servir a proyectos direccionados a la exportación que faciliten la inserción de la Argentina en el mundo y pongan en funcionamiento una "zona franca eficiente" como medio de desarrollar la oferta exportable.

De manera coherente con la Ley de Convertibilidad se prevé la existencia de zonas francas privadas o mixtas, con provisión de infraestructura y conexiones de servicios básicos a cargo del inversor. También bajo su responsabilidad el costo del control aduanero adicional, la internalización (por el concesionario o los usuarios) de las desventajas externas del emprendimiento; y con una estricta batería de incentivos fiscales. Cada provincia podrá instalar o aspirar a no más de una zona franca, contando para ello a las ya existentes.

No se establecen exenciones de impuestos directos, sacrificándose los impuestos al comercio exterior en ciertos casos y en otros sólo el costo financiero de su percepción, y los impuestos nacionales en la provisión de los servicios básicos "exportados" a la zona. También se ha eximido a estas áreas de promoción sectorial o regional creada o a crearse. Igualmente se ha excluido la posibilidad de que las exportaciones desde la zona franca perciban plenamente otros reintegros salvo los previstos en la ley.

En concordancia se busca que las provincias y municipios adhieran a idéntico comportamiento, evitando costos fiscales abultados o competencias entre las distintas localizaciones, logrando una armonización fiscal entre los distintos niveles de gobierno.

De todos modos la ley contempla una participación significativa y la presencia de las provincias articulando por un lado la Comisión de Evaluación y Selección como instrumento de elección de proyectos y elaboración del reglamento, y por el otro, el Comité de Vigilancia como un instrumento provincial que puede ser mixto y que cuenta con atribuciones sustantivas. Administra la zona franca, vigila su funcionamiento, garantiza la concurrencia en la zona franca y atiende los reclamos de los usuarios.

Se permite de este modo que el principal interesado en el buen funcionamiento de la zona franca (el municipio o la provincia huésped) cuente con instrumentos adecuados para desempeñar su papel, articulando mediante un convenio entre la Nación y la provincia sus derechos y obligaciones.

Debe tenerse en cuenta que las zonas francas no se constituyen en el instrumento exclusivo para resolver los problemas de provincias o regiones. Se considera en cambio que constituirán herramientas útiles en el marco de un plan de transformación y desarrollo que identifique las potencialidades de cada región y las coloque en función de una visión de mediano y largo plazo.

En síntesis, la zona franca propuesta ha sido concebida como un instrumento de la política de apertura y liberalización para remover el sesgo anticomercio que aún limita las exportaciones generado por barreras aduaneras, otras regulaciones al comercio exterior y deficiencias de la estructura comercial importadora y exportadora que se resisten al esfuerzo desregulador. A la vez en este contexto, puede preverse que se ubicarán en estas zonas francas, nuevas inversiones que están aún pendientes por la existencia de las distorsiones que se intentan corregir con este instrumento.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 291

CARLOS S. MENTEM.
Domingo F. Cavallo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Definiciones

Artículo 1º — Para los efectos de esta ley se entenderá por:

- a) Zona Franca: Es el ámbito que se define en el artículo 590 del Código Aduanero;
- b) Territorio aduanero general: Es el ámbito que se define en el apartado 2 del artículo 2º del citado código;
- c) Territorio aduanero especial: Es el ámbito que se define en el apartado 3 del artículo 2º del mismo código;
- d) Terceros países u otros países: Es el ámbito geográfico sometido a la soberanía de otros países incluidos los exclaves constituidos a favor de otros Estados.

Disposiciones generales

Art. 2º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo con carácter de excepción crear adicionalmente no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser ubicadas en aquellas provincias o regiones geográficas, que por su situación socio-económica crítica justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción.

Art. 3º — La creación de las zonas francas previstas en el artículo anterior se podrá materializar en aquellas provincias que hayan adherido a las previsiones de la presente, a través de un convenio de adhesión a ser celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y los titulares de los gobiernos de las provincias.

Dicho convenio de adhesión deberá ser aprobado en todos sus términos por ley provincial.

Objetivos

Art. 4º — Las zonas francas tendrán como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando que el aumento de la eficiencia y la disminución de costos asociados a las actividades que se desarrollan en ellas, se extiendan a la inversión y al empleo.

El funcionamiento de las zonas francas será convergente con la política comercial externa y sus medidas, debiendo contribuir a la liberalización y al crecimiento de la economía, incorporándose plenamente en el proceso de integración regional.

Actividades

Art. 5º — En las zonas francas podrán desarrollarse actividades comerciales, de servicios e industriales, esta última con el único objeto de exportar la mercadería resultante a terceros países.

Art. 6º — En la zona franca las mercaderías pueden ser objeto de las operaciones necesarias para asegurar su conservación y de las manipulaciones ordinarias, destinadas a mejorar su presentación o calidad comercial o a acondicionarlas para el transporte, tales como división o reunión de bultos, formación de lotes, clasificación y cambio de embalaje. La mercadería puede ser también objeto de transferencia.

Igualmente podrán ser objeto de actividades de producción con destino exclusivo a terceros países, tales como transformación, elaboración, combinación, mezcla o cualquier otro perfeccionamiento.

El tiempo máximo para la permanencia de la mercadería en depósito será determinado en la reglamentación de la presente ley.

Art. 7º — No regirán para las operaciones de importación y exportación hacia o desde la zona franca restricciones económicas ni depósitos previos a las operaciones de comercio internacional.

Art. 8º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para autorizar operaciones de comercio al por menor en una zona franca cuando las circunstancias lo aconsejen.

Art. 9º.—Queda prohibido el consumo de mercaderías dentro de la zona franca, en aquellos casos distintos a las actividades propias del funcionamiento de la misma.

Lo preceptuado precedentemente no será de aplicación para el consumo de vituallas destinadas al personal que preste servicios dentro de la zona franca.

Art. 10.—Las horas y lugares de ingreso y egreso de la zona franca serán sólo los determinados por el Comité de Vigilancia de la misma de conformidad con las reglamentaciones que éste dicte.

Art. 11.—Estará prohibido habitar permanentemente o transitoriamente dentro de la zona franca.

Art. 12.—Queda prohibido el ingreso de personas y/o mercaderías por lugares diferentes a los autorizados.

Funciones y autoridades

Art. 13.—Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el que podrá delegar facultades en un organismo de su dependencia.

Art. 14.—Invítase a las provincias que adhieran a las previsiones de la presente a constituir en la órbita del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una Comisión de Evaluación y Selección con el objeto de:

- a) Evaluar técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la explotación de la zona franca, definir los criterios de selección y ordenar los proyectos;
- b) Elaborar y elevar para su aprobación a la autoridad de aplicación el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la zona franca. Dicho reglamento deberá contener el plazo, la modalidad y las condiciones de la concesión de la explotación de la zona franca, como también las características, tasas y cargos de los servicios prestados en la zona así como las condiciones contractuales para la admisión de los usuarios. Dentro del plazo de noventa (90) días la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el proyecto de reglamento de funcionamiento y operación que le ha sido elevado, reputándose aprobado el proyecto que no haya merecido observaciones dentro de ese plazo.
- c) Llamar a licitación pública para la concesión de la explotación de la zona franca;
- d) Adjudicar la concesión de la zona franca con aprobación de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá noventa (90) días para expedirse a partir de la fecha de elevación de la evaluación de los antecedentes y resultados del acto licitatorio para aprobar el mismo;
- e) Las demás que le establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 15.—Invítase a las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, a constituir un organismo provincial público o mixto, en el que podrán estar re-

presentados los municipios del área de influencia de la zona de que se trate y entidades empresarias y de la producción.

Dicho organismo tendrá las funciones de Comité de Vigilancia.

Art. 16.—El Comité de Vigilancia de la zona franca tendrá las siguientes funciones:

- a) Promover la radicación de actividades destinadas a la investigación y la innovación tecnológicas que conduzcan a un mayor afianzamiento de los mercados externos;
- b) Remitir toda información que requiera la autoridad de aplicación, y servir a la misma como órgano de consulta y asesoramiento permanente sobre las actividades de la zona franca;
- c) Fiscalizar la provisión de información estadística adecuada, oportuna y suficiente sobre los principales indicadores económicos y comerciales de la zona franca requerida al concesionario y al usuario, la que será de libre consulta;
- d) Evaluar el impacto regional de la zona franca y articular su funcionamiento con los planes provinciales y municipales, identificando efectos perniciosos y costos de la zona que deberán ser internalizados por las empresas usuarias que los generen;
- e) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario a cargo de la explotación de la zona franca;
- f) Auxiliar periódicamente las medidas de vigilancia y control necesarias de accesos y límites de la zona franca;
- g) Percibir del concesionario un derecho por la concesión bajo forma de un pago único o en un canon periódico;
- h) Garantizar la concurrencia de los usuarios en el acceso e instalación en la zona franca conforme al Reglamento de Funcionamiento y Operación y atender y dar respuesta a sus reclamos;
- i) Hacer cumplir las leyes y regulaciones aplicables, el Reglamento de Funcionamiento y Operación, las normas internas de la zona franca y los acuerdos de concesión y operación;
- j) Velar por la conservación del medio ambiente, y en especial el tratamiento de los efluentes originados en la zona franca;
- k) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 17.—El Comité de Vigilancia propiciará la libre concurrencia en la prestación de servicios dentro de la zona franca previéndolo en el Reglamento de Funcionamiento y Operación respectivo. Deberá aprobar tasas y cargos para todos los servicios y concesiones dentro de la zona franca asegurando el tratamiento uniforme en condiciones equivalentes para los usuarios y mercaderías.

Art. 18. — La explotación de la zona franca será de carácter privado o mixto con participación estatal minoritaria. Las obras y la infraestructura necesarias correrán por cuenta del concesionario.

Art. 19. — La explotación se ofrecerá por licitación pública, la que se ajustará a las condiciones que establezca la Comisión de Evaluación y Selección prevista en el artículo 14 de la presente.

Art. 20. — El o los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones:

- a) Realizar las obras de infraestructura y conexiones de servicios básicos en la zona franca que sean necesarias para su normal funcionamiento y que formen parte del proyecto aprobado por la Comisión de Evaluación y Selección y la autoridad de aplicación;
- b) Alquilar a los usuarios lotes para la construcción de edificios destinados a las distintas actividades. No podrá cederse el uso de la totalidad del área a un solo usuario, ni tampoco constituir monopolio de hecho, independientemente del número de usuarios;
- c) Celebrar toda clase de contratos relacionados con sus actividades;
- d) Urbanizar, proyectar y construir edificios para las distintas actividades permitidas en la zona franca;
- e) Dictar y modificar su propio reglamento interno ajustado a la legislación y reglamentaciones vigentes;
- f) Asegurar la prestación de servicios de agua, luz, gas, telecomunicaciones, fuerza motriz, calor, refrigeración, o cualquier otra clase de servicios necesarios para las operaciones de la zona franca en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la presente;
- g) Promover y facilitar el desarrollo de las operaciones, negociaciones y actividades de la zona franca;
- h) Cumplir y hacer cumplir el reglamento de funcionamiento y operación y el reglamento interno;
- i) Remitir la información necesaria y las memorias periódicas de operación de la zona franca, así como cualquier otro dato estadístico o de información que requiera el Comité de Vigilancia;
- j) El concesionario será solidariamente responsable con los usuarios que transgredan la legislación aduanera y las reglamentaciones de la zona franca;
- k) Pagar los costos del control aduanero de la zona en base a las pautas que se convengan entre el Comité de Vigilancia y la Administración Nacional de Aduanas;
- l) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 21. — Los usuarios deberán ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que adquieran derecho a desarrollar actividades dentro de la zona franca mediante el pago de un precio convenido.

Art. 22. — Los usuarios de la zona franca deberán llevar contabilidad separada de otras actividades o sociedades, del mismo titular, instaladas en el territorio aduanero general o especial.

Tratamiento fiscal y aduanero

Art. 23. — Con las salvedades que establece esta ley, será aplicable a las zonas francas la totalidad de las disposiciones de carácter impositivo, aduanero y financiero incluidas las de carácter penal que rigen en el territorio aduanero general.

Art. 24. — Las mercaderías que ingresen a la zona franca estarán exentas de los tributos que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 25. — Las mercaderías que salgan de la zona franca, estarán exentas del pago de los tributos que gravaren su exportación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 26. — Exímese del pago de los impuestos nacionales que gravan los servicios básicos que se prestan dentro de la zona franca.

A tal efecto se entenderá por servicios básicos aquellos que tengan por objeto la prestación o provisión de servicios de telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y de desagües.

Art. 27. — Las mercaderías que se introduzcan a la zona franca, provenientes del territorio aduanero general o especial, serán consideradas como una exportación suspensiva.

Art. 28. — Las mercaderías sujetas a las actividades comerciales y de servicios, que se extraigan de la zona franca con destino al territorio aduanero general o especial serán consideradas como una importación.

Art. 29. — Los estímulos que correspondan a las exportaciones que se efectúen desde el territorio aduanero general o especial a la zona franca, serán liquidados una vez que la mercadería fuere extraída de dicha zona hacia otro país, y dentro del plazo que a este efecto establecen las normas generales que rigen la materia, ya sea en el estado que posea cuando ingresó a la misma, o en otro.

Art. 30. — Las exportaciones efectuadas desde la zona franca no gozarán de otros incentivos que los previstos en la presente ley, y los derivados de acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina.

Art. 31. — Las exportaciones efectuadas desde la zona franca hacia terceros países gozarán de la devolución de tributos efectivamente pagados, cuando correspondan a tributos pasibles de devolución a los exportadores del territorio aduanero general.

Art. 32. — En el convenio de adhesión para el establecimiento de cada zona franca previsto en el artículo 3º, los gobiernos provinciales se deberán comprometer

a no reducir sus impuestos de todo tipo a las actividades y usuarios de la zona franca, sin perjuicio de una eventual adhesión a la exención nacional de los tributos que graven los servicios básicos, referida en el artículo 27 y de las exenciones que existieran para operaciones de exportación. En igual sentido, se deberán comprometer a no destinar recursos para ser aplicados a esta iniciativa.

En el mismo convenio, los gobiernos provinciales se deberán comprometer a acordar con los municipios igual comportamiento para los usuarios y actividades de la zona franca.

Art. 33. — Invítase a las provincias y municipios sede de las respectivas zonas francas a disponer la exención de los impuestos provinciales y municipales específicos que gravan los servicios básicos que se presten dentro de la zona franca.

Art. 34. — Los usuarios de la zona franca no podrán acogerse a los beneficios y estímulos de los regímenes de promoción industrial, regionales o sectoriales, creados o a crearse en el territorio de la Nación.

Art. 35. — Podrán introducirse en la zona franca toda clase de mercaderías y servicios, estén o no incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola excepción de armas, municiones y otras especies que atenten contra la moral, la salud, la sanidad vegetal y animal, la seguridad y la preservación del medio ambiente.

Art. 36. — El Poder Ejecutivo nacional establecerá mediante reglamentación el régimen aplicable en materia de destinaciones suspensivas de importación y exportación desde o hacia la zona franca, contemplando en ella la prohibición de nacionalización de las mercaderías que ingresen al territorio aduanero general o especial.

Art. 37. — La totalidad de las gestiones, trámites, documentación y demás operaciones administrativas aduaneras que se efectúen en la zona franca se realizarán en la respectiva delegación que la Administración Nacional de Aduanas habilitará en cada una de ellas y que funcionará en el interior de su recinto.

Art. 38. — No regirán en la zona franca restricciones a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos.

Art. 39. — La provincia, por intermedio de la Comisión de Evaluación y Selección, a partir del estudio de los proyectos de factibilidad de zona franca, propondrá a la autoridad de aplicación la localización y delimitación de la misma, así como las áreas de expansión previstas.

Art. 40. — El área física que se declare zona franca será deslindada y cercada de forma tal que permita garantizar su aislamiento respecto del territorio aduanero general.

Art. 41. — Autorízase a la autoridad de aplicación a expandir el espacio físico de la zona franca, de acuerdo con lo que proponga el Comité de Vigilancia conforme a lo previsto en los proyectos aprobados.

Art. 42. — Los predios e inmuebles donde se ubicarán las zonas francas podrán ser de propiedad pública o privada, desocupados y libres de litigios, teniendo la provincia el libre uso y goce de los mismos.

El Poder Ejecutivo nacional, en la reglamentación de la presente, establecerá las condiciones para la admisión del uso de predios de propiedad privada.

Otras disposiciones

Art. 43. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a autorizar en las zonas francas, mecanismos de flexibilización y emergencia laboral en las contrataciones cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Art. 44. — Se admitirán acuerdos entre provincias y entre éstas de manera simultánea con el Poder Ejecutivo nacional, para la creación de zonas francas interprovinciales, autorizándose en esos casos la constitución de comisiones análogas a la del artículo 14, pero de naturaleza interprovincial.

Art. 45. — Las previsiones de la presente ley y los derechos emergentes de los estados provinciales quedan supeditados a la adhesión expresa de cada uno, que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, alguna provincia no hubiera suscrito el convenio previsto en el artículo 39, se considerará que la misma no ha adherido a la presente.

Art. 46. — Si en el plazo de dieciocho (18) meses de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate.

Art. 47. — La presente ley será de aplicación a las zonas francas instituidas por las leyes 5.142 y 8.092.

Art. 48. — Los organismos intervinientes, con competencia en las operaciones de las zonas francas, dictarán las reglamentaciones complementarias que correspondan.

Art. 49. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.
Domingo F. Cavallo.

OBSERVACIONES

1

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1993.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Alberto R. Pierri.

S/D.

De mi mayor consideración:

Por la presente vengo a formular observación en tiempo y forma al Orden del Día N° 1.653 del 5 de noviembre de 1993, sobre zonas francas, reglamentación de las actividades de las mismas (106-P.E.-1992).

Al respecto manifiesto mis objeciones al despacho de las comisiones de Economía, de Comercio, de Presupuesto y Hacienda y de Economía y Desarrollo Regional en la extensión de las normas proyectadas y el informe que acompañaron el proyecto de ley de mi autoría y del señor diputado (m.c.) Del Río sobre régimen para el establecimiento de zonas francas industriales en áreas

del territorio nacional, para el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios a fin de exportar productos manufacturados (expediente 1.181-D-89), T.P. Nº 71 del 4-8-89, página 141), a cuya lectura remito.

En lo particular, señalo mi desacuerdo con el dictamen contenido en el orden del día, atendiendo a las siguientes cuestiones:

— Debe limitarse el objeto de la zona franca a la actividad industrial, comercial y de servicios con el único fin de exportar al extranjero productos manufacturados. La acción de los usuarios no debe colisionar con la industria ya instalada o a instalarse en el país.

Asimismo ha de prohibirse expresamente a los usuarios acogerse a regímenes de promoción industrial, sectoriales o regionales instituidos para el país.

— En reconocimiento expreso del régimen federal debe preverse el establecimiento de zonas francas por parte de cada uno de los estados provinciales, de manera que las autoridades locales conserven la facultad exclusiva de decidir sobre la utilización o no de este instrumento y su respectiva localización; autorizándose al Poder Ejecutivo a convenir con las mismas.

— Deben contemplarse normas directrices del régimen laboral aplicable a los sujetos empleados por los usuarios en las zonas francas y participación en ella de extranjeros.

— El régimen a crearse no debe importar gastos ni la creación de organismos estatales o provinciales, quedando la explotación y administración de las zonas francas y la provisión de su infraestructura a cargo de los concesionarios, personas jurídicas no estatales.

Por las razones expuestas, sobre las que abundaré en mayores detalles en oportunidad del tratamiento del proyecto en la sesión correspondiente de esta Honorable Cámara, dejo planteadas mis observaciones en la intención de brindar un marco legislativo adecuado para que puedan instalarse las zonas francas que numerosos proyectos vienen reclamando, como las que se auspician para Mendoza, para Diamante en Entre Ríos, Bahía Blanca, Chabut, Zapala en Neuquén, Clorinda en Formosa, y otras más.

Saludo a usted muy atentamente.

Rodolfo M. Parente.

2

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1993.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Alberto R. Pierri.

S/D.

Formulamos observaciones al dictamen de las comisiones de Economía, de Comercio, de Presupuesto y Hacienda y de Economías y Desarrollo Regional contenido en el Orden del Día Nº 1.653, donde se acompaña un proyecto de ley referido a zonas francas. Reglamentación de las actividades en las mismas (106-P.E.-1992).

Expondremos las razones de nuestra oposición en el recinto.

Lo saludamos atentamente.

Orlando J. Gallo. — Guillermo C. Fernández Gill.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Alvarez (H. C.). — Señor presidente: en nombre de las comisiones de Economía, de Comercio, de Presupuesto y Hacienda y de Economías y Desarrollo Regional vengo a informar el dictamen por el que se aconseja la sanción del proyecto de ley sobre reglamentación de las actividades en las zonas francas de todo el territorio de la Nación.

Este despacho de comisión, que es producto de la iniciativa del Poder Ejecutivo, ha sido compatibilizado en su análisis con los proyectos presentados oportunamente por los señores diputados López Arias, y Barberá; Orquín; Alvarez; Leconte y Garay; Toto y otros; Hardy; Vicchi y otros; Parada; Corchuco Blasco; Loutaif; Barbotti; Flores; Sodero Nievas; Aceñolaza; Fajardo; Gómez de Marelli y Guzmán. Quiero agregar que además se han tenido muy en cuenta las propuestas del señor diputado Parente así como también las modificaciones solicitadas por los señores diputados Vicchi, Baum, López Arias, Parada y Corchuco Blasco.

El presente dictamen contempla dos actividades bien definidas para las zonas francas: la típicamente comercial y la industrial, orientada exclusivamente hacia la exportación. De manera complementaria se prevén actividades de almacenaje y de servicios. Asimismo, se podrán fabricar bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general, a fin de admitir su importación a dicho territorio. De esta forma se potencia la inserción de nuestro país en el mundo, se propicia la exportación de productos industriales y se promueve la sustitución de importaciones de bienes de capital.

Ello puede contribuir activamente a morigerar el actual saldo negativo en la balanza comercial, situación que muchos economistas evalúan actualmente como altamente negativa para la prosecución del exitoso programa económico que estamos llevando a cabo los argentinos.

De manera coherente con este proyecto y con el de convertibilidad se prevé la existencia de dos zonas francas privadas o mixtas, con provisión de servicios básicos e infraestructura a cargo del concesionario, lo cual exime de comprometer fondos públicos sin contrapartida en la inversión inicial.

Cada provincia podrá, a partir de la sanción de esta ley, crear dentro de sus límites una zona franca. A los efectos de este cómputo se incluyen las ya existentes. Asimismo pueden crearse con carácter de excepción cuatro zonas más en todo el territorio nacional, a ser ubicadas en regiones que por su situación socioeconómica justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción. Estas zonas francas, a crearse en forma excepcional, no podrán estar ubicadas a una distancia menor de 300 kilómetros entre sí y tampoco puede establecerse más de una por provincia.

Los usuarios de la zona franca no podrán acogerse a los beneficios de regímenes de promoción industrial regionales o sectoriales. También se excluye la posibilidad de percepción de reintegros a exportadores de la zona franca, salvo lo previsto en la ley.

En el aspecto jurisdiccional se ha priorizado la concordancia y la cooperación de los niveles nacional, provincial y municipal. La participación plena se logra a través de la integración de la Comisión de Evaluación y Selección, como instrumento de elección de proyectos y elaboración del reglamento. Asimismo, el Comité de Vigilancia cuenta con atribuciones que le permiten cumplir un rol de fiscalizador y auditor del cumplimiento de obligaciones que hacen al funcionamiento eficiente de la zona franca, garantizando el cumplimiento de objetivos provinciales referidos al mejoramiento de la calidad de vida, como la innovación tecnológica o la preservación del medio ambiente.

De esta manera, la municipalidad y la provincia involucradas pueden ver satisfechos sus expectativas sobre el tema pues a través del convenio que celebren con la Nación establecen claramente sus derechos y obligaciones.

En el ámbito laboral se dispone que la legislación a ser aplicada en la zona franca será la vigente en el territorio nacional. Además se establece que los usuarios deberán emplear en las actividades que desarrollen un 75 por ciento como mínimo de personal argentino nativo o por opción.

La zona franca concebida a partir de este proyecto es en síntesis una herramienta útil

para apoyar el trascendente proceso de transformación al que asistimos y para minimizar los negativos efectos de las asimetrías fronterizas.

Finalmente, quiero señalar que este despacho de comisión tiene una significativa importancia para todo el territorio nacional y especialmente para las provincias, y de ser aprobado ha de significar un nuevo hito para el desarrollo económico de las regiones y sobre todo de las provincias que tienen límites con los países fronterizos.

Por todas las razones expuestas, la comisión propicia este proyecto esperando el apoyo de los colegas. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Parada. — Señor presidente: más allá de las expresiones vertidas por el señor diputado Claudio Álvarez, y en nombre de las comisiones ya mencionadas, queremos manifestar que este proyecto de ley consensuado con la gran mayoría de los diputados del interior responde a una realidad, a saber, que el interior requiere alternativas para las economías regionales, tan devastadas. Reitero que ésta no es la situación de ningún pueblo o de ninguna provincia en particular sino que constituye un hito más para todo el interior.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Luis Alberto Martínez.

Sr. Parada. — Después de un largo tiempo tratando de consensuar varios proyectos que habían presentado muchos diputados para crear zonas francas en determinadas localidades y provincias y el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo no hemos llegado a un acuerdo total sino —yo diría— a un marco legal que permite a las provincias y a las ciudades lo que se denomina una verdadera economía regional. Más allá de la exposición que podamos hacer, tenemos algunas disidencias en particular —en algunos casos ya discutidos con otros diputados— que trataremos de consensuar.

Voy a pedir que el resto de mi discurso se inserte en el Diario de Sesiones, para acelerar el trámite de la presente sesión. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Estamos tratando un proyecto sobre la reglamentación de zonas francas que en realidad es un proyecto de creación de zonas francas. En este sentido, me parece importante que la Cámara examine en profundi-

dad qué es crear una zona franca, nada más ni nada menos que una por cada provincia, más las dos ya existentes, más las cuatro que se autoriza a crear al Poder Ejecutivo. Significa un regadío de zonas francas por todo el país, lo cual requiere un análisis profundo.

Por eso, para que queden en el Diario de Sesiones algunos conceptos que hay que definir antes de que se vote el proyecto, quiero aclarar que soy respetuoso de los diputados de las provincias que promueven la creación de zonas francas. No estoy en contra del hombre del interior que brega por lograr un despegue de las exportaciones y un desarrollo regional.

Creemos que el proyecto es un disloque irracional, pésimo desde el punto de vista de la técnica legislativa. Consideramos que no se puede aprobar este proyecto cuyo dictamen firmé en la Comisión de Comercio con el señor diputado Seguí y otros, en disidencia total.

Hay que aclarar que se utilizan como sinónimos términos que no lo son. Zona primaria aduanera es aquella parte del territorio aduanero habilitado para la ejecución de operaciones aduaneras o actividades para las que rigen normas especiales de circulación de personas y mercaderías.

Por exclusión tendríamos que decir que la zona secundaria aduanera está constituida por todo el territorio aduanero argentino menos las zonas primarias aduaneras.

Hay una zona de vigilancia especial que es una franja de las áreas de frontera sometidas a disposiciones especiales que supera la de las zonas secundarias en general.

¿Qué es el territorio aduanero en general? Es aquel donde se aplica el sistema general arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y exportaciones.

¿Qué es el territorio aduanero especial? Es la zona aduanera especial en la que se aplica el sistema especial arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y exportaciones.

A esta altura del debate, convendría preguntarse qué es una zona franca. En otros países a estas zonas se las denomina puerto franco, entrepuerto franco, territorio franco, depósito franco, plazoleta franca, etcétera. Pero en nuestro país entendemos que es una zona franca aquel ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control del servicio aduanero, o su introducción al territorio nacional, como su extracción, no están gravadas con el pago de tributos —salvo las tasas— ni alcanzadas por

las prohibiciones de carácter económico. Además, como se trata de una excepción, tiene que estar establecida únicamente por ley, según lo establecen las disposiciones del Código Aduanero, las que solicito se inserten en el Diario de Sesiones, ya que desde el artículo 590 al 599 del mencionado código rigen todas las disposiciones en materia de áreas francas.

El proyecto que estamos considerando, además de tener un contenido discutible desde los puntos de vista doctrinario, económico, comercial y fabril, tiene una técnica legislativa defectuosa. Además, se comete una barbaridad, porque no se derogan los artículos de la zona de área franca definida en el Código Aduanero, con lo cual reitera disposiciones existentes.

A nuestro entender, existen dos tipos de zonas francas: las comerciales y las industriales. En las primeras, las operaciones autorizadas se limitan a las requeridas para la conservación de la mercadería, mejoras de su presentación o calidad así como acondicionamiento de su transporte, y pueden ser objeto de transferencia. En cambio, en la zona franca industrial se permiten operaciones de perfeccionamiento.

¿Cuál es el ámbito de la zona franca? Puede ser amplísimo como ocurre en el caso de la Tierra del Fuego o puede estar reducido a uno o varios terrenos unidos geográficamente. Su objetivo es la promoción y facilitación del comercio exterior, para lo cual tiene que estar exenta de todo procedimiento administrativo que entorpezca su desarrollo.

Desde el punto de vista del régimen administrativo aduanero se puede considerar a la zona franca como un compartimiento estanco, pero para desarrollarse tiene que estar relacionada con la zona que la rodea, por lo cual es imprescindible realizar un estudio de factibilidad y localización, sin dejar de tener en cuenta el apoyo logístico de las comunicaciones, fuentes de energía y otros elementos.

En el caso de las zonas francas industriales se debería estudiar el perfil industrial de la región y la factibilidad de concretar o no el proyecto, para lo cual es imprescindible considerar la producción de la zona.

Cuando analizamos este proyecto vimos que hay una delegación de facultades *in totum* a favor del Poder Ejecutivo...

Señor presidente: en razón de que nadie me está prestando atención creo que al momento de votar no se tendrá en claro qué es una zona franca ni dónde se estableció. En realidad, tam-

poco el proyecto aclara bien esta cuestión, porque es tan malo que puede dar lugar a cualquier cosa.

Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia ruega al señor diputado que no dialogue con otros legisladores.

Sr. Bisciotti. — Quería realizar una pequeña arenga espiritual para alertar sobre lo negativo del proyecto.

¿Cuáles son las contras de esta iniciativa? Estas islas, que son las zonas francas, constituyen un régimen de excepción. Su parte negativa es la repercusión que pueden provocar en la economía nacional, al desplazar productos del área a extra-zonas. Al no poder acceder a los beneficios de la zona, perderían su competitividad.

Por eso hay que estudiar esta repercusión negativa, que a veces se puede llegar a neutralizar, pero que determina que sólo funcionen positivamente con respecto a aquellas industrias que no impactan al resto de los productos nacionales, que podrían verse afectados en su explotación por los costos, distancia, etcétera.

La convención de Kyoto de 1976 expresa muy bien que los países, en general, han visto como favorable la creación de algunas zonas francas para favorecer el desarrollo competitivo en las exportaciones.

En general, los países, salvo algunas excepciones, sólo han establecido una o dos zonas francas. Estos son regímenes de excepción y no se puede abusar de ellos. Deben ser evaluadas a la luz de los intereses del país y de la proyección que tengan en la tarea de integración. En nuestro caso, hay que analizarlas en función del Mercosur. La urgencia proviene de que el Mercosur nos impediría instalarlas el año próximo. Ello genera toda la tarea de los *lobbies*.

Si leemos los fundamentos de la creación de las zonas francas, se podría llegar a la conclusión de que es racional hacerlo, pero crear tantas zonas francas como provincias existen, es irracional, porque se diluyen los efectos deseados y no se tienen en cuenta las consecuencias que originan en el universo económico del país. Esto es grave. El proyecto se hace otorgando facultades extraordinarias...

Sr. Albamonte. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Bisciotti. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: estoy siguiendo con atención las palabras del señor diputado y quería efectuar la siguiente observación.

En realidad, este proyecto tiende a poner en un plano de igualdad a todas las provincias, facultando a sus legislaturas y gobiernos a instalar una zona franca. De ninguna manera esta iniciativa obliga a las provincias a hacerlo. Sólo está resguardando un principio fundamental del federalismo, consistente en poner a todas las provincias en la misma condición.

Cada legislatura o gobierno provincial evaluará la conveniencia de instalar la zona franca. Aquí hay provincias que si no las instalan estarán en condiciones gravísimas. Por eso no nos sorprende y nos alegra que haya habido muchas coincidencias regionales, tanto de radicales, justicialistas y de otras fuerzas, que han visto que este proyecto tiende a solucionar problemas muy serios de sus distritos.

Otras provincias no tienen estos problemas y a pesar de que esta iniciativa las faculte, no van a emplear esa atribución.

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Señor presidente: me costaba ubicarme, porque siempre veía al señor diputado Albamonte a mi derecha...

Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia ruega al señor diputado que continúe con su exposición.

Sr. Bisciotti. — ...y ahora no lo puedo alcanzar a ver en su nueva ubicación.

Sr. Albamonte. — ¡Le presto los anteojos!

Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia ruega al señor diputado que se cña al tema en debate.

Sr. Bisciotti. — Es que me he quedado sin micrófono, señor presidente.

Hoy por la mañana venía caminando por Combate de los Pozos y pude advertir algunos carteles que decían "Bienvenida, compañera Adelina..."

Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia ruega al señor diputado que se limite a exponer sobre el asunto en debate.

Sr. Bisciotti. — Es que nuevamente me he quedado sin micrófono, señor presidente.

Sr. Presidente (Martínez). — Si el señor diputado se ajusta al tema en discusión va a continuar con el uso del micrófono

Sr Bisciotti. — Eso significa que lo estaban cortando.

Quería decir, señor presidente, que en el artículo 2º del proyecto en análisis notamos una delegación de funciones muy amplia en el Poder Ejecutivo, incluso facultándolo para crear en el territorio de cada provincia una zona franca. Vale decir que estamos asistiendo a una nueva inferencia del Poder Ejecutivo en ámbitos ajenos, cuando siempre estamos hablando de recortarle facultades.

Además, esto conculca la voluntad de los legisladores y el espíritu de la zona franca, que es un remedio de excepción y para el cual hay que partir de un análisis global de la política industrial, económica y comercial del país. Lo que sucede es que en la realidad, salvo el plante convertibilidad, la Argentina no cuenta con una política adecuada en ninguna de las materias que acabo de señalar.

Por eso se está decidiendo ahora este popurrí de zonas francas que responden, en definitiva, a los *lobbies* que operan.

Adviertan que las provincias realizan análisis y evaluaciones económicas cuando constituyen zonas francas, teniendo en cuenta la política industrial y de crecimiento que han diagramado para fomentar polos de desarrollo que movilicen la economía general del país y que respondan a los intereses comunes. Para eso se intenta la zona franca.

Tal escrúpulo está justificado por los costos que esta área debe afrontar a raíz de esta excepción, porque a partir de la instalación de la zona franca el Estado dejará de percibir ingentes sumas de dinero.

Entiendo que el Poder Legislativo tendría que efectuar un análisis sobre las posibilidades y méritos que merece la instalación de las zonas francas. De lo contrario terminarían por instalarse zonas francas en todas las provincias.

No me opongo a que se estudie la situación imperante en el centro o en el Noreste y que se establezca una zona franca incluso en el litoral, pero ello no significa que se siembre de zonas francas al país.

Es más, no existen antecedentes de ello. Además, si analizamos en conjunción con el Mercosur, esto puede dar lugar a represalias de otros países, como ocurrió en los meses de mayo y septiembre con Paraguay y Brasil a raíz de la tasa de estadística y de la concesión de excepciones arancelarias para el ingreso de bienes de capital de todo origen.

Estamos ante un nuevo caso de voluntarismo político que viene a ocupar el lugar de una política industrial y de crecimiento inexistente, que se puede transformar en un discrecionalismo político porque se otorgan amplias facultades al Poder Ejecutivo.

El artículo 3º determina que se condiciona la creación de las zonas francas en las provincias a la firma por parte de ellas de un convenio de adhesión cuyo contenido no figura especificado. Si la zona franca se debe crear por ley de la Nación, ¿para qué se determina la realización de un convenio que no conocemos? ¿Responde al interés del país?

Aparentemente la intención es crear zonas francas donde se haga mejor *lobby* o donde mejor se hayan alineado a las directivas políticas o a lo que marque el ministro de Economía.

Algunos se preguntarán por qué el doctor Cavallo permite esto. Aparentemente, lo permite porque puede motivar un poco la alicaidada política de exportaciones, aunque por el otro lado va a sufrir la merma o el drenaje de todas las actividades que no se vean favorecidas.

En realidad, debo aclarar con sinceridad que este error ya se cometió con el régimen de promoción industrial, que no es malo pero fue desvirtuado por su mal uso. Todos sabemos lo que sucedió con el régimen de promoción industrial, y esta iniciativa que intenta reemplazarlo anida sus mismos defectos. Se pasa por alto un análisis objetivo de las ventajas y desventajas competitivas con el objeto de crear la mayor cadena de valor y se sustituye una concepción política sin tener en cuenta las distorsiones que esto acarrea.

Si me ubicara en una postura liberal, teniendo en cuenta que estamos en una etapa en la que rige la ley de la oferta y la demanda, me preguntaría por qué razón establecemos por medio de una ley estas zonas francas cuando en realidad debería regir el libre mercado. Esta iniciativa contraría la política liberal implementada por este gobierno. Si a esto agregamos el hecho de que se faculta al Poder Ejecutivo nacional a autorizar operaciones de comercio al por menor dentro de las zonas francas, quizás en breve término el país va a ser un gran *free shop*, o habrá veintiocho grandes *free shops* desparramados por todo nuestro territorio.

Lo que sostengo no es exagerado sino que surge del análisis del juego de los diversos artículos del proyecto de ley en consideración.

Por ejemplo, al leer el artículo 40 de esta iniciativa, con toda seguridad uno debe agarrarse la cabeza. De acuerdo con esa disposición la labor del Congreso puede ser reemplazada por una tarca *ex post* de comisiones especiales que dan a un Comité de Vigilancia funciones de policía.

Sr. Albamonte. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Bisciotti. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: sin ánimo de contradecir al señor diputado Bisciotti, vicepresidente 1º de la Comisión de Comercio y hombre que conoce muy bien el tema del comercio, quiero plantear un punto de vista diferente. El afirmó que estas zonas francas se van a convertir en grandes cantidades de *free shops*, pero deseo recordarle que los *free shops* tienen un régimen aduanero especial con una franquicia máxima. Sin embargo, éste no es el caso de las zonas francas porque cualquier persona que compre un artículo dentro de ellas, independientemente del volumen y del monto de la factura, al retirarse debe pagar todos los derechos y los impuestos que corresponden. En consecuencia, hay una sustancial diferencia entre lo que es un *free shop* y una zona franca, que básicamente —no quiero entrar en una discusión de fondo— tiende a facilitar la producción de bienes y servicios que en muchos casos está frenada precisamente por lo que significa, por ejemplo, la importación masiva de insumos, que tiene una gran carga financiera. En cambio, una buena utilización de las zonas francas genera mayor cantidad de fuentes de trabajo y notables reducciones de costo.

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Señor presidente: una cosa es la zona franca como factor de desarrollo comercial o fabril para el ingreso y salida de mercancías, pero algo muy distinto es lo que propone el artículo que mencioné en el sentido de que además de la zona franca autoriza un *free shop* dentro de ella. Nosotros decimos que alrededor de la zona franca va a existir una zona desértica; va a ser tierra de nadie. ¿Quiénes van a instalarse en el resto del país? ¿Qué industrias van a competir allí? ¿Cómo van a desarrollarse? Sin duda que esto debe ser estudiado profundamente.

Debo decir que el artículo 42 es muy alarmante, ya que prácticamente se está modificando la legislación laboral, con consecuencias imprevisibles, porque se faculta al Poder Ejecutivo nacional a autorizar en las zonas francas mecanismos de flexibilización y emergencia laboral en las contrataciones cuando las circunstancias así lo aconsejen. Espero que la intención no haya sido consentir la concentración de trabajadores, pero debo advertir, por los riesgos que corremos, que podemos terminar en una Taipei, dándoles de comer arroz a los trabajadores.

Este es un proyecto de ley muy peligroso, por lo que me opongo a él en disidencia total, ya que he detectado errores de técnica jurídica y de mala técnica legislativa. No me cabe dudas de que la futura norma traerá consecuencias perniciosas para el país, lo que me obliga a votar negativamente.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Figueroa. — Señor presidente: por una especial deferencia de mis colegas voy a sentar nuestra postura adelantando desde ya que vamos a apoyar esta iniciativa, porque no estamos de acuerdo con los conceptos vertidos por el señor diputado preopinante.

Si dentro del contexto de las economías provinciales examinamos la situación por la que atraviesan las provincias fronterizas de las que provenimos muchos de nosotros, llegaremos a la conclusión de que las producciones agroindustriales están altamente deprimidas y muchas en vías de extinción debido a la distancia, los fletes, los peajes, la mala distribución económica del país y la falta de planificación.

Este auxilio que necesitamos constituye una herramienta fundamental del mundo de hoy, que no creemos vaya a producir los efectos negativos a los que se hizo mención.

Todos sabemos que en el norte de Chile existe una zona franca —Iquique— que ha producido una transformación espectacular, convirtiendo lo que era un desierto en un centro turístico, merced a la expansión que ha tenido esa zona, que era la peor del mundo en cuanto a su entorno geográfico. Por eso creemos que estas zonas deben crearse.

Es cierto lo que decía el señor diputado Albamonte en cuanto a que esto constituye una simple habilitación, y la planificación correrá por cuenta del gobierno, que dirá cuáles serán zonas francas y cuáles no. O sea que los factores económicos darán la pauta de cuáles sobrevivirán y cuáles naufragarán.

Necesitamos de las zonas francas, ya que constituyen una extraterritorialidad aduanera y fiscal que busca la libertad económica y las inversiones para generar mano de obra y proveernos de tecnología que hoy no tenemos, porque la competencia que ella desata necesariamente trae la tecnología del mundo.

Por eso hace falta habilitar todo esto, aunque tengamos tonalidades, matices y diferencias especiales. Muchas provincias han sufrido un bajón impositivo por el pacto fiscal que aún no hemos terminado de atar. Pero está claro que va a ser provechoso para las provincias en la medida en que se generen inversiones y se dinamice la economía. Se me puede decir que la zona franca releva impositivamente al inversor, pero en definitiva, esto se traduce en una dinamización de la economía y, en consecuencia, el señorío impositivo que aquélla pierde por haber cedido los impuestos de sellos y de ingresos brutos, lo va a recuperar indirectamente por la actividad económica que genera.

Otro tema importante es el Mercosur, que de ninguna manera está negando la existencia de esta zona. El anexo II del Tratado de Asunción, en su artículo 2º, dice que en caso de zonas mediterráneas o de países mediterráneos, estas zonas francas son tomadas como punto de destino para determinar el origen de las mercaderías, y el artículo 10 de ese mismo Anexo —expresamente, cuando trata del origen de las mercaderías— dice que todo aquello que se produzca en zona franca tendrá que seguir las reglas, es decir que legalmente está admitiendo su existencia, y económicamente tampoco hay colisión, porque cuando en las zonas francas, esencialmente de perfil industrial, se puede manipular, mejorar, inventar o fabricar nuevos productos con mercaderías de terceros países, ello está significando el modo de hacer comunitarias esas mercaderías. Es lo que pasa en Europa: por ejemplo, Italia significa una entrada por el sur al Mercado Común Europeo de mercaderías provenientes de terceros países, que de otra forma no entrarían a ese cerrado mercado. Y esto es lo que queremos acá: recibir materias primas de terceros países, darles el corte industrial necesario y reexportarlas. Así es como serán consideradas comunitarias, gozando del arancel cero y habiéndose integrado al Mercosur.

Cuando pasemos al debate en particular podremos escuchar a algunos colegas que tienen observaciones que formular.

Lo cierto es que no podemos caer en la ingenuidad de seguir discutiendo el instrumento, cuando Uruguay, por ley de 1987, ya las está

instalando enfrente de nuestras provincias mesopotámicas, cuando el presidente boliviano ya anunció que en las fronteras con nuestro país instalarán zonas francas, y cuando Chile tiene una enorme presencia por el norte con Iquique y por el sur con Punta Arena a través de instrumentos parecidos.

Hace falta que nos pongamos en igualdad de condiciones para poder competir en la forma que nos reclaman estos nuevos tiempos. No hay ninguna duda de que con este instrumento económico podemos promover a las provincias periféricas.

Por estas razones votaré afirmativamente en general por este proyecto en discusión.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Seguí. — Señor presidente: brevemente voy a explicar mi disidencia respecto de este proyecto de ley. Para tranquilidad de los señores diputados que alientan esta iniciativa, adelanto que voy a votar favorablemente, porque pienso que entre la nada y lo peor, es mejor lo peor.

Mi disidencia se funda en un principio de federalismo que me hace guardar para las provincias el mayor de los respetos a sus autonomías. No escapa al criterio de ninguno de nosotros que el tema de las zonas francas estaba dormido en el país, que lo pone en marcha el Poder Ejecutivo nacional cuando, al borde de las elecciones de 1991, reglamenta la ley 5.142 del año 1907, que disponía el establecimiento de zonas francas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Posiblemente inspirado en alguna necesaria ayudita electoral, estableció zona franca en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

A raíz de ello, a lo largo y a lo ancho del país estalló la necesidad de fijar zonas francas en otras provincias, despertándose así el sentido federal de los argentinos; cada provincia quería tener su zona franca. En esta Cámara se presentaron más de veinte proyectos de ley y entre quince y treinta proyectos de declaración en relación con la incorporación de las demás provincias a las disposiciones de la ley nacional de 1907.

El proyecto de ley en debate no es ni bueno ni malo; pero lamentablemente vuelve a dejar en manos del Poder Ejecutivo —así reza el artículo 2º, pero quiero suponer que es el Poder Ejecutivo nacional, según se desprende del resto del articulado— la palabra final en torno de este tema. El establecimiento de zonas francas es una facultad que corresponde al Congreso

de la Nación. Hubiera sido suficiente con que el Poder Legislativo creara el instituto "zona franca", quedando como atribución de las provincias establecerlas en el lugar que más conviniera a cada una de ellas.

Es cierto que se va a decir que se han otorgado muchas facultades a las provincias; en tal sentido se explica con razonabilidad en la exposición de motivos todo lo concerniente a las atribuciones que ellas tendrán. Se crea un comité que estudiará, evaluará y calificará todos los proyectos, llegando al borde de la adjudicación; pero es justamente en el inciso b) del artículo 14 donde se detiene esa facultad, pues todo queda sujeto a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. De esta manera nuevamente sometemos a los gobernadores de provincia a peregrinar ante el gobierno nacional detrás de los diferentes proyectos. Esto es totalmente innecesario porque las provincias son bastante adultas para resolver por sí solas si conviene o no el establecimiento de zonas francas, cuya actividad reglamentará una ley del Congreso. Con una timidez impropia de diputados de provincia estamos admitiendo este tutelaje por parte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Hubiera bastado con que las provincias adjudicaran las zonas francas en los lugares que más les conviniera —teniendo en cuenta la actividad comercial e industrial a desarrollar— y que la Nación utilizara sus resortes de control vía Administración Nacional de Aduanas, Dirección General Impositiva o Gendarmería Nacional para poder investigar el desarrollo de las actividades dentro de cada determinada zona franca. ¿El Estado nacional acaso no efectúa todos sus controles en zonas de explotación industrial como la vitivinícola o en otras actividades importantes del país? ¿Por qué mantenemos este pedacito de ley que dice que será el Ministerio de Obras y Servicios Públicos el que aprobará lo que laboriosamente hagan las provincias mediante sus dos comités y el Poder Ejecutivo de cada una de ellas? Los controles del Estado nacional son suficientes para ello y no es necesaria esa disposición.

De allí nuestra oposición a este texto legal. Quiero que se trate a las provincias como entidades adultas del sistema federal que pueden resolver con toda autoridad el establecimiento de una zona franca. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Becerra (N.E.). — Señor presidente: he

res diputados Seguí y B'sciotti, ambos integrantes de la Comisión de Comercio. En tal sentido aprovecho esta ocasión al término de sus mandatos para manifestarles que me he sentido honrado al compartir con ellos el trabajo en dicha comisión durante los dos últimos años. (Aplausos.)

Creo que es atinada la reflexión del señor diputado Seguí aunque no comparto su posición cuando dice que entre la nada y lo peor él se queda con lo peor y por lo tanto va a votar afirmativamente este proyecto.

Estamos transitando la transformación de un sistema político en la Argentina a la cual el Parlamento no es ajeno. Estamos en la búsqueda de lo posible y debemos trabajar cotidianamente para que entre lo posible y lo ideal achemos cada vez más la franja y creemos las condiciones para lo posible.

Es cierto que cuando a mediados de 1991 el presidente de los argentinos reactivó la ley 5.142, que establecía una zona franca en el puerto de La Plata, fueron innumerables las voces que desde todos los rincones de la República Argentina reclamaron para sus respectivos territorios la implementación de zonas francas.

Fueron numerosos los proyectos presentados por legisladores nacionales, y en ese sentido en esta Cámara obran los antecedentes, pero a partir de allí se fue generando la necesidad de establecer un principio de igualdad entre esa zona franca, que fue reactivada y que data de 1907, y la zona franca de Tierra del Fuego; y además un principio de igualdad ya no de las provincias entre sí sino de nuestro país en relación con las naciones limítrofes.

Por ello este proyecto quizás sea el marco jurídico ideal para el funcionamiento de las zonas francas, pero a su vez no viene a crear el instituto de la zona franca toda vez que ya ha sido instituido. En ese sentido legisla expresamente el Código Aduanero en los artículos 590 a 599. Es decir que el proyecto que estamos considerando de ninguna manera viene a constituir en el país la figura de la zona franca. Es cierto que el artículo 591 del Código Aduanero establece que las zonas francas en el país deben fijarse por ley, y esto es precisamente lo que se está haciendo con este cuerpo legal cuya sanción estamos procurando dar en el día de hoy.

Este proyecto, que no es imperativo ni obligatorio para las provincias argentinas, viene a establecer en el ámbito de cada uno de los territorios provinciales la posibilidad de poner

en funcionamiento una zona franca, es decir que se está generando por ley —como lo exige el Código Aduanero— el ámbito de radicación de una posible zona franca en cada una de las provincias argentinas, y a su vez se está habilitando al Poder Ejecutivo para la determinación específica del lugar, en concordancia con las provincias.

Asimismo, la habilitación que otorga la ley para que el Poder Ejecutivo eventualmente pueda generar cuatro zonas francas adicionales es perfectamente constitucional. El nuevo derecho público otorga esta franquicia de delegación legislativa de un poder a otro, lo que en el derecho público antiguo estaba absolutamente vedada. Hoy es reconocido en todos los foros internacionales que es perfectamente lícita la delegación de atribuciones mediante el dictado de una ley, que es precisamente lo que se quiere hacer mediante este proyecto de ley de reglamentación de zonas francas.

Con la sanción del proyecto se aceptará lo establecido en el artículo 591 del Código Aduanero, así como lo previsto en el artículo 67, incisos 1, 9, 12 y 16 de la Constitución Nacional. Pero el establecimiento de zonas francas no es una decisión estrictamente legal o parlamentaria, sino una decisión política y es por eso que sabiamente el Código Aduanero consagra la institución de la zona franca pero delega en el dictado de una ley futura la determinación de los lugares, las circunstancias, las duraciones y demás condiciones de funcionamiento de aquella. Este proyecto trata de que dicha decisión política sea compatible con los intereses de cada una de las provincias que deseen instrumentar una zona franca en sus respectivos territorios.

Creo que podríamos hacer un desarrollo ilustrativo sobre qué es una zona franca, sobre la implementación de este instituto en el Código Aduanero y sobre las disposiciones emanadas del Consejo de Cooperación Aduanera, ratificadas por la Convención de Kyoto sobre armonización y simplificación de los regímenes aduaneros. Pero lo importante es que no hemos avanzado de la nada hacia lo peor. Hemos avanzado de la nada hacia lo posible, y cada vez que tratamos de estrechar la franja de la nada hacia lo ideal vamos a concretar leyes posibles en este sistema que cada día queremos perfeccionar para que evolucione en el futuro.

Con la sanción de esta ley el Congreso dará un paso hacia adelante, las provincias se sentirán satisfechas y en definitiva quedará reemplazada aquella inquietud de mediados de 1991

cuando, al implementarse la zona franca en el puerto de La Plata, todas las provincias argentinas reclamaron iguales derechos. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Gargiulo. — Señor presidente: adelanto el voto favorable en general a este proyecto de ley.

Al celebrarse en 1991 el Día de la Frontera en la ciudad sanjuanina de Jáchal, junto al diputado Gómez Centurión tuvimos la oportunidad de presenciar una manifestación de todo ese pueblo de frontera pidiendo la incorporación al régimen de las zonas francas como una de las grandes posibilidades de desarrollo que tenía. Quiero recordar el compromiso que asumimos en aquel momento con esa población que pedía con muchos fundamentos la posibilidad de acceder al régimen de zonas francas, y creo que este proyecto de ley contempla esa y otras necesidades de crecimiento y desarrollo con un instituto que está previsto en el Código Aduanero.

Por eso quiero que quede expresa constancia de mi voto favorable al proyecto en consideración, actitud que seguramente será imitada por mi compañero de bloque, el señor diputado Gatti.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.

Sra. Marelli. — Señor presidente: la provincia de Misiones tiene una situación geográfica y económica estratégica. Todos sabemos que esta provincia posee características especiales en su economía que la hacen única dentro del contexto nacional, porque el 90 por ciento de su territorio limita con otras naciones y sólo 70 kilómetros de su perímetro da con otras provincias de nuestro país.

El puente que une las ciudades de Posadas y Encarnación, además de progreso, trajo aparejada una serie de inconvenientes para los comerciantes e industriales de la zona, como consecuencia de las enormes desventajas en que se encuentra la Argentina con respecto a Paraguay y Brasil. Entre otras razones ello es así por carecer de una política de fronteras que afirme nuestra soberanía a través del apoyo sistemático y persistente a los empresarios del lugar, por la implementación de un programa económico que acentúa las asimetrías existentes, porque el dólar anclado resta competitividad a nuestros precios y por la carga impositiva que tienen los productos argentinos, lo que provoca que se adquieran en Paraguay y Brasil a menor precio que en la República Argentina.

Conscientes de estos inconvenientes, los diputados del bloque radical presentamos un proyecto de ley en el que pedimos que se declare y establezca el régimen legal de zona franca en todo el territorio de la provincia de Misiones. Algunos pensarán que esto es una utopía, pero por las razones que expuse y por las que los señores diputados conocen, queda en claro que toda la provincia de Misiones es zona de frontera.

La iniciativa que estamos considerando soluciona el problema de una sola localidad y deja a 74 municipios —de los 75 que componen la provincia— totalmente desprotegidos. Por ello los diputados de la oposición, en forma conjunta con los diputados oficialistas, acompañaremos a nuestro gobernador a fin de revertir la injusticia que este proyecto comete en el sentido de que será el Poder Ejecutivo quien decidirá en qué lugar se instalará una zona franca. Lo que pretendemos es que nos permitan a los misioneros elegir el lugar que consideremos más adecuado para la ubicación de estas zonas. Si bien ello no soluciona totalmente la situación, por lo menos es un paliativo al tremendo problema económico e industrial que sufren Misiones y otras provincias limítrofes.

Por las razones expuestas votaremos favorablemente el dictamen acordado con los representantes de otros bloques, porque deseamos la pronta solución de la situación antes mencionada, y al mismo tiempo dejamos constancia de que vamos a luchar denodada e incansablemente para erradicar definitivamente el problema y lograr un cambio fundamental en la afligente situación por la que atraviesa Misiones. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Koth. — Señor presidente: estamos considerando una ley trascendental para toda la Nación, aunque se trata de los *free shops* mencionados por el señor diputado Bisciotti. Para la provincia de Misiones es algo imprescindible.

Si bien tengo disidencias con varios artículos, voy a votar por la afirmativa. Mi provincia, al igual que las que limitan con países como Brasil y Paraguay, está siendo asfixiada. Más aun todos los días se está matando a los comerciantes, industriales y familias obreras de la provincia de Misiones.

De todos modos tengo disidencias con este proyecto. Por ejemplo, el artículo 39 dice: "El área física que se declare zona franca será delimitada y cercada de forma tal que permita garantizar su aislamiento respecto del territorio aduanero general."

Es decir que en virtud del lugar en que se instale la zona franca, las ganancias serán para pocos y sólo se beneficiarán algunos obreros que irán a trabajar allí. Ojalá que sean muchos los trabajadores que se desempeñen en la zona franca, pero ello no traerá solución a nuestra provincia de Misiones, a la que están asfixiando y matando todos los días. A pesar de este problema, voy a apoyar con mi voto esta iniciativa y solicito a los diputados de mi bancada que me acompañen para que el proyecto se apruebe de una vez por todas.

Espero que esto no sea sólo declamatorio. Hace mucho tiempo que lo estamos tratando, y ahora se lo ha acordado en dos o tres días. El borrador de la iniciativa ha llegado recientemente a nuestras manos y no lo hemos podido estudiar, pero vamos a seguir adelante para que nuestra Nación y nuestra tan marginada provincia de Misiones puedan progresar de una vez por todas.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parente. — Señor presidente: el 19 de junio de 1988, ya hace más de cinco años, presentamos un proyecto que solicitaba al Poder Ejecutivo que declarara zona franca el puerto de Diamante de la provincia de Entre Ríos.

Entendíamos que este sistema, que se había aplicado exitosamente en varias naciones del mundo, podría brindar beneficios importantes a zonas del país que históricamente han estado marginadas. Todo ello en la medida en que dicho sistema estuviese cuidadosamente regulado.

Aquí se ha hecho referencia a los padecimientos por los que atraviesan las economías regionales. Se piensa —creo que acertadamente, aunque éste no es el *desideratum*— que la postergación por la que atraviesan nuestras economías regionales —que es nada más ni nada menos que la postergación por la que atraviesan otros sectores de la sociedad argentina— podría solucionarse por medio de la sanción de esta ley. Es un primer paso a partir del cual podemos pensar en la solución de los problemas económicos de nuestras provincias y de las distintas regiones del país, pero de ninguna manera podemos decir que ello se logrará con la sanción de esta ley si no está sostenida por una política económica distinta, de cuño absolutamente diferente al que presenta la que hoy rige en el país.

Apoyamos esta iniciativa porque fuimos autores de una similar en agosto de 1989 junto con el señor diputado Del Río, por la provincia

de Neuquén, y la señora diputada Guzmán, por la provincia de Jujuy, cuando recién se empezaba a tratar este tema y sólo había estudios sobre la materia por parte de organismos vinculados al CFI y a determinadas provincias. Algunos intelectuales y economistas talentosos habían comenzado a incursionar en esta cuestión y nosotros abrimos la discusión a través de la presentación de un proyecto.

En su informe el señor diputado Alvarez señaló que en el proyecto oportunamente presentado se tuvo en cuenta el resto de las iniciativas y en tal sentido agradecemos la atención que se dispensara a la propuesta —modesta, por cierto— que formulamos en su oportunidad.

Sin embargo, luego de analizarlo, el texto incluido en el Orden del Día N° 1.653 —salvo que se hayan introducido modificaciones de último momento— no satisface las observaciones que formuláramos y que muy brevemente enunciaré.

En primer lugar, en cuanto al objeto de la zona franca la actividad industrial, comercial y de servicios, debe limitarse con el único fin de que se exporte en productos manufacturados. Estamos de acuerdo —tal como lo planteó el señor diputado Bisciotti— en que la acción de los usuarios de la zona franca no debería colisionar con los intereses de la industria ya instalada o a ubicarse en el país. Sabemos que nuestra industria nacional está atravesando momentos difíciles y sufriendo severos ajustes tal como ocurre con otros sectores tanto o más importantes de la actividad económica nacional, pero es necesario atender específica y puntualmente este aspecto para no causar mayores perjuicios a la actividad industrial.

En segundo lugar planteamos la prohibición expresa de que los usuarios de la zona franca puedan acogerse a regímenes de promoción industrial, comercial o de otro tipo a fin de no caer en los vicios de regímenes de otras épocas que fueron motivo de largas sesiones en esta Cámara en las que se hicieron severas críticas. Insistimos en que debemos aventar la posibilidad de crear regímenes de promoción, particularmente a través de esta ley.

En reconocimiento expreso del régimen federal de gobierno, y particularmente al artículo 104 de la Constitución Nacional, sosteníamos y sostenemos que el establecimiento de zonas francas debe dejarse librado al arbitrio de las provincias, al resorte de sus autonomías, ya que seguramente serán sabias, tal como lo han explicitado otros oradores, particularmente la señora diputada Gómez de Marelli.

Nos oponemos al sistema de creación de zonas francas tal como se establece, dejando librada tal decisión en manos del Poder Ejecutivo, a cuyo arbitrio quedará la creación de cuatro zonas adicionales a las contempladas por la legislación que hoy sancionamos. Esta circunstancia nos genera severas dudas, sobre todo en torno a la profundidad del análisis que se realizará antes de adoptar las decisiones.

Además decíamos —aunque en una jerarquía inferior en materia de observación— que el régimen a crearse no debería incluir la incorporación de organismos que importen gastos superfluos o innecesarios o la creación de jerarquías burocráticas que irroguen gastos al vaporeado presupuesto nacional.

En otro orden de ideas, nos merecen severos reparos los conceptos establecidos en el artículo 42 de la iniciativa que se propicia en cuanto a la creación de regímenes específicos de flexibilización en materia laboral en función de que en el país rige una legislación específica sobre el tema que precisamente ha sido motivo de un profundo análisis en este recinto, por lo que resulta sobrecabundante insistir sobre este aspecto. Diría que no es de buena técnica legislativa que por medio de un artículo excepcional de una ley se intente innovar en materia laboral.

Sería tan peligroso como el fallo reciente de la Corte publicado en los diarios de estos días, por el cual se ratifica un decreto del Poder Ejecutivo que viola la autonomía de las entidades sindicales al dejar sin efecto disposiciones de un convenio colectivo de trabajo. Reitero que este artículo 42 sería tan peligroso como ese fallo de la Corte que ratifica las atribuciones ejercidas en exceso por el Poder Ejecutivo.

En definitiva, tal como cuando hace unos años sosteníamos respecto de la provincia de Entre Ríos la necesidad de que se reviera la ley vinculada a zonas y áreas de frontera, ahora que estamos debatiendo una iniciativa en materia de zonas francas también creemos que debe dejarse a las provincias que ellas dispongan lo pertinente en este aspecto. Legislar en otro sentido sería violar lo establecido por el artículo 104 de la Constitución Nacional.

No obstante lo expuesto, en orden a los propósitos que se han expresado claramente, nos identificamos con este sistema, con las limitaciones señaladas y las que otros señores diputados han volcado en este debate, adelantando así nuestro voto afirmativo con relación a esta iniciativa.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Espeche. — Señor presidente es la primera vez que estoy profundamente en desacuerdo con un proyecto de ley al que voy a apoyar en general.

En realidad, no me sorprende este proyecto de ley, porque antes de que fuera enviado a esta Cámara habíamos concurrido en compañía de otros señores diputados de mi provincia a dialogar con representantes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a fin de analizar la posibilidad de establecer una zona franca en la provincia de Salta. Allí nos enteramos de la incipiente voluntad de gestar este mamarracho de normas que impone o posibilita una zona franca por provincia.

Comparto lo manifestado por varios legisladores, entre ellos el señor diputado Bisciotti, cuando efectuaron una clara objeción a la posibilidad de tener 27 zonas francas en el país. Una zona franca tiene características especiales. Es el producto de una decisión política, como bien se refería en su discurso. Lamentablemente, esta voluntad política encarada por el señor presidente de la Nación no fue acertada cuando dispuso una zona franca en La Plata.

Estoy convencido de que una zona franca debe ser responsabilidad del conjunto de la Nación y debe permitir el modo de compensar profundos desequilibrios que están inscritos dentro del país y que sin duda los habitantes de las provincias argentinas vivimos todos los días. Así con sorpresa vemos que cuando se trata de repartir posibilidades —sin duda muchas han de fenecer— todas las provincias pueden ser acreedoras, pero cuando se trata de otorgar beneficios sólo algunas provincias argentinas pueden serlo. Fue así que con solidaridad —a la que me opuse en su oportunidad— este Congreso dispuso la creación de un fondo especial para la provincia de Buenos Aires, sacando plata de los otros estados argentinos, dinero que legítimamente corresponde a los ciudadanos de cada una de las restantes provincias argentinas. También se sustrajeron recursos de las provincias para entregárselos a los jubilados.

Este Parlamento y la Nación están dando grandes recursos para promociones industriales y reparaciones históricas de algunos estados argentinos, y hoy que se propugna la creación de zonas francas en el país para terminar con los tremendos desequilibrios económico-financieros se posibilita que cualquiera pueda acceder a este beneficio. En ese sentido yo me permito refutar esa posición con total honestidad, y el tiempo dirá quién tiene la razón.

El señor diputado por Jujuy sostuvo que esta cuestión de las zonas francas va a estar marcada por los actores económicos, y en este punto quizá tengamos la primera sorpresa, el tremendo desagrado. Las zonas francas se instalarán en las provincias que tienen industrias, una mejor infraestructura y una actividad económica realmente grande y fuerte que rápidamente posibilita no sólo su instalación sino su florecimiento, quedando postergadas provincias como las del Noroeste argentino, que están necesitando la instalación de una zona franca y que además reúnen las condiciones para ello.

Salta limita con seis provincias argentinas y tres países, y tiene tres zonas francas como vecinas: una en Chile, otra en Bolivia y otra en Paraguay. Algo similar les sucede a los jujeños. Al respecto, pienso que la decisión política deberá ser favorecer los intereses de toda una región, y acá es donde comienzan verdaderamente los problemas. No creamos las zonas francas, diluimos la responsabilidad política y la transferimos al Poder Ejecutivo nacional para que sea él quien en definitiva resuelva en ese sentido. Al día de hoy nada garantiza que la decisión del Poder Ejecutivo nacional no seguirá estando donde más votos hay, como es el caso de Buenos Aires y otras provincias argentinas, y no donde más se necesita.

No quería dejar de hacer estas reflexiones porque este proyecto desvirtúa absolutamente lo que es una zona franca. Esta iniciativa pretende transformar al país en una zona franca, lo que no va a ser posible porque la Argentina no podrá tener tal cantidad de zonas francas. Quizá algunas se instalarán y rápidamente desaparecerán. Al igual que todos mis comprovincianos yo voy a pelear con todo mi ahínco y mis ganas para que ése no sea el caso de Salta, pero lo cierto es que como decía el señor diputado Seguí, es mejor lo peor que la nada, a lo que yo agregaría que algo es algo, peor es nada.

Por lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo respecto del proyecto de ley en consideración, pero con estas reflexiones que he efectuado y advirtiendo que se trata de un arma de doble filo, como asimismo que lamentablemente los legisladores no estamos cumpliendo con lo que significa ejercitar la responsabilidad de la decisión política con profundas repercusiones económicas como las que tiene una zona franca en un país que debe desarrollarse de modo armónico.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Dussol. — Señor presidente: en 1980 presenté un proyecto solicitando la creación de una zona franca en mi provincia, y al fundamentarlo pensé honestamente que el hecho de declarar un lugar como zona franca implicaba decir por qué se procedía de esa forma.

Consideraba que el hecho de declarar como zona franca al puerto de Barranqueras y a la ciudad de Vilelas, en la provincia del Chaco, implicaba un beneficio, porque forman parte de un punto neurálgico.

Barranqueras constituye un puerto de antigua data en la República Argentina, cortado por el corredor bioceánico y la hidrovía de la que mucho hablamos y sobre la cual nada hacemos. Estas fueron las razones que me llevaron a pensar que Barranqueras podría ser una de las zonas francas del país. Sin embargo, me encuentro con un proyecto que dice que cualquier provincia puede tener su zona franca. Entonces me pregunto, como lo hizo el señor diputado Espeche, qué va a pasar en la Argentina si en cada provincia vamos a tener una zona franca. ¿Quién va a producir para cada zona franca?

En el proyecto que había presentado declarando zonas francas al puerto de Barranqueras y a la ciudad de Vilelas, argumentaba que se trataba de un punto neurálgico, porque tenemos enfrente a los países hermanos de Brasil y Paraguay, y a la zona mesopotámica entera. Sin duda alguna no se trataba de un capricho personal.

Pero hoy estoy muy nervioso y preocupado porque veo que por medio de este proyecto de ley se autoriza a declarar zona franca a cualquier área del país. Entiendo que la declaración de zona franca implica realizar un estudio previo respecto de los países limítrofes. Por ejemplo, Chile tiene una sola zona franca —Iquique— y nosotros queremos declarar zona franca a toda la República Argentina.

Más allá de que no voy a dejar de votar favorablemente este proyecto de ley que considero importante para todas las provincias, debo manifestar que es necesario un estudio concienzudo para analizar las posibilidades de todas las zonas, a fin de ver qué provincia debe declararse como zona franca. De esta forma podremos conseguir el despegue de esta Argentina a veces postergada.

Insisto en que votaré afirmativamente el proyecto en general y en la consideración en particular efectuaré algunas observaciones.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leconte. — Señor presidente: este proyecto de ley que consideramos trata de canalizar una aspiración de casi todos los sectores del país por tener una zona franca.

Se han presentado innumerables proyectos en esta materia. Nosotros elaboramos uno declarando zona franca a Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, y hace dos años todos los legisladores representantes del pueblo de mi provincia presentaron otro declarando zona franca a Ituzaingó y Santo Tomé.

Hay provincias como Corrientes y Salta que limitan con tres países por lo que valoran lo que significa la declaración de zona franca, máxime cuando las naciones vecinas ya las han establecido desde hace tiempo. Pero este proyecto no es la panacea para todos los males. Cuando el país tenía una economía cerrada, la instalación de una zona franca era realmente importante. Hoy, que tenemos apertura económica, este proyecto es una herramienta más, y así la debemos tomar a pesar de sus imperfecciones, aunque pueda mejorárselo. Pero lo cierto es que constituye un avance que abre el cauce para una nueva actividad económica con vocación exportadora, que se puede trasladar a todos los lugares del país. Cuantas más zonas francas existan, menor importancia tendrá cada una de ellas, pero hay que hacerlo, y por encima de las limitaciones e imperfecciones que tiene este proyecto, constituye un avance en el país, por lo que en nombre del bloque liberal de Corrientes adelanto nuestro voto afirmativo.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. Sánchez Caldeano. — Señor presidente: deseo resumir mi posición frente a este proyecto de ley, por cuanto la experiencia de mi provincia en materia de áreas francas o de zonas de excepción aduanera me lleva a inducir algunos conceptos que a mi entender son realmente importantes.

En primer lugar, debemos reconocer que el Código Aduanero es el elemento fundamental sobre el cual debería basarse todo el desarrollo de este sistema de áreas y zonas francas. El Código Aduanero —que lleva más de doce años de vigencia— puede ser perfeccionado, pero de cualquier forma debe constituir la guía por la cual circule esta iniciativa que estamos considerando.

Personalmente considero que el proyecto que estamos examinando no esclarece perfectamente los diferentes tipos de áreas y zonas francas. Debería establecer una clasificación de las áreas, es decir, si se trata de áreas comerciales o in-

dustriales, si se trata de puertos o aeropuertos francos, si se trata de depósitos francos, etcétera.

Este es uno de los inconvenientes que veo en la aprobación de este proyecto, por cuanto se podrán establecer zonas parecidas que entrarán en competencia entre sí, perjudicando lo que se pretende con la aprobación de esta norma.

El país atraviesa en este momento una situación económica difícil, después de la aplicación de un programa económico al que prácticamente todos los argentinos hemos adherido; pero este programa o esta situación económica del país ha hecho que diferentes regiones —especialmente las economías regionales, las marginales o periféricas— sean las que estén recibiendo el mayor impacto negativo de este plan. Por lo tanto, la creación de zonas de este tipo —en donde hay un estímulo a la inversión, al desarrollo y a la creación de nuevas fuentes de trabajo— traerá aparejado un beneficio inmediato, pero siempre y cuando los programas a desarrollar estén perfectamente comprometidos.

Otro tema importante que debe tenerse en cuenta es el de la seguridad jurídica, de manera tal que aquellas industrias o emporios que se asienten en determinados lugares tengan la garantía suficiente como para que la permanencia de las acciones sea realmente cierta.

Son demasiadas las objeciones que tenemos en torno de este proyecto de ley, razón por la cual opino que este asunto debería volver a las respectivas comisiones a fin de que en ellas se lleve a cabo un estudio más completo y eficiente y obtener así una reglamentación mucho más acertada con respecto a las actividades de las zonas francas. Propongo que se conforme una comisión especial compuesta por integrantes de las diferentes comisiones que han participado del análisis de este proyecto de ley, a efectos de perfeccionarlo y poder presentar así un instrumento que realmente sea provechoso, en particular para las regiones más desamparadas.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — Señor presidente: desde hace tiempo nuestro país viene requiriendo —muchos señores legisladores así lo han hecho mediante sucesivos proyectos— el establecimiento de zonas francas para el desarrollo industrial y la potenciación de nuestra alicaída industria. Sin embargo, por el modo en que está concebido este proyecto de ley y las observaciones que formularé —que se sumarán a otras que ya han

sido vertidas en este recinto—, adelanto el vote negativo de nuestro bloque con respecto a la iniciativa en tratamiento, por la sencilla razón de que, hablando en criollo, nos va a salir más ca o el collar que el perro.

No es verdad que con esta legislación se vaya a tener un proyecto económico superador del atraso industrial de ciertas zonas de nuestro país; basta poner de manifiesto y como ejemplo lo que han hecho algunos países vecinos que tienen un par de zonas francas. Me refiero a Ciudad del Este, en Paraguay, y Foz de Iguazú en Brasil; lo único que se ha incentivado en ellas es el comercio, los *shoppings*, pero no el desarrollo industrial. Mucho menos va a ocurrir mediante esta legislación, que no privilegia lo industrial y que, a raíz de la amplitud de facultades que se otorgan a los concesionarios, posibilita la comisión de delitos que nuestro Código Aduanero tipifica muy claramente como contrabando.

Estamos creando no veintiséis zonas de desarrollo industrial sino veintiséis *shoppings*. Por otro lado, la definición de “zona franca” contenida en este proyecto ya estaba incluida en los artículos 1º y 2º del Código Aduanero. De modo que si no es para establecer una multiplicidad de concesiones a los concesionarios, este proyecto carece de sentido.

Por otra parte, se avasalla el federalismo. Observemos que las provincias aquí tan sólo aparecen para ser consultadas, pero no tienen facultad decisoria. No pueden decidir cuál es el momento en que funcionarán las zonas francas ni cuándo pueden suprimirlas. Con eso se le pone un cerrojo más y ya van tantos, a nuestro federalismo. Más aun, se establece de un modo indeterminado quién va a tener las facultades de policía y de funcionamiento de estas zonas francas. Si bien se señala con claridad que va a ser el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el encargado de ellas, queda en la penumbra cuál va a ser el área y el funcionario responsable. Por lo tanto, esto también queda indeterminado.

Además se observa que se corre el riesgo —y así va a ocurrir— de que lejos de crear polos de desarrollo surjan tremendas desigualdades entre los territorios de las provincias. Porque van a obtener inmediatamente un desarrollo comercial las zonas cercanas a los *shoppings*, en tanto que las otras por el contrario van a quedar en el mayor desamparo y sin que las provincias en este aspecto tengan una participación decisiva.

Asimismo se establecen veinticuatro zonas francas, número por demás excesivo cuando

como se acaba de señalar, por ejemplo Chile tiene tan sólo una en la zona de Iquique, y Paraguay otra en Ciudad del Este.

Y hay algo más: el Poder Ejecutivo tiene facultad para crear otras dos zonas francas indeterminadas para que a su arbitrio, conforme a las conveniencias electorales, se establezca cuál es el lugar más aconsejable.

Finalmente, una última objeción a las tantas que ya se han señalado. El Poder Ejecutivo, que no se atrevió aún a mandar a este recinto el proyecto de ley de flexibilización laboral, establece de un modo subterráneo y elusivo la manera de implantarla, habida cuenta de que como estas zonas no tienen régimen laboral, los trabajadores que en ellas presten sus servicios se verán totalmente desamparados, llegando a la violación de las leyes laborales que rigen en el ámbito de nuestra República.

Por todo lo expuesto adelanto nuestro voto negativo a la sanción de esta norma.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: en primer lugar queremos agradecer la participación y el trabajo de todos los asesores de las comisiones que intervinieron en forma fecunda en este proyecto. Es cierto que quizás éste no sea el mejor, como también lo es que el Código Aduanero argentino tiene perfectamente legislado todo el tema de zonas francas y de zonas de extraterritorialidad aduanera especial. También es cierto que esa ley específicamente faculta al Congreso de la Nación para establecer cuáles son estos territorios especiales.

El problema que se daba para sancionar esta ley data del momento en que una gran cantidad de diputados presentaron proyectos en el mismo sentido, por supuesto todos pensando que estas zonas francas encuentran su lugar ideal de asentamiento en sus propias provincias. Es así como nos encontramos en un callejón sin salida ya que no íbamos a poder determinar ni siquiera racionalmente cuál iba a ser el espacio físico donde pudiéramos asentar la primera de esas zonas francas, y cifrando la mayoría de los diputados sus expectativas en este proyecto, hemos encontrado en la redacción de cada artículo una serie de mecanismos que fueron destrabando su sanción y a la vez facilitando la posibilidad de implementación de alguna primera zona franca en el país.

Hay que decir que evidentemente esta legislación podrá tener errores en la práctica pero alguna vez había que comenzar con una zona franca y cuando hayamos avanzado podremos introducir una serie de mejoras. También es

cierto que la legislación vigente no es tan antigua como para que no le haya permitido al Poder Ejecutivo nacional mandar un proyecto de ley con los espacios físicos del conjunto de las zonas francas. Me parece que hubo un poco de cobardía —y esto lo digo bien intencionalmente— por parte del Poder Ejecutivo, ya que algunos funcionarios se comprometieron en distintos lugares del país con el establecimiento de zonas francas, y es entonces que se hace sumamente difícil decir a qué provincia sí y a qué provincia no, o a qué zona sí y a cuál no. Si somos capaces de interpretar el cúmulo de contradicciones que se están produciendo, también podremos interpretar que la redacción a la que hemos llegado es la posibilidad efectiva de que esto se produzca.

Que vayan a existir 28 zonas francas en el país, algunas más, algunas menos, no va a significar la panacea de la economía. En esto hay que ser sumamente sincero: solamente será una herramienta más que puede coadyuvar a dar soluciones específicas a lugares aislados, perdidos y olvidados de la República.

Entiendo que será muy limitada la cantidad de zonas francas que sobrevivan en el país. Creo que en esto vamos a encontrar un gran escollo que es la creación de la zona franca de La Plata, que encontrándose ambientada en quizás las mejores condiciones de infraestructura de desarrollo puede acaparar la mayor cantidad de capitales y atraer la mayor cantidad de hombres y empresas que inviertan capitales dentro del área aduanera en contra de los intereses del interior del país. Pero dada la situación en la que nos encontramos habrá que avanzar de alguna manera y ver cómo este proyecto puede plasmarse en soluciones concretas para nuestra comunidad.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: adelanto que en el tratamiento en particular vamos a proponer importantes reformas que recogen las inquietudes formuladas por los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte al señor diputado que si no apuramos el trámite nos quedaremos sólo con los discursos, porque será imposible sancionar el proyecto en consideración, ya que, por lo que veo, corremos el riesgo de quedarnos sin quórum.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: como señalaba, en el tratamiento en particular vamos a proponer

una serie de modificaciones tendientes a mejorar el proyecto en consideración a fin de lograr el mayor beneficio para la totalidad del territorio de los argentinos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Martínez. — Señor presidente: en la determinación de las zonas francas es muy difícil compatibilizar los intereses y las razones esgrimidas por los señores legisladores representantes de todas las provincias argentinas. Por lo tanto, el proyecto que seguramente recibirá la sanción de la Honorable Cámara tiende sólo a establecer un mínimo de igualdad para el conjunto del territorio nacional. Entenderlo de otra manera sería avanzar en una contradicción difícil de resolver y estaríamos haciéndole el juego al país centralista en perjuicio del interior de la República, que requiere de herramientas claras para lograr un desarrollo cierto y equitativo.

Seguramente es éste mi último discurso ante la Honorable Cámara. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos en quienes he compartido estos ocho años de labor, y en forma especial a usted, señor presidente, a quien desde hace dos años secundo en el ejercicio de la Presidencia.

Me considero un elegido de Dios por haber tenido la posibilidad de que ustedes formen parte de mi historia y de mi vida, y les voy a estar doblemente agradecido si me hacen merecedor de seguir formando parte de vuestro recuerdo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — No habiendo número en el recinto, se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pierri). — En primer lugar, se va a votar la moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado Sánchez Caldeano.

—Resultado negativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

Corresponde votar en general el dictamen en consideración.

Como varios señores diputados han hecho llegar a la Presidencia un pedido de que se vote nominalmente, corresponde que la Cámara se expida sobre dicha solicitud.

—Resultado suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar nominalmente.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (Estrada). — Sobre 136 señores diputados presentes en el recinto, han votado 116 señores diputados por la afirmativa y 13 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se han registrado los votos de 3 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Agúndez, Alzamonte, Alcalá, Algaba, Álvarez (H. C.), Álvarez García, Amadeo, Antelo, Aranda, Arias, Arrechea, Baglini, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Barberá, Barbotti, Baum, Beltrán, Bermúdez, Blanco, Borda, Bordin Carosio, Bracchi, Branda, Brook, Cabrera, Camaño (E. O.), Castillo (J. L.), Ceballos, Ciccare, Crostelli, Cruz, Dand, Di Tullio, Durrieu, Espeche, Fajardo, Falletti, Felgueras, Fellner, Ferradás, Figueroa, Folloni, Frigerio, Galván, García Moreno, García de Novelli, Gargiulo, Gatti, Germanó, Gómez (J. E.), Gómez Centurión, González (L. M.), González Cabañas, González Gaviola, Green, Guerrero, Guzmán, Hardy, Hernández (A. M.), Herrera (B. E.), Kelly, Koth, Lamberto, Larraburu, Leconte, López Arias, López de Zavalía, Machado, Machicote, Manfredotti, Maqueda, Marelli, Marino, Martínez, Mendoza (C. R.), Michelli, Michitte, Monteverde, Moure, Muñoz, Natale, Olivera, Orquín, Ortiz Pellegrini, Parada, Parente, Parrilli, Peralta, Ré, Rodrigo, Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz, Sabio, Sacks, Salusso, Sánchez Caldeano, Seelzi, Seguí, Soderó Nievas, Soria, Soria Arch, Sucaria, Sueiro, Toto, Troyano, Uriondo, Varela Barrio, Varela Cid, Venesia, Viechi, Yema y Zaracho.

—Votan por la negativa los señores diputados Aguado, Armendáriz, Bisciotti, Durañona y Vedia, Elías, Fernández Gil, Fescina, García Cuerva, González Gass, López (A. H.), Manny, Molinas y Viqueira.

—Se abstienen de votar los señores diputados Giménez Rébora, Marcó y Prat.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobado en general el proyecto de ley.

5

MOCION DE ORDEN

Sr. Corchuelo Blasco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Después de esta hermosa votación a favor del pueblo argentino voy

Sr. Balestrini (A.E.). — Señor presidente: mociono que en los términos del artículo 116 del reglamento se reconsidere la moción formulada por la señora diputada Marino para que el proyecto de resolución contenido en el expediente 3.443-D-93 se trate con preferencia en la próxima sesión que celebre la Honorable Cámara, con dictamen de comisión.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte que se ha modificado la moción pues ante la solicitud de preferencia era con o sin despacho de comisión y ahora es con dictamen.

Sr. Balestrini (A.E.). — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Durrieu. — Señor presidente: quiero aclarar que este proyecto en realidad lo que hace es referirse a una comisión bicameral que ya existía con anterioridad y que había sido creada en forma transitoria. Se ha cumplido el plazo de 240 días y no pudo llevar a cabo su cometido de adecuar la legislación nacional conforme a lo dispuesto por la Convención Internacional por los Derechos de la Mujer.

Reitero que no estamos creando una nueva comisión, que ya había sido integrada por esta Cámara en el año 1990. Creo que los señores diputados entienden cuál es el sentido de esta moción que se vincula con un proyecto que ha sido firmado por todas las señoras diputadas de esta Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar por el sistema mecánico la moción de reconsideración. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

— Resulta negativa de 45 votos; votan 130 diputados sobre 138 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

12

MOCION DE RECONSIDERACION

Sr. Di Tulio. — Pido la palabra para formular una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para formular una moción de reconsideración tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Di Tulio. — Señor presidente: hago indicación de que se reconsidere la segunda moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado Pepe. Me parece que no

tener en cuenta todo esto es como olvidarse de nuestros soldados que fueron a las Malvinas en cumplimiento de un mandato de la Nación Argentina, a pesar de que en ese momento había un gobierno militar.

Independientemente de no estar de acuerdo con la actitud asumida por el Poder Ejecutivo al mandar a nuestras fuerzas armadas a cumplir una misión en lugares lejanos sin consultar previamente al Parlamento, debemos reconocer la actitud de nuestros soldados.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar por el sistema mecánico la moción de reconsideración. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

— Resulta negativa de 44 votos. De 139 presentes votan 127 señores diputados.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

Sr. Pepe. — ¿Cómo se computan las abstenciones, señor presidente?

Sr. Presidente (Pierri). — Por su número no harían variar el resultado de la votación, señor diputado.

13

REGLAMENTACION DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ZONAS FRANCAS (Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la consideración del dictamen en el proyecto de ley por el que se reglamentan las actividades de las zonas francas.

En consideración en particular el artículo 1º.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Seguí. — Señor presidente: sugiero que se agregue la palabra "nacional" luego de "Poder Ejecutivo", con el fin de que quede más clara la redacción de la norma.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Larraburu. — Señor presidente: solicito a la comisión que se suprima el párrafo que dice "incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo...". Esta propuesta tiene como base de análisis la actual ley 5.142 de 1997, que

determina la creación de la zona franca en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Los diputados de mi distrito entendemos que esta redacción privará a una provincia extensa como la nuestra de contar con una zona franca adicional a la que ya la legislación nos ha dado, razón por la cual —reitero una vez más— solicito a la comisión que se elimine el párrafo que acabo de leer.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: en cuanto a la propuesta del señor diputado Seguí, creemos que es redundante hablar de Poder Ejecutivo nacional, por cuanto quien faculta es el Congreso de la Nación, lo que evidentemente hace al Poder Ejecutivo nacional. No obstante, a efectos de mantener coherencia con el resto del articulado, no objetamos el agregado propuesto.

Respecto de la petición formulada por el señor diputado Larraburu, no vamos a aceptarla, y a continuación voy a leer a la Cámara el agregado que se hace a este artículo, como párrafos segundo, tercero y cuarto. Dice así: "Sin perjuicio de la existencia de zonas francas creadas o a crearse en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional convendrá con los gobiernos provinciales establecimientos de zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizas con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio.

"Las zonas francas a crearse con carácter de excepción deberán estar localizadas a una distancia no menor de 300 kilómetros entre sí, no pudiendo establecerse más de una por provincia.

"A los efectos de autorizar la creación de una zona franca, cualquiera sea su localización, el Poder Ejecutivo provincial respectivo exigirá al concesionario, una inversión mínima, conforme a la Ley de Convertibilidad."

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita a los señores diputados que formulen todas las propuestas de modificación que tengan que hacer antes de que se expida la comisión.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parente. — Señor presidente: conforme lo expresara en el debate en general, propongo una redacción diferente para este artículo 2º, que es la siguiente: "Autorízase al Poder Ejecutivo nacional para convenir con las autoridades provinciales competentes el establecimiento de una zona franca en el territorio de sus respectivos estados. Por ley del Congreso de la

Nación podrá autorizarse que en el territorio de un Estado provincial se establezca más de una zona franca".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: la Cámara debe conocer que se ha acordado un dictamen cuyo texto no es precisamente el que figura en el Orden del Día N° 1.653. Por lo tanto, a fin de ordenar el debate, propongo que la comisión explice la modificación que introducirá al citado Orden del Día a fin de discutir sobre ella.

He participado en algunas reuniones previas, y en virtud de este artículo se exigirán 8 millones de pesos, conforme con la ley de convertibilidad, para la instalación de una zona franca en una provincia. No estoy de acuerdo con ello porque se trata de una cifra restrictiva. A mi juicio, cada provincia debería resolver al respecto de acuerdo a la competencia y a la forma en que se establezca la participación de entidades privadas o mixtas.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: a los efectos de una mayor claridad, solicito que por Secretaría se dé lectura de la redacción final del artículo 2º.

Sr. Presidente (Pierri). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Estrada). — Dice así: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo con carácter de excepción crear adicionalmente no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser ubicadas en aquellas provincias o regiones geográficas, que por su situación socioeconómica crítica justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción.

"Sin perjuicio de la existencia de zonas francas creadas o crearse en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional convendrá con los gobiernos provinciales establecimientos de zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio.

"Las zonas francas a crearse con carácter de excepción deberán estar localizadas a una distancia no menor de 300 kilómetros entre sí, no pudiendo establecerse más de una por provincia.

"A los efectos de autorizar la creación de una zona franca, cualquiera sea su localización, el Poder Ejecutivo provincial respectivo exigirá al concesionario una inversión mínima conforme a la Ley de Convertibilidad."

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 2º según el texto que acaba de ser leído.

Sr. Parente. — Solicito que la votación se practique en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido formulado por el señor diputado por Entre Ríos está suficientemente apoyado.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. López de Zavallía. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavallía. — Señor presidente: solicito a la comisión que aclare qué sentido tiene esta inversión mínima conforme a la ley de convertibilidad.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: en principio habíamos estipulado establecer un monto mínimo que debía invertir el concesionario en cada zona franca para evitar el problema del aventurerismo económico en este tipo de actividad. Como evidentemente no podíamos llegar a la conclusión de una cifra específica que fuera el pie de inversión, ya que éste puede variar según la situación geográfica de cada área franca, decidimos dejar la posibilidad a los gobiernos de provincia para que dentro de su discernimiento pudieran fijar cuál sería el monto adecuado a invertir en la zona franca, que diera lugar a armar un área franca en términos de seriedad.

Este fue el motivo para establecer esta cláusula.

Sr. Baglini. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para otra aclaración tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Señor presidente: entiendo que la referencia a la ley de convertibilidad debe obedecer a que está prohibido indexar los montos mínimos de la inversión.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Luis Alberto Martínez.

Sr. Presidente (Martínez). — ¿El señor diputado López de Zavallía ha quedado conforme con la aclaración?

Sr. López de Zavallía. — Señor presidente: sinceramente, tengo la misma duda anterior, porque mi recuerdo de la ley de convertibilidad es que no habla de inversiones mínimas. Si lo que quieren decir es que se trata de una inversión mínima, entonces tendría que ponerse un punto. Pero la ley de convertibilidad para nada habla del tema.

Sr. Presidente (Martínez). — ¿Qué dice la comisión al respecto?

Sr. Vicchi. — Señor presidente: no afecta en demasía y este párrafo puede derogarse.

Sr. Presidente (Martínez). — Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 2º en forma nominal.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (Estrada). — Sobre 135 señores diputados presentes, 102 han votado por la afirmativa y 25 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha registrado el voto de tres señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Agúndez, Albamonte, Alcalá, Álvarez (H. C.), Antelo, Aranda, Arias, Arrechea, Baglini, Balestrini (A. E.), Barberá, Barbotti, Baum, Baylac, Becerra (N. E.), Beltrán, Bermúdez, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Bracchi, Branda, Cabrera, Camaño (E. O.), Casari de Alcía, Ceballos, Cicare, Crostelli, Cruz, Dand, Di Tullio, Echevarría, Fajardo, Falletti, Fellner, Ferradás, Figueroa, Folloni, Frigerio, García Moreno, García de Novelli, Gargiulo, Germanó, Gómez (J. E.), Gómez Centurión, González Cabañas, Guerrero, Guzmán, Hardy, Hernández (A. M.), Herrera, Iglesias, Kelly, Lamberto, Leconte, López Arias, López de Zavallía, Machado, Manfredotti, Maqueda, Marcos, Marelli, Marino, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michelli, Michitte, Monteverde, Muñoz, Natale, Orquín, Parada, Parrilli, Pepe, Peralta, Ré, Rodrigo, Rodríguez Sañudo, Roig, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz, Sabio, Sacks, Salusso, Sánchez Galdeano, Scelzi, Seguí, Sodero Nieves, Soria, Storani, Suciro, Toto, Troyano, Uriondo, Varela Cid, Venesía, Vicchi, Yona y Zaracho.

—Votan por la negativa los señores diputados Aguado, Álvarez García, Amadeo, Beria, Cafiero, Cavallari, Durazona y Vedia, Elías, Espeche, Felgueras, Fernández Gill, García Cuerva, Golpe, González (L. M.), González Cass, González Gaviola, Larraburu, López, Marcó, Moure, Parente, Salvador, Sucaria, Varela Barrio y Viqueira.

—Se abstienen de votar los señores diputados Balestrini (M. A.), Catti, Giménez Rébora y Prat.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 3º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 4º.

Sr. Vicchi. — Solicito la reconsideración del artículo 4º.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Mendoza. Se requieren las dos terceras partes de los votos emitidos.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — Por consiguiente, se reabre la consideración del artículo 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — La comisión propone suprimir la última parte del segundo párrafo del artículo, de modo que dicho párrafo quede redactado así: "El funcionamiento de las zonas francas será convergente con la política comercial y sus medidas, debiendo contribuir a la liberación y al crecimiento de la economía".

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 4º con la supresión propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 5º al 8º.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — La comisión propone el siguiente texto para este artículo: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para autorizar operaciones de comercio al por menor en una zona franca, solamente en los casos en que la misma sea de carácter exclusivamente comercial, se encuentre ubicada en una ciudad o pueblo fronterizo con países limítrofes, que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio y que las circunstancias así lo aconsejen".

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuco Blasco. — Señor presidente: la propuesta es que el artículo quede tal cual es-

taba redactado en el despacho de comisión, porque de lo contrario se plantea inequidad para con otras zonas. En la redacción original la única limitación es que las circunstancias aconsejen la autorización; la comisión agrega otras dos condiciones, con lo cual deja atadas las manos del Poder Ejecutivo para extender dicha autorización a otras zonas cuando las circunstancias lo aconsejen.

Sr. Presidente (Martínez). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Vicchi. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 9º según el texto propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: es para solicitar la supresión del último párrafo del artículo, que dice: "lo exceptuado precedentemente no será de aplicación para el consumo de vituallas destinadas al personal que preste servicios dentro de la zona franca". Esto puede parecer una actitud mezquina en el sentido de impedir que el trabajador de la zona franca goce de un privilegio especial, como es el consumo de mercaderías importadas exentas de aranceles. Pero lo cierto es que la zona franca, en su sentido real, es territorio nacional en toda su extensión, y son allí de aplicación las leyes nacionales.

En consecuencia, el consumo de mercaderías importadas en condiciones diferentes a las del resto de los ciudadanos argentinos constituye una desnaturalización de lo que es una zona franca. Además, se genera también un agravante para el comercio lindero a la zona franca, el que se vería seriamente afectado, y ése no es el espíritu de los autores del proyecto.

Sr. Presidente (Martínez). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Vicchi. — Señor presidente: lo referido por el señor diputado está expresamente determinado en otro artículo del proyecto. De todos modos, la comisión ha introducido una modificación, ya que donde dice "Lo exceptuado..." debe decir "Lo dispuesto".

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar con la modificación propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Parada. — Señor presidente: propongo que se modifique el texto del artículo en consideración a fin de que, donde dice "... comité de vigilancia ...". Diga "... el servicio aduanero ...".

Sr. Presidente (Martínez). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Vicchi. — La comisión entiende que el texto del presente artículo ha sido correctamente planteado por ella.

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones se vota y aprueba el artículo 12.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 13.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parente. — Señor presidente: sugiero que por razones de mejor técnica legislativa el presente artículo se incluya al final del proyecto.

Sr. Presidente (Martínez). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Vicchi. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 14.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Seguí. — Señor presidente: el inciso b) del presente artículo señala que dentro del plazo de noventa días la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el proyecto de reglamento y operación que le ha sido elevado. Esto significa que una vez terminado el trámite en la provincia respectiva deberá acudir al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el que cuenta con un plazo de noventa días para expedirse. Pero el proyecto no aclara qué ocurre si este ministerio no se pronuncia en el plazo establecido. Por lo tanto, para rescatar la autonomía de las provincias, propongo que se exprese que si en ese término la autoridad de aplicación no se hubiera expedido se considerará firme la adjudicación efectuada por el gobierno provincial.

Sr. Presidente (Martínez). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Vicchi. — La propuesta del señor diputado ya ha sido contemplada.

Como la comisión propone algunas modificaciones a este artículo, voy a dar lectura a su texto tal como ha quedado redactado. Dice así: "Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir en el ámbito de la órbita del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una comisión de evaluación y selección con el objeto de:

a) Evaluar técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la explotación de la zona franca, definir los criterios de selección y ordenar los proyectos;

b) Elaborar y elevar para su aprobación a la autoridad de aplicación el reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca. Dicho reglamento deberá contener el plazo, la modalidad y las condiciones de concesión de la explotación de la zona franca, las causales de revocación, las sanciones por incumplimiento, como también las características, tasas y cargos de los servicios prestados en la zona, así como las condiciones contractuales para la admisión de los usuarios. Dentro del plazo de noventa (90) días la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el proyecto de reglamento de funcionamiento y operación que le ha sido elevado, pudiéndose prorrogar el mismo por treinta (30) días más, reputándose aprobado el proyecto que no haya merecido observaciones dentro de ese plazo;

c) Llamar a licitación pública, nacional e internacional, para la concesión de la explotación de la zona franca;

d) Adjudicar la concesión de la zona franca con aprobación de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá hasta noventa (90) días para expedirse a partir de la fecha de evaluación de los antecedentes y resultados del acto licitatorio para aprobar el mismo. Si en este término la autoridad de aplicación no se expidiera se considerará firme la adjudicación efectuada por el gobierno provincial.

e) Las demás que establezca la reglamentación de la presente ley."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 14 con la modificación de la que acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 15.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 16.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — En este artículo la comisión propone modificar los incisos *e*), *g*) y *j*), los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“*e*) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario a cargo de la explotación de la zona franca y en su defecto informar a la autoridad de aplicación sobre las mismas;”

“*g*) Percibir del concesionario un derecho por la concesión bajo forma de un pago único o en un canon periódico, el que deberá ser compartido entre todos los municipios de la provincia correspondiente;”

“*j*) Velar por el cumplimiento de las normas sobre la conservación del medio ambiente, y en especial el tratamiento de los efluentes originados en la zona franca.”

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 16 con la modificación propuesta por el miembro informante.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones se vota y aprueba el artículo 17.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 18.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del texto del artículo 18 que propone la comisión.

Dice así: “La explotación de la zona franca será de carácter privado o mixto. Las obras y la infraestructura necesarias correrán por cuenta del concesionario.”

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 18, de cuyo texto acaba de dar lectura el miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 19.

— Resulta afirmativa.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del texto del artículo 19 que propone la comisión.

Dice así: “La explotación se ofrecerá por licitación pública, nacional o internacional, la que se ajustará a las condiciones que establezca la comisión de evaluación y selección prevista en el artículo 14 de la presente.”

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 19, de cuyo texto acaba de dar lectura el miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. González (L. M.). — Pido la palabra para formular una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. González (L. M.). — Solicito que se reconsidere el artículo 14 a fin de que se cambie la palabra “órbita”, que figura en el primer párrafo, por la de “jurisdicción”. Conocemos el nuevo derecho, pero no estamos de acuerdo con este derecho planetario que habla de órbita cuando en realidad tiene que referirse a jurisdicción. Sería conveniente que la Cámara reconsidere el artículo 14 y se expida en los términos jurídicos correctos.

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el pedido de reconsideración formulado por el señor diputado por Santa Fe. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — Entonces, corresponde considerar nuevamente el artículo 14. ¿La comisión acepta la propuesta formulada por el señor diputado por Santa Fe?

Sr. Vicchi. — Sí, señor presidente.

Sr. Parrilli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. — Señor presidente: quiero aclarar con respecto a este artículo que la palabra correcta sería “competencia” en lugar de “órbita” o “jurisdicción”, ya que estas últimas se refieren más al aspecto territorial y aquí se habla de atribuciones de un órgano, que es el Poder Ejecutivo provincial.

Sr. Presidente (Martínez). — ¿La comisión acepta la propuesta del señor diputado por Neuquén?

Sr. Vicchi. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar nuevamente el artículo 14, con la modificación aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: ésta es una iniciativa muy importante que también

motivó una discusión muy trascendente. Quisiera saber si estamos votando el proyecto acordado por un grupo de diputados que llevó adelante el tema en la comisión o se está votando el Orden del Día N° 1.653.

Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia reitera que se está votando el texto acordado y presentado por la comisión.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 20.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente, el inciso a) dice: "realizar las obras de infraestructura y conexiones de servicios básicos en la zona franca que sean necesarios para su normal funcionamiento y que formen parte del proyecto aprobado por la comisión de evaluación y selección y la autoridad de aplicación." Propongo agregar a este inciso la expresión siguiente: "... encuadrados en las normas vigentes del o de los municipios en cuyo territorio se instalen".

Esta sugerencia se vincula con el hecho de que esta iniciativa se va a constituir en un verdadero estatuto para el tema de las zonas francas. Podría ocurrir que se omita la intervención del municipio en el que se instale la zona franca. Esto no es autojadrizo, dado el caso del Mercado Central de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Martínez). — ¿La comisión acepta este agregado?

Sr. Vicchi. — Sí, señor presidente.

Además, la comisión propone la supresión del inciso k), con lo cual el inciso l) pasa a ser k).

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: de acuerdo con la redacción acordada se elimina el inciso k), que figuraba en el texto originario del Orden del Día. En base a las consultas efectuadas con la Secretaría de Comercio Exterior, propongo que se incorpore nuevamente el inciso k), con un agregado. Este inciso expresa: "Pagar los costos del control aduanero de la zona en base a las pautas que se convengan entre el comité de vigilancia y la Administración Nacional de Aduanas" El agregado diría: "la autoridad de aplicación queda autorizada para reducir los costos del control aduanero de las zonas de menor grado de desarrollo".

Sr. Presidente (Martínez). — ¿La comisión acepta el agregado de este nuevo inciso?

Sr. Vicchi. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Martínez). — Ruego a los señores diputados que no abandonen sus bancas ya que estamos sesionando con quórum estricto y corre peligro la continuación de la sesión.

Se va a votar el artículo 20 con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 21 a 26.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 27.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 27 que propone la comisión.

Dice así: "Las mercaderías que se introduzcan a la zona franca, provenientes del territorio aduanero general o especial, serán consideradas como una exportación."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 27, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones se vota y aprueba el artículo 28.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 29.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 29 que propone la comisión.

Dice así: "La extracción de mercaderías de la zona franca hacia terceros países, no gozará de otros estímulos que los correspondientes por la devolución de tributos efectivamente pagados cuando fueren pasibles de devolución a los exportadores del territorio aduanero general. Asimismo, gozará de los estímulos establecidos de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 29 de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 30.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 30 que propone la comisión.

Dice así: "En el convenio de adhesión para el establecimiento de cada zona franca previsto en el artículo 3º, los gobiernos provinciales deberán comprometerse a disponer la exención de los impuestos provinciales, salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de una eventual adhesión a la exención nacional de los tributos que graven los servicios básicos, referida en el artículo 26 y de las exenciones que existieran para operaciones de exportación.

"En el mismo convenio, los gobiernos provinciales se deberán comprometer a acordar con los municipios igual comportamiento para los usuarios y actividades de la zona franca."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 30, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 31.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 31 que propone la comisión.

Dice así: "Los usuarios de la zona franca no podrán acogerse a los beneficios y estímulos de los regímenes de promoción industrial, regionales o sectoriales, creados o a crearse, en el territorio de la Nación."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 31 de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 32.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 32 que propone la comisión.

Dice así: "Podrán introducirse en la zona franca toda clase de mercaderías y servicios, estén o no incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola excepción de armas, municiones y otras especies que atenten contra la moral, la salud, la sanidad, vegetal y animal, la seguridad y la preservación del medio ambiente."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 32, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 33.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 33 que propone la comisión.

Dice así: "La totalidad de las gestiones, trámites, documentación y demás operaciones administrativas aduaneras que se efectúen en la zona franca, se realizarán en la respectiva delegación que la Administración Nacional de Aduanas habilitará en cada una de ellas y que funcionará en el interior de su recinto."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 33, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 34.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 34 que propone la comisión.

Dice así: "La provincia, por intermedio de la Comisión de Evaluación y Selección, a partir del estudio de los proyectos de factibilidad de zona franca, propondrá a la autoridad de aplicación la localización y delimitación de la misma, así como las áreas de expansión previstas."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 34, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 35.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 35 que propone la comisión.

Dice así: "El área física que se declare zona franca será deslindada y cercada de forma tal que permita garantizar su aislamiento respecto del territorio aduanero general."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 35, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 36.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 36 que propone la comisión.

Dice así: "Autorízase a la autoridad de aplicación a expandir el aspecto físico de la zona franca, de acuerdo con lo que proponga el Comité de Vigilancia conforme a lo previsto en los proyectos aprobados."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 36, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 37.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 37 que propone la comisión.

Dice así: "Los predios e inmuebles donde se ubicarán las zonas francas podrán ser de propiedad pública o privada, desocupados y libres de litigios."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 37, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 38.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 38 que propone la comisión.

Dice así: "Los usuarios de las zonas francas deberán emplear en las actividades que desarrollen, como mínimo un setenta y cinco (75 %) de personal argentino nativo o por opción.

"La legislación laboral a ser aplicada en las zonas francas será la vigente en el territorio aduanero general."

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: visto que la comisión no acepta modificaciones, con el ánimo de acelerar la sanción de este proyecto de ley solicito la inserción en el Diario de Sesiones de las observaciones y de aspectos del discurso que pensaba formular.

Sr. Presidente (Martínez). — Oportunamente se pondrá a votación su pedido de inserción, señor diputado.

Se va a votar el artículo 38, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 39.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 39 que propone la comisión.

Dice así: "Se admitirán acuerdos entre provincias y entre éstas de manera simultánea con el Poder Ejecutivo nacional, para la creación de zonas francas interprovinciales, autorizándose en esos casos la constitución de comisiones análogas a la del artículo 14, pero de naturaleza interprovincial. Esta zona franca equivaldrá al cupo asignado para cada provincia por el artículo 2º de esta ley."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 39, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 40.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 40 que propone la comisión.

Dice así: "Las previsiones de la presente ley y los derechos emergentes de los estados provinciales quedan supeditados a la adhesión expresa de cada uno, que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

"Si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, alguna provincia no hubiera suscrito el convenio previsto en el artículo 3º, se considerará que la misma no ha adherido a la presente."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 40, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 41.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Vicchi. — Voy a dar lectura del artículo 41 que propone la comisión.

Dice así: "Si en el plazo de dieciocho (18) meses de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 41, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 42.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Viechi. — Voy a dar lectura del artículo 42 que propone la comisión.

Dice así: "La presente ley será de aplicación a las zonas francas instituidas por las leyes 5.142 y 8.092."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 42, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — En consideración el artículo 43.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Viechi. — Voy a dar lectura del artículo 43 que propone la comisión.

Dice así: "Los organismos intervinientes, con competencia en las operaciones de las zonas francas, dictarán las reglamentaciones complementarias que correspondan."

Sr. Presidente (Martínez). — Se va a votar el artículo 43, de cuyo texto acaba de dar lectura el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 44 es de forma.

Sr. Presidente (Martínez). — Queda sancionado el proyecto de ley ¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores diputados Parada, Bisciotti, Corchuco Blasco, Loutaif, Folloni, Sánchez Galdeano, Topa, Barbotti, Larraburu y Falletti.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — Queda autorizada las inserciones solicitadas ².

solicita al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires la imposición del nombre Vicente Solano Lima a una calle o pasaje de la Capital Federal (expediente 3.616-D. 53).

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1993.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Ferri.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se dé por reproducido el proyecto de declaración donde se solicita imponer el nombre de Vicente Solano Lima a una calle o pasaje de la Capital Federal, que corre bajo el expediente 3.671-D-92 publicado en el Trámite Parlamentario Nº 122/92.

Saludo al señor presidente atentamente.

Marco A. Michelli. — Lorenzo A. Pepe.

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que veía con agrado que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires impulsara el nombre de Vicente Solano Lima a una calle o pasaje de la Capital Federal.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El doctor Vicente Solano Lima nació en Ramallo (provincia de Buenos Aires) el 21 de septiembre de 1901 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 23 de abril de 1984.

Esta Cámara ha rendido homenaje a su memoria evocando a un hombre político completo, un hombre justo que buscó la verdad sin miedo. El tiempo transcurrido desde su desaparición física permite valorar con equilibrio una trayectoria pública iniciada en San Nicolás de los Arroyos y que culmina con su muerte, pues, hasta el último día, permaneció atento y animoso, con un profundo respeto por la organización de la vida na-

C. INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PARADA

Ampliación de la exposición del señor diputado sobre el proyecto de ley que establece el régimen de las zonas francas

El mundo atraviesa uno de los momentos más dinámicos de toda su historia; los cambios se producen a una velocidad tal, que resulta harto difícil predecirlos.

En el campo de lo económico, asistimos a su vez no sólo a una transformación de las estructuras productivas nacionales sino a una reestructuración de la economía global.

El Mercosur, constituido por la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, es un claro ejemplo al respecto.

La Argentina, país de grandes desequilibrios regionales, debe ir adecuando su estructura productiva a las nuevas realidades.

Las zonas francas se constituyen así en una herramienta por demás valiosa en el nuevo contexto nacional e internacional.

La Argentina en sí misma está viviendo uno de los momentos más prolíficos de los últimos treinta años.

Estabilidad económica, derrota de la inflación, crecimiento del producto bruto interno, aumento del salario real, aumento de los niveles de producción industrial que superan cualquier valor histórico, son hechos que en su conjunto permiten visualizar un futuro promisorio para nuestro país.

Pero nada se logra del día a la noche sino con gran esfuerzo.

El pueblo argentino ha sabido dar respuesta a este desafío. Desafío que no es otro que pensar en la construcción de una nueva nación, de una nación que sea orgullo de todos y que permita a su pueblo alcanzar niveles de vida comparables al de los países desarrollados.

Estamos seguros que las zonas francas posibilitarán a las provincias y a los municipios contar con un instituto que, si bien no solucionará sus problemas coyunturales, les permitirá encarar con decisión y con optimismo un futuro por demás promisorio.

La zona franca es un área pequeña, geográficamente delimitada, en cuyo seno se desarrollan diversas actividades comerciales o industriales, las que están beneficiadas por un régimen especial en materia fiscal, que puede implicar la exención de determinados impuestos o la totalidad de los vigentes en el territorio aduanero general.

Graciela Guidi, en un trabajo del Consejo Federal de Inversiones, expresa que "se concibe su creación como medio de impulsar el desarrollo de una determinada región que se encuentra deprimida respecto del resto del país o bien con una ubicación geográfica particular, fronteriza o muy alejada de los centros de mayor desarrollo económico".

Se caracteriza por ser un ámbito que no constituye territorio aduanero, ni general ni especial. En este ámbito no rige arancel alguno y, en consecuencia, la introducción de mercaderías no está gravada por tributos ni alcanzada por prohibiciones de carácter económico.

Entre los diferentes tipos de zona franca en la actualidad, podemos mencionar: de almacenamiento, comercial, industrial.

Pero lo relevante sobre el tema es que, al analizar la distribución de las zonas francas en el mundo, podemos observar que su localización ha trascendido toda barrera ideológica.

Los países de América latina dieron oportunamente respuesta a este fenómeno mundial. Es así como Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela han creado sus propias zonas francas.

A modo de ejemplo podemos recordar que, en la República Oriental del Uruguay funcionan cuatro zonas francas; dos de administración estatal, Colonia y Nueva Palmira; y dos privadas, Montevideo y Florida.

En la República Argentina existe legislación al respecto desde 1907, cuando se sanciona la ley 5.142, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a crear una zona franca en el puerto de La Plata. Tres años más tarde se sanciona la ley 8.092, que autoriza por su parte la creación de una zona franca en Concepción del Uruguay.

Otras normas dictadas al respecto fueron por ejemplo, la ley 12.922, en 1947, que declara libre de derechos la introducción de ciertos materiales y mercaderías por la aduana y receptorías al sur del paralelo 42. El decreto 1.400, de 1953, reglamenta el régimen aduanero al sur del paralelo 42.

El decreto 7.101, de 1955, declara zona franca al territorio de la Tierra del Fuego. El decreto ley 10.991, de 1956, declara zona franca al territorio al sur del paralelo 42.

La ley 19.640, de 1972, estableció un régimen especial fiscal y aduanero para el entonces territorio nacional de la Tierra del Fuego.

El Código Aduanero creado por la ley 22.415 trata al tema entre los artículos 590 y 599, pero en vez de zona franca utiliza un término más genérico como es el de área franca.

Desde 1983 a la fecha han sido innumerables las iniciativas legislativas presentadas por los señores diputados para la creación de zonas francas en sus respectivos distritos, además de algún proyecto de ley marco.

Pero problemas de orden técnico y político hicieron inviable su aprobación.

No hay que llamarse a engaño; las zonas francas, no salvarán a ninguna provincia ni a ninguna ciudad, pero sí pueden convertirse en verdaderos motores del cambio.

Es por ello que resulta por demás necesario, contar con un instrumento que dé la posibilidad a cada provincia de tener su zona franca.

Pero para ello es necesaria la existencia de una ley marco, que coloque en un pie de igualdad a todas las provincias argentinas y que, además, regule armónicamente el funcionamiento de las zonas francas.

Es así que, en pos del logro de este **ensaiado** objetivo de todos los señores diputados, sin distinción de partidos políticos, nos pusimos a trabajar en el proyecto de ley marco de zonas francas enviado por el Poder Ejecutivo nacional.

Analizado y armonizado con todas las iniciativas legislativas vigentes a la fecha, e introducidas las modificaciones necesarias a los efectos de adecuarlo a las propuestas y observaciones hechas oportunamente, las comisiones de Economía, Comercio, Presupuesto y Hacienda y Economía y Desarrollo Regional han emitido el presente dictamen que someto a vuestra consideración.

Por el artículo 2º se faculta al Poder Ejecutivo nacional a crear en cada provincia una zona franca, incluyendo las ya existentes.

Es un principio que consideramos por demás válido jurídica y económicamente. Jurídicamente porque el artículo 591 del Código Aduanero es claro al respecto, dice que la zona franca debe ser creada por ley, siendo ésta por lo tanto la norma respectiva; y económicamente porque de esta forma estamos posibilitando que la creación de la zona franca no dependa de un mero capricho político sino, muy por el contrario, que su instalación y funcionamiento produzca verdaderos beneficios a cada provincia y localidad en particular en la que se instale.

Nuestro país, como decía anteriormente, se caracteriza históricamente por la existencia de fuertes desequilibrios regionales. Sin embargo, estamos firmemente convencidos de que, al dar la posibilidad al Poder Ejecutivo nacional de crear cuatro zonas francas más, le estamos dando un instrumento de excepción ágil y eficaz para corregir en forma perentoria dichos desequilibrios.

Por primera vez en muchos años colocamos a todas las provincias argentinas en un pie de igualdad.

Y esto es producto del nuevo contrato entre la Nación y las provincias.

No queremos zonas francas para vender cigarrillos y whisky; queremos zonas francas que posibiliten la inversión y el empleo.

Además, tal como lo expresa el artículo 5º que hemos agregado al proyecto del Poder Ejecutivo, queremos zonas francas que se conviertan en verdaderos polos de desarrollo, no ya de una zona en particular sino de toda una región. Y que se empleen los recursos humanos y materiales disponibles en la zona.

La Argentina de hoy sólo admite proyectos serios; no hay más lugar para el aventurerismo o la especulación. Queremos capitales, queremos inversiones; daremos todas las garantías necesarias, pero lo que no queremos ni permitiremos es que cuando se termine el negocio sólo queden galpones vacíos.

El artículo 6º del proyecto denota especial importancia para todos nosotros porque en él se establecen las actividades de las zonas francas. A las ya tradicionales de comercialización de productos, de almacenaje y de servicios, se le agrega la posibilidad de industrializar mercaderías, pero exclusivamente para exportación a terceros países, con lo que evitaremos que alguna empresa al instalarse en la zona franca perjudique al resto de sus competidores del territorio aduanero general.

Hemos establecido, sin embargo, una salvedad, que creemos es de real importancia. Por ella se determina que, si en la zona franca se fabrican bienes de capital que no se producen en el territorio aduanero general, podrán ser introducidos previo pago de los derechos aduaneros correspondientes.

Muchas provincias podrán aspirar así a convertirse en verdaderos polos de desarrollo de determinadas industrias de alta tecnología, por las ventajas que brindarán a los potenciales inversores e industriales, beneficiándose en su conjunto todo el país.

Un aspecto digno de destacar, y del que los legisladores del interior del país, que somos mayoría en esta Honorable Cámara, debemos sentirnos realmente orgullosos, es el rol y prerrogativas que se les asignan a las provincias en el tema de las zonas francas.

Las provincias argentinas, por debilidad o anuencia en algunos casos o por una verdadera usurpación y abuso de poderes por parte del gobierno federal en otros, han visto a través de los años cómo actividades que por el reparto de competencias les eran propias, eran sin embargo ejercidas por el gobierno federal.

Reafirmamos el principio en el presente proyecto, dado que a las provincias les competirá:

- Proponer el lugar de ubicación de la zona franca.
- Llamar a licitación pública para su concesión.
- Adjudicar la zona franca.
- Elaborar el reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca.

—Evaluar técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la zona franca.

—Determinar las horas y lugares de ingreso y egreso de personas y mercaderías.

Por otra parte, las provincias también constituirán un comité de vigilancia, en el que podrán participar los municipios y cámaras empresarias respectivas.

A este comité de vigilancia le compete:

—Promover la radicación de actividades destinadas a la investigación y la innovación tecnológica.

—Asesorar a la autoridad de aplicación sobre el funcionamiento de la zona franca.

—Evaluar el impacto regional de la zona franca.

—Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario de la zona franca.

—Percibir el canon correspondiente por la explotación de la zona franca.

—Velar por la conservación del medio ambiente.

La competencia del gobierno federal en la materia está limitada a ser únicamente la autoridad de aplicación de la norma a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y al control que ejerza jurisdiccionalmente la Administración Nacional de Aduanas.

Durante muchos años la inversión y el riesgo en la Argentina sólo corrían por cuenta del Estado nacional y por los gobiernos provinciales. El empresario se beneficiaba sin ningún tipo de riesgo. Fue así que llegamos

a una situación de endeudamiento público que perjudicó seriamente la economía de todos los ciudadanos.

El Estado debe suplir las necesidades básicas de la población, es decir, salud, educación, seguridad.

No se deben, por lo tanto, distraer fondos públicos como no sea para atender los problemas emergentes de estos tres complejos temas.

De allí que estemos firmemente convencidos de que el riesgo, la inversión y la construcción de la infraestructura básica de la zona franca deben estar a cargo del empresario, tal como expresa el artículo 18 del proyecto, por el que se establece que la explotación de la zona franca será de carácter privado.

El concesionario de la zona franca tendrá entre sus obligaciones:

—Realizar las obras de infraestructura que permitan un correcto funcionamiento de la zona franca.

—Alquilar lotes a los usuarios, urbanizar, construir edificios, asegurar la prestación de los servicios básicos dentro de la zona franca.

—Dictar su propio reglamento interno; pero al proyecto original le agregamos que esto se realizará con la aprobación de la provincia respectiva, a los efectos de asegurar un mayor control de las actividades a desarrollarse en la zona franca.

Con referencia al tratamiento fiscal y aduanero hemos sido sumamente cuidadosos y hemos respetado las disposiciones del Código Aduanero en la materia. Brindaremos beneficios a los usuarios de la zona franca, pero a su vez hemos de ser sumamente exigentes a la hora de los controles respectivos.

Hemos sí dejado completamente establecido que los usuarios de la zona franca no podrán acogerse a otros beneficios promocionales.

Si bien queremos que en la zona franca se aprovechen los recursos humanos disponibles de la región, también quisiéramos atemperar la aplicación de mecanismos de flexibilización laboral que pudieran producir distorsiones en la zona de influencia de aquélla. De allí que hemos modificado el artículo 42 del proyecto del Poder Ejecutivo de tal manera que cualquier mecanismo sobre la materia que se aplique en la zona franca esté de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Somos conscientes de que todas las provincias argentinas posiblemente no podrán contar con su zona franca. Esto es debido no a limitaciones legales o políticas, por supuesto, sino a limitaciones de carácter económico. En respuesta a ello, el artículo 43 autoriza a dos o más provincias a crear zonas francas interprovinciales.

Asistimos a la conformación de un mundo multipolar, sumamente competitivo, en el que se produce una nueva división internacional del trabajo.

Las ventajas competitivas y comparativas tienen un peso decisivo al marcar el futuro de una nación.

Cada país brinda a sus ciudadanos, a sus empresarios, a sus inversionistas todas las prerrogativas posibles a fin de incentivar la inversión y el desarrollo.

Las zonas francas no son ni la panacea ni la salvación para nadie; sí son una institución que puede ser de utilidad en ciertas regiones del país y que puede permitir a muchas ciudades encontrar en ellas un sustituto de ciertas actividades que a causa de los cambios que vive el país han decaído o dejado de ser rentables.

Las provincias argentinas están esperando ansiosamente esta norma y estoy absolutamente seguro de que contaremos con el voto unánime de todas las bancadas que integran esta Honorable Cámara.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BISCOTTI

Artículos 590 a 599 del Código Aduanero

CAPÍTULO II

Área franca

590. Área franca es un ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de servicios que pudieren establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico.

591. El área franca debe ser establecida por ley.

592. Cuando las circunstancias así lo aconsejaren, el Poder Ejecutivo podrá disponer que tampoco se apliquen las prohibiciones de carácter no económico respecto de la introducción de mercadería al área franca o de la extracción de la misma, quedando igualmente facultado para reducir las medidas de control aduanero en dicho ámbito.

593.

1. La introducción al área franca de mercadería aun cuando proviniere del territorio aduanero

general o de uno especial, se considerará como si se tratase de importación.

2. La extracción del área franca de mercadería, aun con destino al territorio aduanero general o a uno especial, se considerará como si se tratase de exportación.

594. En el área franca la mercadería puede ser objeto del almacenamiento, comercialización, utilización y consumo, así como también de transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio.

595. No obstante lo previsto en el artículo 594, el área franca puede limitarse para fines de almacenamiento o de comercio.

596. Se considera área franca de almacenamiento aquella en la cual la mercadería sólo fuere admitida en espera de un destino ulterior. En la misma, la mercadería sólo puede ser objeto de las operaciones necesarias para asegurar su conservación y de las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación o su

calidad comercial o a acondicionarla para el transporte, tales como división o reunión de bultos, formación de lotes, clasificación y cambio de embalaje. La mercadería puede ser objeto de transferencia.

597. Se considera área franca comercial aquella en la cual, además de las operaciones y actos previstos en el artículo 596 la mercadería puede ser comercializada, utilizada o consumida.

598. Cuando las actividades productivas desarrolladas en un área franca lo justificaren el Poder Ejecutivo

podrá establecer un régimen de estímulo a las ventas de mercadería originaria de dicha área que se destinare al extranjero.

599. En todo lo no previsto en este Capítulo y en las disposiciones que la hubieren creado, son de aplicación al área franca las normas generales de la legislación aduanera relativas a la importación y a la exportación de mercadería, siempre que fueren compatibles con dicho régimen.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CORCHUELO BLASCO

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley que establece el régimen de las zonas francas

Antecedentes

La "zona franca" es una de las especies del "área franca", que es el término utilizado por el Código Aduanero en los artículos 590 a 599. "La misma se caracteriza por ser un ámbito que no constituye territorio aduanero, ni general ni especial. En este ámbito no rige arancel alguno y, en consecuencia, la introducción y salida de mercaderías no está gravada con tributos —salvo eventuales tasas— ni alcanzada por prohibiciones de carácter económico", como bien se destaca en la exposición de motivos del Código Aduanero.

La denominación "zona franca" es la que utiliza la ley 5.142, del 9 de octubre de 1907, que establece zonas francas en el puerto de La Plata y autoriza al Poder Ejecutivo a establecer otra en un puerto de la provincia de Santa Fe.

Estas zonas son libres de derechos aduaneros y de impuestos internos para la importación de mercaderías de procedencia extranjera. Las mercaderías pueden ser reexportadas o exportadas, en caso que sean elaboradas en dicha zona, libremente en cualquier tiempo.

Asimismo, las mercaderías que salen de la zona libre para la zona aduanera general son sometidas a las tarifas y a los impuestos fiscales que les correspondan, como si procedieran directamente del extranjero.

Los artículos elaborados en la zona franca deben pagar los derechos correspondientes a las materias primas empleadas en su fabricación.

Es función del Poder Ejecutivo aislar la zona franca y adoptar medidas para su vigilancia.

La ley comentada, —5.142, de fecha 9-10-1907—, es uno de los primeros antecedentes en lo que hace a las zonas francas en nuestro país, aun cuando se precisaron más de ocho décadas para que el poder administrativo dictara el decreto que concretara la medida, que es el decreto 1.668/91, derogado por el decreto 1.783/93.

Con posterioridad a la ley 5.142 se dictó la ley 8.092, del 30-9-1910, por la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo a establecer una zona franca en el puerto de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, igual a la creada en el puerto de La Plata por la ley 5.142 citada *ut supra*; esta ley fue reglamentada el 27 de octubre de 1922 por decreto 1.935/92, modificado por

el decreto 2.409/93, que facilita las actividades industriales dentro de dicha zona.

En 1945 se dictó el decreto 3.824/45, por el que se declara libre de todo derecho la introducción por aduaneras o receptorías situadas al sur del Paralelo 42°, de materiales y mercaderías destinadas al consumo de la zona.

El decreto citado encuentra sustento en el desarrollo económico de la Patagonia y en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores, alejados de los centros urbanos, argumento que aún hoy mantiene vigencia real.

El 27 de abril de 1956, por decreto ley 7.101, se declaró zona franca al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el 10 de junio de 1956 se dictó el decreto ley 10.991, que declara una zona franca al sur del paralelo 42°. A ellos se suma el decreto ley 9.924/57, que autorizó importaciones al sur del paralelo 42°.

En mayo de 1972 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 19.640, por la cual se establece un régimen de franquicias impositivas para el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que viene a reemplazar a aquel otro que en su momento tuviera vigencia a través de los decretos leyes 7.101/56 y 6.264/58, que resultó derogado por imperio de la ley 18.588.

Por la ley 19.640 se prevén tres áreas operativas perfectamente delimitadas: el área franca, el área aduanera especial y el territorio continental nacional; así, todo el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur constituye un área franca, menos la Isla Grande, comprendida por una área aduanera especial. Al resto del país se lo denomina territorio continental nacional.

Lo expuesto intenta sintetizar el perfil legal que se le ha dado al tema de la zona franca en nuestro país a través de sus antecedentes legislativos.

Conceptos generales

El concepto de zona franca se hermana con la promoción y el desarrollo, a través del logro de condiciones favorables, removiendo obstáculos tributarios, administrativos y de otra naturaleza que limitan su operatividad.

Surge como un medio idóneo para contrarrestar los inconvenientes creados por las barreras tarifarias al comercio exterior, para agilizar el intercambio y facilitar la expansión de industrias de exportación que utilizan materias primas, tecnología y equipamiento importados.

El objetivo de su creación es aprovechar un enclave geográfico adecuado para generar comercio y divisas, promover el empleo y captar inversión y tecnología extranjeras.

Debe constituir un instrumento para operar sobre las externalidades negativas que tenga la región, promoviendo inversiones reproductivas que contribuyan a un crecimiento sostenido de las provincias y, por ende, de la Nación en su totalidad, generando empleo y mejoras tecnológicas orientadas fundamentalmente a la exportación.

La finalidad que persigue el proyecto es que las zonas francas constituyan instrumentos idóneos de desarrollo de las regiones en que se establezcan, mediante la utilización en forma prioritaria de los recursos humanos y materiales disponibles.

El objetivo es claro. El enclave deberá basarse en realidades y no en ficciones, configurando áreas naturales de crecimiento que produzcan una efectiva descentralización del país, asentando nuevas poblaciones o fortaleciendo los asentamientos existentes, defendiendo fronteras y ocupando espacios que, a lo largo de décadas, fuimos dejando librados a la soledad y al desierto (en lo que se refiere a la Patagonia, la realidad es el mejor ejemplo).

Las zonas francas consolidarán un régimen eficaz para el desarrollo armónico, equilibrado y justo de todas las regiones del país.

Patagonia-Chubut-Comodoro Rivadavia

Quiero fundamentar brevemente lo antes dicho particularizando mi análisis sobre la región Patagonia Sur, específicamente sobre la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

El crecimiento, con altibajos, de esta ciudad se fundó, principalmente, en la explotación petrolera y en todas las actividades industriales, comerciales y de servicios que se fueron generando alrededor de aquella. La rápida observación de los indicadores macroeconómicos nos muestran claramente el alto grado de correlación que existe entre el nivel de actividad de la economía en el área y el nivel de actividad del sector petrolero.

Los distintos intentos ensayados en las últimas décadas para revertir esta situación y lograr una mayor diversificación de la industria han fracasado, como han fracasado en el país las distintas versiones de un modelo de crecimiento "hacia adentro" fundado en la paternidad del Estado.

Hoy, con la sanción de la ley, en un marco de apertura económica y de integración de nuestro país con el resto del mundo, los habitantes de Comodoro Rivadavia estamos en el camino de contar con una herramienta apta que, bien usada o inteligentemente complementada, puede brindar la oportunidad de formar parte de un sector exportador que, en condiciones competitivas, supere las limitaciones generadas en el sistema económico anterior de economía cerrada y en los sobrecostos de la región.

Es por ello que este proyecto adquiere principal relevancia ya que permite fundamentar el desarrollo de la región en una serie de ventajas que, sin lugar a

dudas, serán potenciadas por una zona franca. Ellas son, entre otras:

1. — *Condición bioceánica*, sustentada en dos características:

1.1. — El corredor bioceánico, que une el puerto de Comodoro Rivadavia en el océano Atlántico con el puerto de Chacabuco en el Pacífico, distante 550 kilómetros.

1.2. — La existencia de un paso permanente y transitable durante todo el año en el hito 50 (paso Huelmo).

2. — *Condiciones naturales de la región.*

2.1. — La provincia del Chubut es reconocida internacionalmente como zona libre de aftosa. Ello permite competir, con una buena estrategia de diferenciación de producto, en mercados de mayor precio que los nacionales.

2.2. — Características ecológicas óptimas con ausencia de factores críticos de contaminación, con la consiguiente posibilidad de aprovechar el efecto sinérgico de esa condición sobre los productos de la región en los mercados externos.

Ya el señor presidente de la Nación, el 27 de mayo de 1992 anunció, desde la ciudad de Puerto Madryn, que se establecería en el país un régimen que permitiría la instalación de zonas francas, contemplándose que en la Patagonia Sur se pudieran habilitar hasta dos por provincia.

En el mes de junio próximo pasado, y en oportunidad de constituir su gabinete en la ciudad de Rawson, efectuó el anuncio de disponer la creación de una zona franca en la ciudad de Comodoro Rivadavia tras la sanción de la ley marco que hoy nos ocupa.

Nosotros, los representantes del pueblo, queremos ser partícipes en propuestas que impulsen el desarrollo del país como un todo homogéneo.

Las provincias, en este caso, deberían ejercer un papel preponderante, identificando dentro de su territorio las posibles zonas francas a crear por el Poder Ejecutivo, proponiendo al gobierno nacional la fijación del área, fundamentándolo en la conveniencia política y económica de determinar la zona óptima para el desarrollo del Estado provincial en su conjunto.

Análisis de su articulado y modificaciones propuestas. Orden del Día N° 1.653. Dictamen acordado por la comisión.

Como consecuencia de lo expuesto, se propone incluir, en primer término, en el artículo 5º del proyecto en discusión como tercer párrafo, el siguiente:

Las provincias adherentes propondrán al Poder Ejecutivo nacional la determinación del área territorial donde se constituirán las zonas francas de sus respectivos Estados provinciales, aportando todos los argumentos económicos y de factibilidad que posibiliten su fijación en un lugar geográfico específico.

Con la inserción de este párrafo y la modificación que propondré al artículo 14, deberá eliminarse el artículo 38 del proyecto en análisis. En efecto, el artículo 38

prevé que la provincia, por intermedio de la Comisión de Evaluación y Selección, proponga a la autoridad de aplicación, entre otras cosas, la localización de la zona franca; no obstante, esta atribución no surge del artículo 14, que determina el objeto de la citada comisión, en tanto evalúa técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la explotación de la zona franca.

Esta evaluación deberá hacerse una vez que se determine la zona en cuestión. La facultad de situarla en el territorio, indelegable para el Estado provincial, cuando se conjugan elementos políticos y económicos que se deben valorar por la provincia interesada, dentro del esquema federal de nuestro país.

El Comité de Evaluación y Selección podrá, cuando más, proponer a la autoridad de aplicación la delimitación de la zona y las áreas de expansión previstas en base a los proyectos que presenten los candidatos para la explotación del área pero, previo a ello, debe localizarse geográficamente, siendo las provincias las que deberán tener la facultad de determinarlas dentro de su territorio para proponer su creación al Poder Ejecutivo nacional.

Concordantemente deberá ser incluido, en un buen ejercicio de técnica legislativa, como inciso b) del artículo 14, el siguiente:

- b) Proponer a la autoridad de aplicación la delimitación de la zona franca, así como las áreas de expansión previstas.

La delimitación de la zona, como su área de expansión, surgirá luego que la comisión efectúe la evaluación técnica y económica de los proyectos que se presenten para la explotación de la zona franca, creada por el Poder Ejecutivo nacional en base a la propuesta del Poder Ejecutivo provincial, conforme lo expresa el tercer párrafo del artículo 3º, propuesto *ut supra*.

Volviendo al articulado del proyecto, se estima que debe reelaborarse el artículo 5º, para adaptarlo a la realidad actual. La expresión: "las zonas francas deberán constituirse en polos de desarrollo", es una mera expresión de deseos sin concreción efectiva, sin sanción o penalidad que implique que la obligatoriedad del "deberán" se cumplimente. En consecuencia, se propone el siguiente texto para el artículo 5º.

Las zonas francas tenderán a constituirse en uno de los instrumentos inductores del desarrollo de las regiones donde se establezcan, mediante la utilización, en forma prioritaria, de los recursos humanos y materiales disponibles en las mismas, dentro de las condiciones fijadas en la presente ley y sus decretos reglamentarios.

Asimismo se propone que se agregue en el inciso b) del artículo 14, a continuación de "reglamento de funcionamiento y operación", la frase: "dentro de los 90 días de aprobado el contrato de adhesión"; ello manteniendo coherencia con los plazos que tiene la autoridad de aplicación para aprobarlo; el Comité de Evaluación debe también tener un plazo definido para elaborar el reglamento y elevarlo a la autoridad de aplicación, quien a su vez tiene un plazo de 90 días para aprobarlo, de-

biendo tenerse presente que luego de suscribir el convenio de adhesión se cuenta con 18 meses para iniciar las obras de infraestructura.

Respecto del artículo 16, que trata de las funciones del Comité de Vigilancia, se propone que se agregue un nuevo inciso, como inciso f), el siguiente:

- f) Informar a la autoridad de aplicación de los incumplimientos ocurridos, a efectos de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Asimismo se propone la eliminación del artículo 17 por considerar que estas funciones están contempladas en el inciso b) del artículo 14, toda vez que una de las atribuciones de la Comisión de Evaluación y Selección es la de determinar las características, tasas y cargos de los servicios prestados en la zona, así como las condiciones contractuales para la admisión de los usuarios, por lo que será este Comité quien deberá propiciar la libre concurrencia de éstos, mientras que las funciones del Comité de Vigilancia están suficientemente explicitadas en el artículo 16.

Adviértase que en ninguno de los incisos del artículo 16 se ha previsto que el Comité de Vigilancia elabore reglamento alguno de funcionamiento y operación de la zona franca, objetivo que se le ha encomendado a la Comisión de Evaluación y Selección (artículo 14, inciso b); consecuentemente, mal puede tener injerencia en él como para incluir alguna previsión.

En cuanto al artículo 18, se propone que "la explotación de la zona franca podrá ser de carácter público, privado o mixto", agregándose el "carácter público" en el entendimiento que no se puede coartar a las provincias la facultad de otorgar la concesión a un ente público; adviértase que la explotación podría incluso ser realizada por un municipio.

Cuanto más, podría otorgarse un plazo para que la explotación realizada por un ente público se fuera paulatinamente privatizando.

En el artículo 20 se estima que debe mantenerse el inciso k), contemplado en el Orden del Día N° 1.633, con el siguiente agregado: "facúltase a la autoridad de aplicación para reducir o suprimir los costos del control aduanero en las zonas francas localizadas en las regiones de menor grado de desarrollo". Ello en razón de que, si bien puede haber zonas en que la rentabilidad de la explotación de la concesión permita hacer frente al costo del control aduanero, en cambio habría otras, en las regiones de menor grado de desarrollo, donde la rentabilidad de la concesión no admita este gasto. Sería una forma de mejorar la competencia de la explotación de las zonas francas a instalarse en las áreas marginales del país.

Asimismo deberá agregarse como nuevo inciso, intercalándolo luego del inciso f), el siguiente: "Asegurar la conservación del medio ambiente, realizando todas las obras necesarias a los efectos de su preservación, conforme a la ley y reglamentaciones vigentes en la materia".

En lo que hace al artículo 31 del orden del día citado "suspensiva" en el artículo 27 del texto acordado por la comisión, se estima que ello puede dar lugar a efectos no queridos, tales como exportar a la zona franca sin que esa exportación vaya a integrar algún producto

final que se exporte a terceros países, partiendo de la base de que el "acto de comercio exterior" se produce cuando la exportación se realiza a terceros países, por lo que considero que el término "suspensiva" debe mantenerse.

En razón de lo expuesto, tampoco corresponde que se eliminen el artículo 29 y el 35 del Orden del Día Nº 1.653.

En lo que hace al artículo 31 del orden del día citado, propicio que quede redactado en los términos originales, con el compromiso de los gobiernos provinciales de no reducir sus impuestos de todo tipo a las actividades y usuarios de la zona franca, sin perjuicio de una eventual adhesión a la exención nacional de los tributos que graven los servicios básicos. La provincia debe mantener el mismo régimen de tributos en todo su territorio. La zona franca no implica exención tributaria alguna, salvo para la introducción o extracción de mercaderías conforme lo establece el artículo 500

del Código Aduanero. La exención de impuestos provinciales implica un subsidio adicional para el área franca.

En cuanto al texto del artículo 39, consensuado por la comisión, la realidad nos pone ante la evidencia que los salarios que se determinan de personal argentino nativo o por opción exigidos ya por otras leyes, como el caso de la ley 22.228, no se han cumplimentado, habiéndose pronunciado la Procuración del Tesoro de la Nación en el sentido de que podrían ser considerados como inconstitucionales dado el espíritu amplio de nuestra Carta Magna.

En consecuencia, se propone que se elimine el mínimo del 75 % del personal argentino nativo o por opción a emplear en las actividades que se desarrollen en la zona franca, plasmado en el primer párrafo del artículo, manteniéndose en cambio el último párrafo.

Con las modificaciones propuestas, manifiesto mi total apoyo para la aprobación del proyecto en debate.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LOUTAIF

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley que establece el régimen de las zonas francas

Hemos iniciado el debate de un tema que podrá o no ser importante para el país. Depende de la estructura definitiva de la ley, así como también de su instrumentación práctica.

Sin dudas que el tema de las zonas francas está desde hace tiempo instalado en muchos sectores de la sociedad argentina, pero en forma especial en aquellos ámbitos empresariales de las provincias limítrofes de la Argentina.

Las zonas francas en el mundo han servido a la creación de polos de desarrollo. En el marco del Mercosur, la Argentina es el único país que no cuenta con este instrumento.

La propuesta que hoy debatimos, y que tiene origen en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al cual se agregaron de otros diputados —entre los que me incluyo—, impulsa la sanción de una ley marco, mediante la cual el Congreso de la Nación faculta al Poder Ejecutivo para determinar en la Argentina hasta 28 zonas francas.

Parece imposible que en la práctica cada provincia pueda crear una zona franca, y algunas hasta dos. Digo esto porque, a medida que se vaya determinando una zona franca dentro de una región, llámese NOA, NEA, Centro, Patagonia, etcétera, inmediatamente van quedando de hecho descalificadas las provincias vecinas.

Nos preocupa en principio este criterio de la ley. Quizás haya sido planteada desde el Poder Ejecutivo como una manera de salvar la discusión que lógicamente generaría la decisión de crearlas en algunas provincias previamente determinadas. Sin duda que sería mucho más difícil sancionar una ley en estas condiciones.

En la Edad Media existían zonas francas o mercados libres, organizaciones que aún conservan su nombre y que sirvieron para que algunas poblaciones solucionaran

la carestía a que daban lugar las imposiciones feudales.

Con la firma del Tratado de Asunción se ha abierto la posibilidad para la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de crear un mercado común subregional, que desde el punto de vista interno de cada uno de estos países supone la posibilidad de acceder con sus productos a un mercado mucho más amplio y, con relación a terceros países, poder llegar a construir un bloque hegemónico en Latinoamérica.

La búsqueda de instrumentos idóneos para una mejor y más rápida conjunción de las economías de estos países, y de la actuación de éstos en forma global hacia afuera del mercado, nos lleva a pensar que las zonas francas pueden llegar a ser un instrumento idóneo.

Y en este marco del Mercosur podemos decir que Brasil posee una zona franca en Manaus, destinada a satisfacer casi exclusivamente el mercado interno. Uruguay cuenta con las de Colonia y Nueva Palmira, ambas de carácter oficial. Paraguay utiliza depósitos francos en Uruguay y está instrumentando la instalación de un puerto propio en la zona de Nueva Palmira. También está debatiendo una ley de zonas francas.

En Chile, país no signatario del Mercosur, funcionan dos de gran desarrollo en Punta Arenas e Iquique, y en Bolivia se creó recientemente una zona franca industrial y comercial de carácter privado en la Central Aguárre, sobre el Canal Tamengo, que desemboca en el río Paraguay.

Este panorama nos indica que, si bien es cierto hay una difusión de este instrumento en los países vecinos, ninguno tiene más de dos, y se encuentran enclavadas en regiones de bajo nivel de desarrollo. Se concibieron como un elemento indicado para ir atenuando desigualdades regionales.

El Mercosur producirá la reactivación y permitirá un avance rápido de aquellas áreas geográficas que produzcan los bienes cuya demanda se verá incrementada. Acá, seguramente, las zonas desarrolladas de nuestro país, o donde se producen bienes primarios de alto nivel, como ser Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe

y las zonas de producción de bienes de capital como San Pablo y Río Grande del Sur en Brasil, se vuelven altamente reactivadas.

Pero hay zonas de nuestro país que se encuentran en una posición muy desventajosa respecto de las mencionadas y que, con la creación de una zona franca a lo mejor encuentran condiciones más viables para su desarrollo.

De allí entonces que el riesgo que observamos en el proyecto es que el capital privado, principal impulsor y motor sin el cual las zonas francas no son viables, concentrado mayoritariamente en el centro del país e impulsado por la puesta en marcha del Mercosur, le acarrearán a dicha zona más ventajas comparativas respecto de las que hoy tiene sobre las regiones marginales del país.

En los últimos 20 años las economías regionales no fueron tema relevante en el debate político y económico argentino. Otros temas han ocupado el centro de la escena. La deuda externa, la inflación y el déficit fiscal concentraron exclusivamente la atención. Cualquier otro tema seguramente se hubiera analizado a partir de la perspectiva de algunos de esos tres temas centrales. Visto en perspectiva resulta comprensible. La "sensación" de descomposición, de crisis final que impregnaba la situación económica argentina, nos permite entender esa concentración obsesiva en determinados temas.

Mucho menos comprensible, sin embargo, resulta la situación que se da hoy en día cuando ya hemos superado la angustia y la desolación de aquellos días aciagos, porque la cuestión regional sigue ausente. No hay que confundir la cuestión regional con la problemática fiscal. La necesidad de recursos fiscales lleva a que el gobierno nacional presione a las provincias para que éstas generen cada vez más recursos como para cubrir sus propios gastos y así aliviar la presión sobre las arcas de la Nación. Comprensible, sin duda, pero imposible.

Los últimos 20 años han profundizado un modelo económico que limitó las posibilidades de acceso al mismo a aquellas provincias que pudieron combinar exitosamente una determinada masa crítica a nivel de recursos económicos con un conjunto de grupos empresarios poderosos. Normalmente esta combinación redundó en una representación política importante. Aquellas provincias pequeñas, que no contaban con la fuerza necesaria, tampoco contaban con un conjunto importante de empresas y ello les quitó posibilidades de ocupar algún lugar. Hoy están fuera del modelo y no tienen posibilidades de entrar por sus propias fuerzas. Hace falta una política regional consensuada pero implementada y promovida desde la Nación. Sin embargo, el debate político y económico argentino no parece conducirse en esa dirección.

Lo cierto es que la ausencia de la cuestión regional en el debate político de nuestro país se debe a que aún no nos hemos dado un debate sobre la cuestión nacional. Al debatir el proyecto de Nación no se puede dejar de discutir la territorialidad. Y sólo en ese debate, con la perspectiva del desarrollo nacional, tiene sentido plantearse, como un objetivo de conjunto, el crecimiento de cada una de las partes. Hoy estamos asistiendo a

un proceso de desintegración regional que comenzó hace muchos años pero que aún no se ha revertido. Desde el discurso dominante la cuestión se plantea de la siguiente forma: las provincias deben hacer el ajuste fiscal, despedir personal, efficientizar sus sistemas administrativos, bajar la presión fiscal sobre las empresas; así comenzarán a atraer capitales y a crecer. El argumento funcionaría a nivel provincial como lo hizo a nivel nacional; primero se ajusta, luego se comienza a crecer. La realidad sin embargo es diferente. Una provincia pobre puede tener un sector público equilibrado o no, pero seguirá siendo pobre. De hecho en la Argentina tenemos ejemplos de provincias pobres pero potencialmente ricas y en busca de un equilibrio dinámico como Salta, y pobres y desequilibradas casi definitivamente como La Rioja. Las provincias pobres, esencialmente de pequeñas y medianas empresas, sin grupos socio-económicos de relevancia a nivel nacional, no tienen convergencia propia como para dinamizarse.

Es necesario un estudio profundo de la situación económica de cada una de las provincias, pero al mismo tiempo imaginando el protagonismo que cada una de ellas deberá tener para configurar un país. Primero hay que pensar el país que queremos construir y luego diseñar los instrumentos necesarios para que cada parte esté en condiciones de desempeñar su papel y así construir su destino.

Ahora bien, para que no alentemos falsas expectativas en relación a este instrumento de excepción, voy a recoger un párrafo del mensaje del proyecto, que nos indica claramente el pensamiento del Poder Ejecutivo. Dice uno de ellos: "Las zonas francas no se constituyen en el instrumento exclusivo para resolver los problemas de provincias o regiones. Se considera, en cambio, que constituyen herramientas útiles en el marco de un plan de transformación y desarrollo que identifiquen potencialidades de cada región y las coloque en función de una visión de mediano y largo plazo".

Si este pensamiento lo confrontamos con las urgencias que observamos los que venimos de provincias como Salta, como tantas otras, esperamos soluciones rápidas para nuestras economías y que en verdad no visualizamos, podemos llegar a coincidir en que este instrumento, tal cual está planteado en el proyecto, no está pensado para impulsar el desarrollo regional.

Desde el punto de vista impositivo, consideramos que, al no establecer exenciones de impuestos directos, se busca minimizar el costo que esta herramienta acarrearía al fisco, quizás la amarga experiencia de regímenes de promoción industrial, que se constituyeron en muchos casos en estufa a la sociedad argentina en su conjunto, haya inducido a no incursionar en esta cuestión.

El tipo de cambio vigente o los costos internos, según el punto de vista desde el cual se lo mire, está generando una constante fuga de divisas a través de las fronteras del país. Las ventajas en precios, la facilidad de ingreso de mercaderías, el escaso o nulo control efectivo en nuestras fronteras, nos indican que las zonas francas comerciales en provincias limítrofes pueden llegar a ser un instrumento que ponga coto a esta situación, que viene desde antes del plan de convertibilidad pero que se acentuó y que está perjudicando enormemente al comercio de frontera.

El proyecto que estamos analizando implica un tiro de taca para las provincias marginales. Esperamos que caiga suerte. Las expectativas son muchas para nuestra gente. Confiamos entonces en la capacidad de nuestros empresarios y de los gobiernos provinciales para actuar

rápidamente. La carrera se largó y con esta ley el que pega primero pega dos veces.

Por lo expuesto, apoyamos en general este proyecto y sostenemos disidencias en particular.

5

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FOLLONI

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley que establece el régimen de las zonas francas

La problemática de las zonas francas desborda las meras consideraciones de índole técnica y requiere definiciones previas de carácter político, vinculadas particularmente con el área de las relaciones exteriores, la economía y el ordenamiento territorial de nuestro país.

Históricamente, estas zonas fueron apareciendo sobre las líneas tradicionales de las rutas del comercio. Aparecen cuando los Estados eran pequeños y los gobiernos eran descentralizados, en orden a facilitar el aumento del tránsito, en virtud del auge que el comercio había alcanzado como consecuencia de las Cruzadas y los grandes descubrimientos marítimos. Italia fue el primer país que estableció tal institución, y el primer puerto franco que se conoció fue el de Livorno, allá por el 1547, sin perjuicio de que algunos remontan el origen de ese instituto a las colonias fenicias.

Posteriormente, la ampliación de las actividades económicas y comerciales de algunas potencias con sus lejanas colonias, llevó a que se utilizara este mecanismo para acumular mercaderías a fin de distribuirlas luego en los respectivos mercados coloniales. Asimismo, la necesidad de incluir en la órbita del comercio internacional áreas con difícil acceso a los océanos, fue otro factor determinante de la creación de este instituto.

No obstante, las finalidades de creación de esta figura no se han agotado con la necesidad de impulsar el tráfico internacional o facilitar la distribución de mercaderías sino que han servido para fomento a la exportación y como medio de coadyuvar al desarrollo de una determinada región que se encuentra deprimida respecto del resto del país o bien con una ubicación geográfica particular, fronteriza o muy alejada de los centros de mayor desarrollo económico.

De una forma u otra, en todos los casos fueron utilizadas siempre como una herramienta económica estratégica tendiente a:

- Promover el desarrollo exportador, tanto de empresas existentes como nuevas;
- Contribuir a una mayor generación de divisas;
- Fomentar el empleo y la calificación de la mano de obra nativa;
- Favorecer aquellos emprendimientos que incorporen tecnologías funcionales a sus procesos productivos, destinados a incrementar la capacidad exportadora de las empresas;
- Promover la integración con los países limítrofes y el desarrollo regional del país.

Y aquí es donde señalamos que el proyecto en debate, tal como está concebido en el dictamen de mayoría, desaprovecha la oportunidad de plantear y promover las zonas francas como formidable instrumento de política

económica que garantice la definición de una estrategia consensuada en función de los intereses del país en su conjunto y las potencialidades regionales.

Concretamente, carece de un enfoque político de desarrollo regional que oriente las localizaciones espaciales de los emprendimientos que se lleven a cabo.

¿De qué otra forma puede interpretarse acaso, la facultad que se otorga al Poder Ejecutivo para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes y pudiendo crear adicionalmente otras cuatro en lugares a determinar?

Es evidente que la utilización de este instrumento puede producir interesantes beneficios como factor de promoción de las inversiones por la atracción de capitales nacionales o extranjeros hacia su territorio, o la promoción del intercambio regional o de emprendimientos binacionales cuando se instalan en zonas fronterizas; pero en todos los casos la decisión de instalarlas debe estar incluida dentro del marco general de la estrategia del desarrollo del país.

¿Por qué? Porque constituyen un instrumento excepcional, fuertemente condicionado por elementos de carácter territorial y cuyo espectro de beneficios se encuentra estrechamente ligado a los fines que se pretende alcanzar.

Adviértase que, como representantes de la provincia de Salta, hemos trabajado desde hace mucho tiempo en el proyecto de instalación de una zona franca en nuestra provincia.

Al respecto, no tenemos dudas acerca del beneficio inmediato para Salta y para la región, por cuanto se captaría un monto importante del movimiento comercial de las mercaderías que se negocian en las zonas de los puertos francos de Chile y Perú abaratando o favoreciendo al consumidor del norte argentino e intensificando el comercio con Bolivia, Paraguay y Brasil, teniendo en cuenta que esos países se abastecen en las zonas francas nombradas.

Otro que la provincia de Salta es un punto neurálgico por su ubicación geográfica, al limitar con seis provincias y tres países, teniendo comunicación ferroviaria y vial con puertos del Pacífico y del Atlántico y con un aeropuerto internacional con conexiones aéreas con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Brasil.

Ello la convierte en el lugar ideal para este tipo de emprendimientos y es indudable que, por su posición de *hinterland*, pocos proyectos pueden lograr en forma inmediata una reactivación comercial e industrial. Pero, además, todo el Noroeste se vería beneficiado directamente, por cuanto tendría en la zona franca todas las herramientas necesarias para desarrollar el comercio de importación y exportación sin intermediaciones que elevan su costo, poniendo en movimiento de crecimiento a la región.

Y permítasenos agregar algo muy importante: el poderoso impulso que significaría para desarrollar un mercado de capitales en la región.

Atraer capitales, invertir, e incorporar tecnologías, redundará en un aumento proporcional de negocios que en corto tiempo hará sentir sus efectos en la economía, proporcionando una rápida distribución de recursos y bienestar general.

No obstante, la clave, la condición necesaria, está en las posibilidades de contar con un mercado de capitales que actúe como factor dinamizante.

En ese contexto, una zona franca sería el elemento que le otorgaría al esquema la característica de condición suficiente para una forma de crecimiento posible que elimine toda necesidad de subsidio.

Ocurre que el empresariado de la región está convencido de que sin mercado de capitales no hay desarrollo. Así de simple.

Naturalmente, ésta no es una verdad revelada, porque hay ejemplos en los cuales el desarrollo obtuvo sus nutrientes en la acumulación empresarial. Pero encuentra sustento en las comprobaciones que indican que, en los países o áreas geográficas en crecimiento, la superación del estrangulamiento de capitales necesarios para el despegue debe provenir de una participación efectiva del sistema financiero.

Incluso, en un planteo más amplio, constituye un factor para evitar el riesgo de que el desarrollo del mercado de capitales quede limitado sólo a las grandes empresas sin contemplar las necesidades de financiamiento de los sectores pequeños y medianos de la producción y que representan la auténtica realidad empresarial de la región del norte del país.

En definitiva, el mercado de capitales es el requisito para el desarrollo; y el establecimiento de una zona

franca ofrece un adecuado espacio a explorar que la complementa en tal sentido para materializar corrientes de capitales, tanto a través de instrumentos adecuados como en la incorporación de intermediarios dispuestos a canalizar empresas hacia un mercado fluido y eficiente en sus mecanismos de financiamiento.

Desde esta perspectiva, la instalación de zonas francas no puede obedecer a decisiones arbitrarias, oportunistas, facilistas ni demagógicas. Perderían su vigor en tanto pretendieran utilizarse masivamente.

Sólo pueden concebirse, y así ha sido reconocido internacionalmente, como pequeñas dosis para que surtan su real efecto: concurrir a la efectivización de una puntual estrategia de desarrollo, dosis que, no por escasas y pequeñas es menos potente para lograr el resultado buscado.

Por supuesto, coincidimos en que no se constituyen en el instrumento exclusivo para resolver los problemas de provincias o regiones.

Pero debe entenderse claramente que únicamente constituirán herramientas útiles en el marco de un plan de transformación y desarrollo; si media un enfoque territorial que identifique las potencialidades de cada región, creando las condiciones para que todo el país se desarrolle en forma orgánica, equilibrada y regular, disminuyendo las grandes e injustas diferencias del producto por habitante que actualmente existe entre las zonas industrializadas del centro y sur con respecto a las del norte.

Lamentablemente, el referido enfoque está ausente del proyecto en debate, desaprovechándose una magnífica oportunidad que hace al crecimiento industrial y a la reactivación regional.

6

INSERCIÓN SOLICITADA POR LOS SEÑORES DIPUTADOS SANCHEZ CALDEANO Y TOPA

Opinión de los señores diputados acerca del proyecto de ley que establece el régimen de las zonas francas

Antes de comenzar el examen de este proyecto de ley conforme al Orden del Día N° 1.653, deseo destacar que, en nuestra opinión, se debería haber tenido en cuenta, para producir el dictamen, todos los proyectos formulados a este efecto; por lo menos los presentados durante los últimos tres años.

En primer término, es de suma importancia destacar que, en el orden jurídico nacional, el Código Aduanero (con sus doce años de existencia y sin dudas perfectamente) resulta nuestra legislación base. En dicho documento se analiza detalladamente la creación de las "áreas francas", que fueron aplicadas por la ley 19.640 de promoción industrial, vigente en la provincia de Tierra del Fuego. Este concepto básico debe ser adoptado como genérico. El mismo comprende, en consecuencia, los denominados territorios francos, zonas francas y también otras denominaciones que toman en consideración el lugar franco, como lo son los puertos francos y los depósitos francos. Ello surge de lo expresado en el comentario contenido en la exposición de motivos del Código Aduanero referido a los artículos 590 y 599.

Por ello, desde el punto de vista terminológico, se estima que el proyecto de ley debe referirse a las áreas francas, ya que ellas incluyen la idea integral genérica y no a una de sus especies como son las zonas francas.

La Constitución Nacional, en su artículo 67, inciso 16, dentro de las atribuciones otorgadas al Congreso incluye la de dictar las leyes protectoras y concesiones temporales de privilegio y recompensas de estímulo a fin de proveer a la prosperidad del país. Es, pues, un atributo del Congreso el de elaborar leyes que cumplan este objetivo y que, sobre todo, actúen en relación a las regiones más desprotegidas. El objetivo es tratar en lo posible de incrementar su desarrollo para igualarlas con aquellas más evolucionadas. Dentro del concepto antes mencionado, las áreas francas en sus diferentes tipos constituyen elementos de promoción a la actividad económica a través de condiciones tributarias de excepción, y además facilitando la tramitación del movimiento de las mercaderías y disminuyendo al máximo los costos de producción a los efectos de obtener un mayor grado de competitividad en la oferta en el extranjero.

La emergencia económica que debió enfrentar el Estado requirió la adopción de drásticas medidas para

su superación. Entre ellas se suspendió toda acción de fomento que distrajera los fondos necesarios para la recuperación de la economía. El paulatino saneamiento de esa situación y la confianza que este proceso ha generado, permiten en el presente la modificación de algunos de aquellos criterios. Ello tiene principal atención en sectores que han sufrido con más crueldad el ajuste. Por ello, se estima que debe ser un objetivo estimular ciertas economías regionales, particularmente las que atraviesan por momentos de crisis. Evidentemente, estas economías regionales son las que más necesidad tienen de contar con estímulos especiales: de allí el proyecto de creación de áreas francas en sus territorios.

Las áreas francas son parte del territorio debidamente delimitadas, que deberían estar próximas a las fronteras, puertos o aeropuertos, o vinculadas a ellos. Dentro de ellas, las mercaderías son introducidas, mantenidas o exportadas, sin que estén obligadas a cancelar los tributos generales correspondientes o los particulares señalados en las respectivas leyes de su creación.

Estas áreas francas —lo reiteramos— surgen como una necesidad para disminuir los costos de producción al suprimir el incremento que incide en ellos debido a los tributos correspondientes al comercio exterior. De esta manera se logra agilizar el intercambio, al tiempo que estimular el desarrollo de las industrias de exportación. Esto adquiere perfil especial para aquellas que utilizan en forma intensiva materias primas, equipamiento y/o tecnología extranjera.

Las razones que justifican su creación son la necesidad de favorecer una determinada región para incrementar el empleo, estimular la inversión y revertir la situación de desventaja que puedan tener con respecto a las asimetrías existentes con regiones de países limítrofes que les son competitivas.

El proyecto de ley en consideración adolece del defecto de no clasificar claramente las zonas francas. El Código Aduanero tampoco es muy específico en este aspecto. La importancia de esta clasificación es que ella deberá tenerse en cuenta para establecer cuál es la que deba imponerse a una determinada región conforme a sus necesidades y a su entorno.

Sería sumamente importante que esta ley de tipo marco, como pretende serlo, definiera los diferentes tipos de zonas francas de acuerdo a la siguiente enumeración:

1. Zona franca comercial: En ella las mercaderías sufren solamente los procesos de comercialización - introducción, transporte, almacenamiento, reclasificación, reordenación, reducción del empaque, etcétera. Este tipo de zona franca sólo tiene por objeto agilizar el comercio.

2. Zona franca industrial: Zona perfectamente delimitada, que queda separada del territorio nacional por un cerco, con una sola entrada. En ella se introducen elementos para su transformación y elaboración de productos destinados a la exportación al exterior o a la zona aduanera general. Tiene por objeto incentivar el crecimiento de la región a través de nuevos empleos que la actividad generará.

3. Puerto/aeropuerto franco: Es un área que cubre el puerto o aeropuerto para almacenamiento, distribución de mercaderías y su consumo interno.

4. Zona de tránsito: Es una zona de entrada de mercadería destinada a países que no tienen acceso marítimo. Las mercaderías no pueden sufrir ninguna clase de manipulación y se consideran en tránsito a otros países.

5. Depósitos francos: Son centros de almacenamiento y distribución destinados a un país vecino que no tiene una estructura portuaria suficiente para satisfacer la demanda de su población.

Asimismo, la creación de un área franca por provincia, cuyas dimensiones y formas específicas no están contempladas en el presente proyecto, parece desproporcionada respecto a las finalidades a tener en cuenta; máxime cuando algunas provincias estarían pensando en solicitar que se declare área franca a la mayor parte de su territorio. De otorgarse, ello implicaría ni más ni menos que romper el pacto federal de constituir un territorio único a los fines económicos. Esto significaría dejar sin efecto el arancel y crear en consecuencia diferencias de tratamiento entre distintas provincias. Por vías de la tributación interna se estaría alentando o alentando el desplazamiento de inversiones. Todo esto sería una incitación a una verídica guerra económica semejante a la guerra de tarifas existente antes de la organización nacional.

Debe también verse con sumo cuidado la creación masiva de áreas francas, pues ello contradice el espíritu y los avances en esta materia dentro del Tratado del Mercosur. Una unión aduanera (en incipiente desarrollo) no puede funcionar correctamente si cualquiera de sus miembros pudiera, a su gusto, recortar áreas del territorio comunitario, excluyéndolas del arancel y de la política comercial concertada.

Uno de los aspectos que nos preocupa es determinar cómo el Estado nacional garantizará, una vez concedidos los beneficios y las desregulaciones que gozarán los usuarios, la vigencia y el tiempo de duración de aquéllos. Recordemos que existe un compromiso entre el Estado y los particulares que, en caso de revocarse, motivará responsabilidades y permitirá los consiguientes resarcimientos por daños y perjuicios. Es importante la introducción de esta norma con el objeto de brindar seguridad jurídica frente a emprendimientos que pueden alcanzar gran magnitud.

De la misma manera creemos que las legislaturas provinciales, al adherirse a este tipo de convenios, deben fijar una norma bien clara sobre la extensión y duración de las excepciones.

Por otra parte, es de destacar particularmente la protección ambiental que debe regir el desarrollo de las áreas francas. De ser posible, esta regulación protectora debe estar perfectamente controlada para que estos emplazamientos industriales y comerciales no atenten contra el equilibrio ecológico reinante.

ARTICULO 5º

En la misma línea de lo planteado anteriormente dis-
sentimos en la redacción de este artículo. Se refiere a las actividades a realizarse en las áreas francas, unificando las zonas francas comerciales y las industriales. Ellas son dos formas distintas ya definidas por la Convención de Kyoto, en su artículo FI, que establece en

rigencia el 19 de marzo de 1979. Sus definiciones fueron la base de los artículos 594 al 597 del Código Aduanero.

Es conveniente recordar que, conforme esos cuerpos normativos, en las zonas francas comerciales, las operaciones autorizadas se limitan, en general, a las necesidades para la conservación de mercaderías y las manipulaciones usuales destinadas a mejorar la presentación o la calidad comercial de las mercaderías o su acondicionamiento para el transporte, y que dicha mercadería puede ser comercializada, utilizada o consumida dentro de ella. Dado que en las zonas francas industriales se autorizan operaciones de perfeccionamiento de la mercadería, existen razones técnicas que justifican separar la regulación de las zonas francas comerciales de las industriales.

El Código Aduanero menciona un tercer tipo de zona franca, la de almacenamiento, en la que la mercadería sólo es admitida en espera de un destino ulterior y que participa de algunas de las características de las zonas francas comerciales. En ellas la mercadería puede ser objeto de transferencia. El proyecto de ley en estudio no la menciona en particular sino que las unifica en

el artículo 6º, sin tener en cuenta la definición para este tipo de zonas francas que consagra el artículo 596 del Código Aduanero.

En nuestra opinión el presente proyecto debería definir claramente estos tres tipos de zonas francas.

Debemos destacar que iguales anomalías a las citadas en el artículo antes expuesto como ejemplo se repiten a lo largo de todo este proyecto. Todo ello muestra una significativa colisión conceptual entre el Código Aduanero y la ley en estudio. No tener en cuenta que se está propiciando una legislación que no guarda coherencia legislativa con leyes anteriores, nos puede llevar a serios problemas aplicativos para el futuro.

En base a lo expuesto, con la finalidad de evitar los serios problemas antes expuestos y con el objetivo de realizar una concreta adaptación del proyecto en consideración, propongo a la Honorable Cámara que sea devuelto a las comisiones respectivas a efectos de su nueva formulación. Dada la trascendencia de esta legislación, propongo que se cree una comisión especial con la responsabilidad específica sobre esta materia.

Roque Sánchez Galdeano. — Raúl Topa.

7

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BARBOTTI.

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley que establece el régimen de las zonas francas

La actual política económica implementada por el Poder Ejecutivo nacional produce grandes transformaciones hacia la inserción de la Argentina, en forma competitiva en los mercados mundiales, los cuales requieren calidad, continuidad, eficiencia y sobre todas las cosas precios competitivos.

En este sentido de apertura económica la herramienta de zonas francas permitirá reducir el alto costo argentino, disminuyéndose de esta forma el sesgo antiexportador y en consecuencia poder expandir nuestras exportaciones buscando equilibrar de esta manera nuestra balanza comercial que hoy se encuentra en una situación delicada.

Debemos destacar que las zonas francas son medidas de excepción a la política de apertura, pero que contribuyen sin lugar a dudas al desarrollo de vastas regiones del país, especialmente aquellas de economías regionales tan castigadas.

Por otra parte, visto que la economía mundial va hacia una globalización en particular la Argentina hacia la integración del Mercado Común del Sur (Mercosur), esta medida es compatible con las políticas macroeconómicas y con los postulados del Tratado de Asunción que dio origen a dicho mercado común. Asimismo, es de destacar que nuestro país es el único de la región en no contar con una legislación de tipo general sobre la materia, por lo que su sanción contribuirá a facilitar todas las tareas de armonización que llevan a cabo nuestros negociadores.

No es del caso reseñar ahora las ventajas de un sistema de zonas francas cuya utilización mundial es muy extensa y de vieja data. Sin embargo, nos permitimos señalar que dicho instrumento permite la incorporación de altas tecnologías eficientes para la actividad industrial, así como otras medidas conexas tal como la reducción de costos, simplificación de trámites, eliminación de impuestos, etcétera.

El proyecto que estamos considerando tiende a promover la relocalización industrial, como modo de promover el aumento de la mano de obra y la concentración de capitales, factores ambos que actúan coordinadamente para la tan necesaria reducción de costos.

Por otra parte, se establecen los criterios diferenciados para las zonas francas, la comercial y la industrial. La primera tiene por objeto, desarrollar el intercambio regional, mientras que la segunda fundamentalmente, apunta a la radicación industrial y consecuentemente al aumento de las exportaciones con mayor valor agregado.

Esta medida será una eficaz ayuda para potenciar las economías regionales, a partir de la generación de integraciones verticales entre productores e industriales de la región, aumentándose de esta manera el ingreso per cápita regional, permitiendo impulsar la creación y la cooperación económica y financiera, principalmente con los países limítrofes y otros en vías de desarrollo propiciando los acuerdos bilaterales o multilaterales y el incremento del intercambio compensado, así como otras actividades de comercialización internacional.

Además, la provincia del Chaco hace tiempo viene bregando por una zona franca, industrial y comercial, y al respecto he presentado un proyecto al igual que muchos otros legisladores de otras provincias; inclusive el Poder Ejecutivo nacional predecepcionalmente el señor pre-

sidente de los argentinos nos prometió dicha zona y me congratula que a pesar de no habernos favorecido, haya enviado a esta Honorable Cámara de Diputados un proyecto de zonas francas.

Por la ubicación geográfica que posee mi provincia, que es cruzada de Este a Oeste por una ruta biocénica, uniendo al Pacífico con el Atlántico; y sobre la margen del río más importante del país, con infraestructura de puertos, elevadores, etcétera, y siendo la salida obligada por agua de la República del Paraguay, también necesaria para Bolivia y la región este del Brasil; y contando con un aeropuerto internacional apto para todo tipo de aeronaves que actualmente existen en el mundo y teniendo en cuenta que el próximo año, está prevista la puesta en marcha de Yacaré, la obra hidroeléctrica más ansiada y esperada por los argentinos, que asegurará a la región energía abundante y a bajo costo.

La implementación de una zona franca para la provincia del Chaco, que produce entre el 60 y 70 % de la producción nacional de algodón, y que no fabrica una sola camiseta, esto permitirá dar valor agregado a nuestras materias primas.

Por último también promoverá la formación de empresas para el comercio exterior, como consorcios y cooperativas, con el objeto de incrementar la participación del capital nacional.

Por estas consideraciones, damos nuestro apoyo, en general, a la iniciativa. No obstante ello debemos observar algunos aspectos del proyecto que han merecido nuestra particular atención.

En este sentido, discrepamos con la redacción del artículo 12, ya que aspiramos a darle a la ley un efecto más federalista.

Es por ello que propiciamos una mayor participación decisoria de las provincias en el nuevo régimen. Consideramos conveniente que la autoridad de aplicación de la presente ley se encuentre, exclusivamente, en manos del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Es por ello que propiciamos la creación de un comité federal de zonas francas, integrado por miembros de esta repartición y de representantes de los Estados provinciales de acuerdo a una reglamentación que se da de al respecto.

Con esta medida, se lograría una mayor organización de las zonas francas, evitándose de este modo aspectos no queridos de difícil conciliación.

El comité que proponemos tendrá entre las facultades, las de evaluar, ordenar, conciliar, armonizar y arbitrar los intereses de las provincias de la Nación.

El Chaco está esperando ansioso la aprobación de esta ley.

S

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LARRABU

Observación del señor diputado al artículo 2º del proyecto de ley que establece el régimen de las zonas francas

Tal cual lo he hecho, en el dictamen que estamos hoy disutiendo y en la consideración en general, estoy absolutamente convencido en la necesidad de contar con una normativa que prevea la creación y regulación de las zonas francas en el territorio argentino, sin perjuicio de respetar, por no ser un experto en el tema, las posiciones en contrario que han sostenido distinguidos señores diputados. Seguramente la norma no es perfecta y presupondrá por vía reglamentaria adecuar la presencia de zonas francas en lugares de la República tendientes a una política económica que tienda al crecimiento y a reforzar la actividad exportadora. Y, en tal sentido, formulo una observación al artículo 2º del proyecto, proponiendo se elimine la frase "incluyéndose las ya existentes a los efectos de este capítulo." Para una mejor ilustración, la redacción que propongo es la siguiente: "Encárgase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, pudiendo, con carácter de excepción, crear adicionalmente no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional a ser ubicadas en aquellas provincias o regiones geográficas, que por su situación socioeconómica crítica justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción".

El motivo de mi observación al artículo en cuestión encuentra sustento a raíz de la existencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, concretamente en La Plata, de una zona franca. En efecto, la ley 5.142 del año 1907

y el decreto 1.668/91 definen la zona franca de La Plata, sus funciones y atribuciones. La modificación que propongo permitiría que, por medio de este artículo, la provincia de Buenos Aires pueda tener una nueva zona franca. Y si bien éste no es el ámbito de discusión, pues corresponde a una resolución política que emanará de las esferas ejecutivas y legislativas de la provincia de Buenos Aires, aspiro como bonaerense y hombre de la ciudad de Bahía Blanca, a que se me acompañe en la modificación propuesta y a que el Congreso Nacional esté en nuestra ciudad.

La Plata es casi una zona franca autónoma y próxima tanto al proyecto en discusión y, como señalada precedentemente, la decisión política del gobernador Duhalde es la de instalar la zona franca bonaerense en el hinterland portuario Bahía Blanca - Coronel Rosales. Nuestra zona, que cuenta con el puerto de aguas profundas más importante del país, con una importante red de comunicaciones, vial, ferroviaria y lógicamente marítima, tiene el sueño nunca abandonado de unir desde nuestra zona el Atlántico con el Pacífico, a través de la conexión del Ferrocarril Trasandino del Sur, un polo de desarrollo regional, educativo y cultural, rubricado con la presencia de dos importantísimas universidades nacionales, como son la Tecnológica y la del Sur. Institutos de investigación habilitan a nuestra zona para ser merecedora sin ningún tipo de duda de la instalación de una zona franca que seguramente mejorará la delicada situación laboral y productiva por la que hoy atravesamos.

9

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FALLETI

Observación del señor diputado al artículo 13 del proyecto de ley que establece el régimen de las zonas francas

En el artículo 13 referido a la autoridad de aplicación de la presente ley, se propone la siguiente modificación:

Artículo 13: Será autoridad de aplicación de la presente ley el Comité Federal de Zonas Francas que estará integrado por seis (6) miembros, tres designados por el Poder Ejecutivo y tres entre las provincias de acuerdo a la forma que fije la reglamentación. El Comité actuará dentro de la órbita del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Los demás organismos provinciales creados por esta ley dependerán de la autoridad de aplicación.

La modificación que se propone, se fundamenta en la necesidad de dar participación decisoria a las provin-

cias en las cuales se van a asentar las futuras zonas francas, y en especial en evitar que puedan producirse superposiciones entre los distintos proyectos a instalarse. Los distintos organismos provinciales que se crean por esta ley no van a cumplir esta función puesto que tienen facultades limitadas a las provincias en donde se encuentran. Es evidente que de no modificarse este aspecto del proyecto, seguramente como lo demuestran distintos estudios, pueden producirse situaciones de tensión entre las provincias, sobre todo en aquellas que forman parte de una misma región. Creemos que este es un fin no querido por la ley por lo que se impone su corrección en la forma propuesta, que no se subsana con la facultad que se les otorga en el artículo 43.

Es indudable la importancia que tiene este comité en función de la cantidad de zonas francas que se van a crear y sobre todo la ubicación de las mismas, y entre sus facultades estará la de evaluar, coordinar, conciliar y arbitrar los intereses de las provincias y de la nación.